

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL



**DOCUMENTO DE
TRABAJO 09/04, Vol. II
LA HABANA
SEPTIEMBRE / 2004**

Los últimos 40 años de la economía mundial

(Documento preparado a propósito de la 11ª Reunión Ministerial de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD, por sus siglas en Inglés -, celebrada en Sao Pablo, Brasil, junio de 2004).

Dirección

Oswaldo Martínez, Director
Ramón Pichs, Subdirector

Edición

Gladys Hernández
Leonardo Hernández

Diseño

Ivette Miranda

En la preparación de este documento participaron además Katia Cobarrubias, Laneydi Martínez y Gretter Vázquez.

**Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)
Calle 22 No. 309 entre 3ª y 5ª Avenida, Miramar
Habana 13, C. P. 11300, CUBA**

Teléfonos: (537) 209 2969 y 209 4443

Fax: (537) 204 2507

Dirección electrónica: temas@ciem.cu

**Para consultar otras publicaciones, buscar en el sitio Web del CIEM:
www.energia.inf.cu/ciem**

CONTENIDO

	Páginas
Medio ambiente y desarrollo (1964-2004) <i>Ramón Pichs Madruga</i>	4
Petróleo, energía y economía mundial (1964-2004) <i>Ramón Pichs Madruga</i>	24
Pobreza y deterioro social <i>Blanca Muster Infante</i>	42
Economía de los Estados Unidos: una retrospectiva de las últimas cuatro décadas. <i>Faustino Cobarrubia Gómez</i>	52
Una mirada a la economía de Japón: de la post-guerra a la actualidad <i>Ernesché Rodríguez Asien</i> <i>Katia Cobarrubias Hernández</i>	64
Economía e integración en Europa <i>Jourdy James Heredia</i>	74
Tercer mundo. Problemas y desafíos en los albores del nuevo milenio <i>José A. Pérez García</i>	90
La economía de América Latina y el Caribe en las últimas cuatro décadas. Algunas reflexiones críticas <i>José A. Pérez García</i>	104

Medio ambiente y desarrollo 1964-2004

Ramón Pichs Madruga
Subdirector del CIEM

A diferencia de períodos anteriores, desde la década de los años 80 del pasado siglo el tema ambiental ha ocupado un lugar central tanto en el plano teórico como en el proceso de toma de decisiones en diversas partes del planeta. Desde mediados de ese decenio se asiste a un proceso de internacionalización del debate en torno al vínculo entre medio ambiente y desarrollo, que tiene importantes dimensiones políticas, económicas, tecnológicas, sociales, ambientales y humanas. Este proceso de internacionalización tiene sus antecedentes en la evolución de la corriente ecologista desde la década de 1960.

Internacionalización del debate sobre medio ambiente y desarrollo

Antecedentes

Según expertos en esta materia (*Jamison, 1990*), el debate ambientalista y la corriente ecologista internacional han atravesado por cuatro etapas fundamentales antes de desembocar en el actual proceso de internacionalización:

- despegue,
- organización,
- movimientos sociales,
- profesionalización,
- internacionalización.

La década de los años 60 (en particular hasta 1968) es considerada como la etapa inicial de *despegue o despertar* de la corriente ambientalista. En este período comenzaron a evidenciarse diversos problemas ambientales, como efecto acumulado de los patrones de producción y consumo vigentes hasta entonces, sobre todo los aplicados en las cinco primeras décadas del pasado siglo, en que primaba la concepción del medio ambiente como un conjunto ilimitado de recursos o “bienes libres”, que podían ser explotados indiscriminadamente.

Tales patrones se apoyaban en un perfil tecnológico en que predominaban las tecnologías que requerían altos insumos de energía, fertilizantes y agua. Se promovía además una elevada dependencia de los combustibles fósiles, un alto crecimiento poblacional y la disposición de desechos no regulada, entre otras tendencias.

La década de 1960 estuvo particularmente marcada por el debate en torno a varias publicaciones muy difundidas internacionalmente, que llamaban la atención sobre algunos de los problemas ambientales más preocupantes en esos años. Tal fue el caso del libro *"Silent Spring"* (1962) de Raquel Carson, considerado como precursor de la alarma sobre los efectos del DDT y los fertilizantes.

Es precisamente en esos años cuando comienza a difundirse el paradigma de la protección ambiental, que suponía el uso de tecnologías de fase final o "al final del tubo" para controlar la contaminación una vez que ésta se había producido, además de abogar por la utilización preferente de mecanismos administrativos o regulaciones legales para enfrentar el deterioro del entorno. Cabe apuntar, además, que bajo este enfoque, no se fomentaban los vínculos entre la protección del medio ambiente y las políticas de desarrollo; es decir eran considerados como objetivos separados.

Entre finales de los años 60 y mediados de los 70 la corriente ambientalista entró en un *período de organización*.

Uno de los rasgos fundamentales de esa fase de organización fue la creación de agencias o departamentos gubernamentales dedicados a la investigación de los problemas ambientales en casi todos los países capitalistas desarrollados. Además, en 1972 se celebró en Estocolmo (Suecia) la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y se fundó el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA), que fue uno de los primeros promotores del criterio del ecodesarrollo, como intento por incorporar objetivos culturales, sociales y ecológicos en el concepto de desarrollo. De esta forma, se dotó a los esfuerzos y debates en el terreno ambiental de una base institucional.

Cabe recordar que también en 1972 se publicaron los estudios auspiciados por el Club de Roma sobre "Los límites al crecimiento". Según estos estudios, de continuar sin cambios las tendencias de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos naturales, en un período de 100 años se alcanzarían los límites al crecimiento del planeta, con un probable declive, súbito e incontrolable, tanto de la población como de la capacidad industrial.

Ante tales previsiones, los autores de "Los límites al crecimiento" propusieron la rápida modificación de las tendencias del crecimiento y el establecimiento de normas de estabilidad ecológica y económica, que permitiesen alcanzar el equilibrio global de crecimiento cero lo antes posible ya que, según ellos, si se optaba por esperar el equilibrio natural, habría que atravesar por una larga fase de agonía.

Una de las críticas más agudas a este estudio provino de la Universidad británica de Sussex, por considerarse que las conclusiones antes expuestas subestiman al progreso tecnológico. En general, desde su aparición, este polémico estudio ha constituido una obligada referencia en el debate teórico sobre medio ambiente y desarrollo; y es justamente en el contexto de este debate que emerge una literatura neoclásica acerca del agotamiento de los recursos no renovables y del impacto que esta situación tendría sobre el crecimiento económico futuro.

Entre 1975 y 1980, el debate en torno a los problemas ambientales devino un *movimiento ecologista*, que tuvo su centro de principal atención en el tema energético, debido, entre otras cosas, al súbito encarecimiento de la energía en ese período. Este debate entre energía y medio ambiente tuvo amplia repercusión internacional a partir de 1979, al ocurrir el accidente de la planta nuclear de *Three Mile Island*, Pennsylvania, EE.UU.

Con tales precedentes, entre 1981 y 1986 transcurre una etapa en la que se *profesionaliza la conciencia ambientalista* y se aprecia un creciente interés parlamentario en relación con el deterioro ambiental, que se canaliza por la vía de numerosos partidos políticos -"verdes"-, principalmente en el viejo continente. También en esta etapa aumenta notablemente la actividad de numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG), que surgen al calor del debate sobre el medio ambiente.

En este contexto, el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, ocurrido en Ucrania en 1986, puso nuevamente en un primer plano los problemas de la contaminación atmosférica transfronteriza y el debate sobre energía y medio ambiente.

Internacionalización

Desde la década de los años 80 se han hecho más evidentes algunos de los problemas ambientales, de alcance internacional, que más preocupan a la humanidad, tales como el agotamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero, la pérdida de la diversidad biológica, la contaminación urbana, el tráfico transfronterizo de desechos peligrosos, la contaminación de los mares, océanos y zonas costeras y el deterioro ambiental asociado a las condiciones de subdesarrollo y pobreza en que viven las tres cuartas partes de la población mundial. Se calcula que el 80% de los pobres en América Latina, el 60% de los de Asia y el 50% de los de África viven en áreas ecológicamente vulnerables.

Desde finales de los años 80 del pasado siglo se ha difundido ampliamente la *tesis del desarrollo sostenible*, que fuera presentada en el informe *Nuestro Futuro Común*, de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El desarrollo sostenible ha sido definido como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

De acuerdo con algunos autores (*Provencio y Carabias, 1992*), existen por lo menos dos vertientes que alimentaron el enfoque del desarrollo sostenible; de un lado, las corrientes que, sobre todo a partir de comienzos de los años 70, han sometido a revisión el concepto de desarrollo económico y las políticas económicas prevalecientes y, de otro lado, el surgimiento de la crítica ambientalista al modo de vida contemporáneo.

En el decenio del 80, tanto el agravamiento de los problemas ambientales globales, como la agudización de los problemas socioeconómicos internacionales - particularmente, la profunda crisis que afecta a los países subdesarrollados-, aceleraron la confluencia de las dos vertientes antes mencionadas.

Según otros autores (*Pearce y Warford, 1993*), la aparición y difusión de la tesis del desarrollo sostenible en el contexto de la internacionalización del debate ecológico, caracteriza a la segunda revolución ambiental ocurrida en los últimos treinta años. La primera revolución ambiental de este período fue la ocurrida entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, y estuvo marcada por el debate en torno a la calidad ambiental vs. crecimiento económico, al calor de la ya mencionada polémica acerca de "Los límites al crecimiento" (1972).

A diferencia de la primera revolución ambiental, cuando se consideraba al crecimiento y a la conservación del entorno como variables irreconciliables y en conflicto; bajo las condiciones de la segunda revolución ambiental ha cambiado el enfoque, en el sentido de considerar a tales variables como potencialmente compatibles.

En las nuevas condiciones no se cuestiona la necesidad de crecer, pero se discute acerca de cómo crecer; se aprecia un desarrollo mucho mayor de las técnicas para medir los daños y beneficios ambientales derivados de la actividad socioeconómica; y se observa un mayor énfasis en los efectos indirectos de la degradación ambiental, en áreas como la salud, la productividad, y otras. Asimismo, en la actualidad, además de considerarse los problemas ambientales locales, se hace un énfasis mayor que antes en el ámbito global, dada la internacionalización de la problemática ecológica.

Si bien la mayor parte del debate ecológico, durante la primera revolución ambiental, estuvo confinado a los problemas más graves de contaminación de los países desarrollados, en los nuevos tiempos el debate incluye, además, los problemas ambientales y de desarrollo de las naciones subdesarrolladas, y se aprecia un enfoque más integral en cuanto al manejo de los recursos naturales.

En este nuevo contexto, a las preocupaciones en torno al agotamiento de los recursos no renovables, ya presentes a comienzos de los años 70, se suman nuevos temas de discusión como los relativos al manejo de los recursos renovables; lo que resulta de gran significación para los países subdesarrollados, sobre todo en lo referido a recursos tan vitales para la vida de estas naciones como el agua, la biomasa y el suelo.

El concepto de desarrollo sostenible concibe al desarrollo como un proceso armónico, donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben estar a tono con las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Así, se presenta al desarrollo como un proceso que requiere un progreso global en un conjunto de dimensiones -económica, humana, ambiental y tecnológica-, que interactúan entre sí.

A pesar de su rápida aceptación y difusión como expresión concentrada de una "forma de desarrollo" más humana y equitativa, la versión original de esta tesis no está exenta de limitaciones. Ante todo, se destaca el carácter ambiguo de esta tesis, lo que ha condicionado la aparición de múltiples definiciones del desarrollo

sostenible, en función de los intereses de los autores y de las circunstancias concretas de cada caso.

La ambigüedad de esta tesis se pone de manifiesto al identificar las disparidades socioeconómicas prevaletentes en el mundo actual, pero sin reconocer los mecanismos que han generado esa desigualdad. Incluso, en ocasiones se ha calificado a esta tesis como una estrategia pensada desde el Norte industrializado y que, por lo tanto, no incorpora los puntos de vista y prioridades del mundo subdesarrollado.

Muchas veces la tesis del desarrollo sostenible ha sido empleada como pretexto por algunos países desarrollados para justificar la adopción de medidas proteccionistas contra otros estados. Un ejemplo en este sentido es el embargo atunero, decretado en mayo de 1991 por EE.UU. contra las exportaciones de Venezuela, México y las Islas Vanuatu, basado en la Ley de Mamíferos de EE.UU. Este embargo fue declarado ilegal por el GATT.

Con frecuencia, el concepto de desarrollo sostenible es presentado como la promesa de reconciliar la igualdad social, el crecimiento económico, las fuerzas del mercado y la conservación del medio ambiente, que abre un paso común para la unión de los intereses del Norte y del Sur. Partiendo de este enfoque puede comprenderse sin mucha dificultad no sólo el aire de nueva utopía con que se le presenta, sino además el peligro que entraña para el futuro socioeconómico de los países subdesarrollados la idea de un "mercado verde", que legitime el derecho de los principales contaminadores a seguir deteriorando el entorno.

También se ha cuestionado el énfasis que hace la tesis del desarrollo sostenible en la equidad intergeneracional, en detrimento de la equidad intrageneracional. En este sentido, cabe señalar que para la mayoría de la población mundial, residente en el área subdesarrollada, resulta muy difícil pensar en la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones cuando sus requerimientos básicos del presente no están cubiertos.

Otra de las limitaciones de la tesis del desarrollo sostenible es la sugerencia de que las mismas agencias multilaterales, dominadas por los países industrializados y responsables en gran medida de las actividades que erosionan al medio, podrían liderar la transición hacia un desarrollo armónico, equitativo y ambientalmente seguro.

En este contexto de internacionalización del debate ambientalista, que cobra especial fuerza desde mediados de la década de 1980, los países desarrollados han insistido en el tratamiento por separado de los problemas del medio ambiente y del desarrollo. Estos países, además de capitalizar en su favor los trascendentales cambios ocurridos en la correlación de fuerzas económicas y políticas a nivel internacional, persisten en su propósito de evadir sus responsabilidades ambientales y realizan grandes esfuerzos por desviar la atención internacional hacia aquellos temas ambientales que son de su interés, sin tener en cuenta debidamente los objetivos y prioridades de las naciones subdesarrolladas.

Desarrollo, equidad y sostenibilidad desde la perspectiva Norte-Sur

Durante las últimas décadas, los temas referidos al desarrollo, la equidad y la sostenibilidad han recibido especial atención en el contexto del debate internacional acerca de la dimensión ambiental de la globalización.

El desarrollo sostenible debe ser analizado en el contexto del debate más amplio acerca del desarrollo.

A pesar de su ambigüedad, el concepto de desarrollo sostenible asume que los objetivos económicos y sociales del desarrollo deben ser definidos en términos de sostenibilidad. Tomando como punto de partida los conceptos de desarrollo sostenible (Comisión de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo) y desarrollo humano (PNUD), pueden identificarse tres dimensiones básicas e interrelacionadas del desarrollo, que constituyen aspectos complementarios de una misma agenda: *sostenibilidad económica, social y ambiental*.

Por tanto, con un enfoque integral, el desarrollo sostenible debe ser definido como un proceso multidimensional, que debe ser "sostenible" en términos económicos, sociales y ambientales; y donde cada una de estas dimensiones constituye una condición necesaria aunque no suficiente para la sostenibilidad.

Dimensiones económica y social

Tradicionalmente, el concepto de desarrollo ha tenido una connotación eminentemente económica y, en consecuencia, los planes de acción y políticas adoptadas se han centrado casi exclusivamente en el crecimiento económico, en detrimento de las dimensiones social y ambiental. En esas condiciones, los patrones insostenibles de crecimiento económico que se han seguido han tendido a reforzar la inequidad y el deterioro ambiental, sobre todo teniendo en cuenta que tales patrones han prevalecido durante largos períodos de tiempo.

La corriente económica neoclásica siempre ha argumentado que el crecimiento económico es esencial para la reducción de la pobreza de ingreso y el mejoramiento de la calidad ambiental; pero el crecimiento no estimula automáticamente el desarrollo social y ambientalmente seguro. De hecho, no siempre los países que tienen más altos niveles de ingreso per cápita registran los mejores indicadores sociales y ambientales.

A partir del enfoque convencional (neoliberal) acerca de la relación entre crecimiento, equidad y medio ambiente, podría inferirse que no existe incompatibilidad entre crecimiento, y equidad / calidad ambiental, pero que primero es necesario crecer, para luego progresar, de manera automática, en términos de equidad y calidad ambiental, con lo que las políticas sociales y ambientales quedarían relegadas a un segundo plano.

Luego de dos décadas de predominio de las corrientes neoliberales a escala global, los resultados registrados en materia económica, social y ambiental son decepcionantes, sobre todo si se analizan desde la perspectiva Norte-Sur.

En el plano económico, la brecha que separa a los países desarrollados y subdesarrollados continúa siendo preocupante. Los países subdesarrollados con cerca del 78% de la población mundial aportan sólo el 20% de las exportaciones de bienes y servicios y el 38% del PIB global; mientras que a los países desarrollados con alrededor del 15% de la población mundial les corresponde el 75% de las exportaciones totales y más del 56% del PIB global.

Sólo EE.UU., con menos del 5% de la población del mundo, registra niveles de PIB y exportaciones que casi duplican los registros agregados correspondientes de toda América Latina y África, que en su conjunto representan más del 20% de la población mundial.

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los países subdesarrollados son afectados por serias restricciones comerciales y financieras, vinculadas directa o indirectamente a la elevada deuda externa que gravita sobre sus economías y que ya supera los 2,5 millones de millones de dólares. En los años 1992-2000, los países subdesarrollados destinaron unos 264 mil millones de dólares, como promedio anual, sólo al pago del servicio de su deuda externa; y en 2001-2003 dicho monto ascendió a unos 318 mil millones de dólares anuales.

En un mundo crecientemente interconectado por la informática y las telecomunicaciones, las regiones subdesarrolladas aún registran un elevado grado de marginación.

Tales disparidades en el orden económico se traducen en grandes inequidades en el plano social, que se expresan en un creciente número de pobres e indigentes en las áreas más subdesarrolladas del planeta e incluso en la proliferación de cinturones de pobreza en los propios países desarrollados.

Entre países desarrollados y subdesarrollados se pueden apreciar grandes diferencias en términos de equidad. Atendiendo a los niveles de ingreso per cápita, en la actualidad se reportan 1200 millones de personas en los países subdesarrollados que continúan subsistiendo con menos de un dólar diario, de los cuales cerca de la mitad reside en Asia meridional, según datos de Naciones Unidas. Se calcula, además, que unos 2800 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día.

Por demás, la pobreza de ingresos se asocia a registros negativos en los principales indicadores de salud, educación, alimentación, vivienda y otras áreas básicas del desarrollo humano. De acuerdo con estimados de las Naciones Unidas (2000), el déficit mundial para lograr la prestación universal de servicios básicos en los países subdesarrollados asciende a 80 mil millones de dólares anuales, cifra equivalente a la cuarta parte del pago promedio anual de los países subdesarrollados por concepto de servicio de la deuda externa en los últimos años.

Esta situación podría agravarse considerablemente en los próximos 25 años, sobre todo si se tiene en cuenta que casi 2 mil millones más de personas se

sumarán a la población mundial, y casi todo ese aumento tendrá lugar en los países subdesarrollados.

Los problemas globales (económicos, sociales, ambientales y otros) tienden a traducirse en mayores daños y riesgos para las regiones más pobres, lo cual podría exacerbar las inequidades, en ausencia de medidas compensatorias.

Además, aunque todos los Estados son iguales ante la ley y deben recibir igual tratamiento, la equidad no implica necesariamente igualdad, pues en muchos casos, un tratamiento igualitario a países con diferente grado de desarrollo sería inequitativo.

Como se expresa en el Informe Brundtland (1987), en la medida en que un sistema se aproxima a sus límites ecológicos, las inequidades se agudizan. La incapacidad para promover el interés común en el desarrollo sostenible es, con frecuencia, un resultado de la negación de la justicia económica y social dentro y entre las naciones. Las relaciones que no son equitativas y que se basan en la dominación de un tipo u otro, no son una base sólida y duradera para la interdependencia. La inequidad puede exacerbar los conflictos relacionados con el control de los recursos naturales y el medio ambiente.

Dimensión ambiental

Considerando el carácter global de muchos de los fenómenos ambientales que más preocupan a la humanidad, la interrelación que existe entre ellos y la creciente brecha socioeconómica que caracteriza a las relaciones Norte-Sur, una solución duradera a los problemas ambientales globales pasa necesariamente por una profunda reestructuración de las relaciones económicas y políticas internacionales, sobre bases de equidad y justicia social

Al propio tiempo, resulta indispensable fortalecer la identidad de cada país y su capacidad para diseñar y poner en práctica estrategias propias de desarrollo socioeconómico, que permitan asegurar la expansión sostenida de la producción, hacer frente a los graves problemas sociales, corregir los problemas ambientales del pasado y evitar un ulterior deterioro del medio ambiente, en función de los recursos disponibles.

El hecho de que los principales problemas ambientales actuales tengan un carácter global, tiende a unir a los estados en la búsqueda de soluciones comunes; sin embargo, esta convergencia suele ser contrarrestada por la falta de consenso a la hora de establecer responsabilidades concretas a nivel internacional.

Así, por ejemplo, las negociaciones relacionadas con la Cumbre de Río de Janeiro (1992) sobre medio ambiente y desarrollo y con la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) estuvieron marcadas por la reticencia de los países industrializados, a asumir compromisos concretos relacionados con la transferencia de tecnologías y los recursos financieros requeridos por los países subdesarrollados. En el contexto actual, el avance del Tercer Mundo en materia de

desarrollo sostenible requiere, ante todo, de un clima comercial y monetario financiero internacional que sea equilibrado y no discriminatorio.

En materia financiera, la Agenda 21 (Programa de Acción sobre medio ambiente y desarrollo, aprobado en la Cumbre de Río de Janeiro) se destaca que los países del Tercer Mundo requerirían unos 125 mil millones de dólares anuales, procedentes de fuentes externas, sin considerar el aporte que deben realizar los propios países subdesarrollados. Sin embargo, al concluir la Cumbre de Río sólo existían compromisos por unos 6-8 mil millones de dólares y desde entonces los desembolsos reales han sido extremadamente limitados. Entre 1994 y 1997, los recursos a disposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, principal mecanismo de financiamiento en esta esfera, sólo ascendían a unos 2 mil millones de dólares; y su presupuesto para 1998-2002 fue de 2,75 mil millones de dólares.

Además, en condiciones en que la deuda externa de este grupo de países ha continuado creciendo hasta superar los 2,5 millones de millones de dólares, la proporción que representa la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) con relación al PNB de los países industrializados cayó de 0,34% en 1992 a 0,27% en 1995, y apenas 0,23% en 2002, frente a un compromiso internacional de aportar el 0,7% del PNB de los países desarrollados para tales fines.

En lo referido a los mecanismos para canalizar los recursos financieros internacionales destinados al desarrollo sostenible, después de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) los países subdesarrollados han continuado insistiendo en que se garantice la universalidad de la membresía del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, así como la participación de las tres agencias que lo integran (Banco Mundial, PNUD y PNUMA) en igualdad de condiciones, y una total transparencia y acceso a la información requerida.

La internacionalización del debate sobre medio ambiente y desarrollo ha coincidido en el tiempo con el auge del discurso y las prácticas neoliberales a nivel mundial. En estas condiciones, la idea acerca del "mercado verde", o sea la aplicación de fórmulas neoliberales para resolver los problemas ambientales, también ha cobrado especial auge en los últimos años.

En este sentido, pudiera destacarse el impacto ambiental altamente nocivo de los programas de ajuste macroeconómico, recomendados por el FMI a los países deudores. Estos programas de corte neoliberal no sólo tienen un alto costo ambiental directo, por la vía de la contracción de los presupuestos para fines ecológicos; sino que, además, contribuyen a agravar los desequilibrios sociales, en especial la pobreza. De esta forma también contribuyen, indirectamente, a la degradación del medio.

Hasta el momento, las escasas iniciativas que pretenden vincular la solución al problema de la deuda y la protección del medio en el Tercer Mundo han tenido un alcance muy limitado. Tal es el caso de los *canjes de deuda por naturaleza*, según las condiciones del mercado secundario de deudas. Entre mediados de los años 80 y comienzos de los 90, que fue el período de mayor auge de las operaciones de

cambio de deudas por naturaleza, el monto de deuda involucrado fue de apenas 100 millones de dólares para el conjunto de los países subdesarrollados.

Entre las limitaciones de este "novedoso" instrumento financiero debe considerarse, además de su sesgo inflacionario, que en algunos casos, los acuerdos logrados pueden limitar los derechos del gobierno deudor sobre determinadas áreas protegidas o recursos naturales. También puede suceder que los proyectos acordados no sean los que más interesan al país deudor, sino los más atractivos para la institución o gobierno extranjero que actúe como contraparte.

A juzgar por lo antes expuesto, los canjes de deuda por naturaleza están lejos de ser el mecanismo idóneo para vincular la solución al problema de la deuda externa con los esfuerzos para enfrentar los problemas ambientales de los países subdesarrollados.

En años más recientes, se han debatido ampliamente diversas propuestas para aplicar nuevos mecanismos de mercado a nivel internacional como parte de las estrategias de respuesta ante los principales problemas ambientales globales. No obstante, aún persisten importantes barreras técnicas, institucionales y políticas para su aplicación.

En el contexto de las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por ejemplo, los países desarrollados, en un intento por eludir, al menos parcialmente, sus responsabilidades internacionales, han liderado los esfuerzos por generalizar la aplicación de ciertos mecanismos de mercado a nivel internacional. El Protocolo de Kyoto, de dicha Convención, adoptado en diciembre de 1997, incluye tres de los llamados "mecanismos de flexibilidad", como instrumentos para hacer cumplir los objetivos de la Convención, en lo referido al control de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con relación a la aplicación de mecanismos de mercado a nivel internacional, es decir, entre países con niveles de desarrollo tan disímiles, debe tenerse en cuenta que, en ausencia de un marco regulatorio adecuado, erosionarían significativamente las ventajas potenciales que se les atribuyen a dichos mecanismos en materia de transferencia de tecnologías y de recursos financieros para el desarrollo sostenible.

Los países subdesarrollados deben sopesar adecuadamente las oportunidades y retos que pudieran derivarse de la aplicación de tales mecanismos de mercado a nivel internacional. Asimismo, en las negociaciones internacionales los países subdesarrollados deben abogar por un marco regulatorio adecuado, de tal forma que las estrategias de respuesta ante los problemas ambientales globales aseguren los flujos de tecnologías ambientalmente idóneas y de recursos financieros que se ajusten a los requerimientos del mundo subdesarrollado, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo. Adicionalmente, esas estrategias de respuesta deben contribuir a modificar sustancialmente los patrones de producción y consumo a escala internacional, teniendo en cuenta los distintos niveles de responsabilidad histórica de cada grupo de países.

Sin dejar de considerar el sabor amargo y la profunda decepción que dejó en muchos la falta de compromisos concretos que caracterizó a la Cumbre de Río de Janeiro (1992), debe señalarse que posiblemente el principal logro de esa conferencia fue el reconocimiento de que la protección ambiental y el desarrollo económico requieren soluciones globales. Por vez primera se logró consenso al más alto nivel gubernamental para adoptar un nuevo enfoque sobre el desarrollo, en que la erradicación de la pobreza y la protección del medio estén estrechamente vinculadas.

Ya en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano (Estocolmo/72), los países subdesarrollados habían demandado la incorporación de los problemas del desarrollo en la agenda del cónclave y lograron cierto éxito en sus empeños, aunque en los años posteriores a esa conferencia, los aspectos relacionados con el desarrollo han sido temas secundarios y casi nunca tomados en cuenta seriamente.

Un balance de lo acontecido a escala mundial en los más de 10 años transcurridos desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), pasando por la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, (2002), revela que, sobre todo en los últimos años, el acelerado deterioro ambiental ha coincidido con la erosión aún mayor de la siempre escasa voluntad política de los países desarrollados para contribuir a la solución de los problemas ambientales.

En este contexto, la degradación ambiental está provocando, entre otras cosas, desastres naturales cada vez más severos, que durante la pasada década se tradujeron, según reportes recientes, en un costo ascendente a unos 608 miles de millones de dólares; cifra comparable al monto combinado de las cuatro décadas anteriores. Como es de suponer, las mayores afectaciones se concentran en las regiones más pobres del planeta, que son además las más vulnerables desde el punto de vista económico, social y ecológico para enfrentar situaciones o eventos ambientales extremos.

Un análisis integral de la relación entre medio ambiente y desarrollo en el actual contexto internacional debe tomar en consideración la deuda ecológica del mundo desarrollado y la persistencia de un entorno de subdesarrollo, pobreza y deterioro ambiental, que afecta a las tres cuartas partes de la humanidad.

Por un lado, los patrones de desarrollo seguidos por los países industrializados han ocasionado los mayores daños al ecosistema, sobre todo si se analiza el deterioro del medio desde una perspectiva histórica. Estos países que sólo cuentan con el 25% de la población total, controlan las cuatro quintas partes del ingreso mundial, y consumen el 75% de los recursos naturales que se comercializan: 70% de la energía, 75% de los metales y 85% de la madera, entre otros.

En este sentido, cabe destacar que las empresas transnacionales (que en su mayoría tienen sus casas matrices en los países desarrollados) y sus filiales extranjeras produjeron el 25% de la producción mundial a finales de la pasada década, y las 100 firmas más importantes (según su patrimonio en el extranjero)

tuvieron ventas valoradas en unos 4 millones de millones dólares. La actividad de estas empresas tiene un impacto significativo sobre el medio ambiente.

De acuerdo con estimados del PNUD, a finales de la pasada década el 20% más rico de la población mundial, residente en los países de mayor ingreso absorbía:

- 86% del total de gastos en consumo privado (frente a sólo 1,3% captado por el 20% más pobre de la población mundial);
- 45% de toda la carne y el pescado (apenas 5% fue captado por la quinta parte más pobre de la población);
- 58% de toda la energía (sólo 4% correspondió al 20% más pobre);
- 84% de todo el papel (1% fue utilizado por la quinta parte más pobre); y
- 87% de la flota mundial de vehículos (1% los más pobres).

Según datos correspondientes a los años 90, se calcula que en el curso de su vida, un habitante de los EE.UU. consume como promedio 540 toneladas de materiales de la construcción, 18 toneladas de papel, 23 toneladas de madera, 16 toneladas de metales y 32 toneladas de productos químicos de origen orgánico, lo que refleja patrones extravagantes de consumo frente a las realidades de los países subdesarrollados.

Este país, con una población de unos 280 millones de personas, 4,8% del total mundial a finales de los años 90, absorbe porciones significativas del consumo mundial de importantes materias primas como el acero (13%), níquel (16%), zinc (16%), cobre (24%), plomo (26%) y aluminio (27%). Adicionalmente, el consumo per cápita de energía comercial de los EE.UU. supera en más de cinco veces a la media mundial.

En correspondencia con las estadísticas antes expuestas, la quinta parte de la población mundial que vive en los países de mayor ingreso es la que genera la mayor parte de la contaminación del medio ambiente global. En el caso de las emisiones de CO₂, les corresponde más del 50%; y sólo EE.UU. emite más del 22% de este gas de efecto invernadero. Cada habitante de los EE.UU. emite como promedio al año casi 20 toneladas de CO₂; es decir, más de nueve veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo y casi 8 veces las emisiones per cápita de un latinoamericano y caribeño medio.

Adicionalmente, EE.UU. emite unos 63,7 Kg. per cápita de dióxido de azufre (SO₂) por año, es decir, 38% más que el promedio correspondiente a los países de la OCDE; genera desechos nucleares equivalentes a 2,700 toneladas métricas de metal pesado por año; y libera alrededor de 173 millones de toneladas métricas anuales de residuos peligrosos según datos correspondientes a la pasada década, publicados por el PNUD en años recientes.

Por otro lado, la pobreza ha sido identificada como uno de los principales obstáculos para un desarrollo ambientalmente seguro ya que la mayoría de los pobres (60%) viven en áreas ecológicamente vulnerables.

En muchas ocasiones, estas poblaciones, que viven en condiciones de absoluta pobreza, no tienen otra alternativa que depredar el medio ambiente para intentar

sobrevivir y, como se trata de economías subdesarrolladas y altamente dependientes de las exportaciones de productos básicos, al erosionarse el medio se afectan sensiblemente las principales fuentes de ingresos exportables. Se estima que alrededor del 45% de los ingresos por exportación del Tercer Mundo corresponde a los productos básicos y en el caso de la región africana esta proporción asciende al 90%. Los muy desiguales niveles de distribución del ingreso entre el Norte y el Sur constituyen uno de los mayores obstáculos para un desarrollo sostenible a nivel global.

En este contexto, las preocupaciones ambientales inmediatas de los países desarrollados difieren considerablemente con relación a las de los países subdesarrollados. Mientras que en los estados industrializados lo que está en peligro es la calidad de la vida; en las naciones subdesarrolladas lo que se defiende es el derecho a la vida y, por tanto, las principales preocupaciones ambientales de este segundo grupo de países están relacionadas con problemas tan acuciantes como la calidad del agua y la protección del suelo.

En este contexto, no resulta casual que el número de refugiados por razones ambientales ascienda a unos 25 millones de personas, según estimados recientes. Entre otros problemas, resultan particularmente preocupantes las presiones a que están sometidos importantes recursos naturales, como los suelos y las reservas de agua dulce en las naciones subdesarrolladas.

Se estima que la *degradación del suelo* ha afectado a unos 1900 millones de hectáreas de tierras en todo el mundo, con impactos muy negativos especialmente para las economías subdesarrolladas, altamente dependientes de las actividades agrícolas. Se calcula que en los años 90, unos 1035 millones de hectáreas de las llamadas "tierras secas susceptibles" del mundo (20% de este tipo de tierras) estaban afectadas por la degradación de los suelos provocada por el hombre y de ese total, 45% estaba afectado por la erosión del agua, 42% por la erosión del viento, 10% por el deterioro químico y 3% por el deterioro físico de la estructura de los suelos.

Con relación a los *recursos de agua dulce*, el crecimiento del consumo mundial de este recurso vital más que duplicó a la tasa de crecimiento poblacional durante el siglo XX; y cerca de la tercera parte de la población mundial, ubicada preferentemente en naciones del Tercer Mundo, vive en países con problemas moderados o severos de falta de agua. Esta cifra podría ascender a dos terceras partes en el año 2025, con serias afectaciones sobre todo para países africanos y de Asia Occidental.

Diversas fuentes especializadas consideran que la disminución de recursos de agua dulce, en términos de cantidad, y el deterioro de su calidad podría llegar a ser el problema dominante en materia de medio ambiente y desarrollo en el siglo XXI, según reportes recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Alrededor del 50% de la población mundial carece de sistemas adecuados de saneamiento; y en general, entre el 30% y el 60% de la población urbana de los

países de bajos ingresos siguen sin disponer de viviendas adecuadas con acceso a los servicios básicos. Se calcula que a nivel global las aguas contaminadas influyen en la salud de aproximadamente 1200 millones de personas y contribuyen al fallecimiento de unos 15 millones de niños cada año.

De acuerdo con estimados del Banco Mundial, se requerirían inversiones del orden de los 600 mil millones de dólares en infraestructura para el suministro de agua en los próximos diez años. En los últimos años han proliferado los negocios privados en el suministro de agua y en los servicios de saneamiento; y en 1990-1997 los gastos de capital del sector privado en estas actividades ascendió a unos 25 mil millones de dólares, frente a sólo 297 millones de dólares en 1984-90. Estas inversiones privadas tienden a concentrarse en las áreas urbanas más prósperas y por tanto más atractivas, quedando relegadas las zonas más pobres y de difícil acceso.

En franco contraste con las aspiraciones de equidad y justicia en las relaciones internacionales, el "orden mundial" que se va imponiendo en las esferas económica y política, tiene un marcado carácter asimétrico, lo que obstaculiza el avance hacia una solución integral de los problemas del medio ambiente y el desarrollo.

Un orden mundial, donde un reducido número de países imponen las reglas del juego al resto de la comunidad internacional resulta incompatible con el necesario enfoque integral y participativo que se requiere a la hora de establecer compromisos internacionales en materia de cooperación internacional, lucha contra la pobreza, ayuda financiera a los países subdesarrollados, transferencia de tecnologías ambientalmente idóneas, entre otros.

Así las cosas, no cabe dudas que a pesar del consenso generalizado alcanzado en Río de Janeiro/92 en relación con la necesaria integración entre las políticas de medio ambiente y desarrollo; aún se alzan fuertes obstáculos para aplicar en gran escala los criterios de sostenibilidad. Muchos de estos obstáculos se mantendrán mientras persista un "orden" mundial asimétrico y no se pongan en práctica nuevas fórmulas de cooperación internacional que tengan como base el reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países altamente industrializados con el deterioro ambiental global y con el colapso socioeconómico del mundo subdesarrollado.

La agenda 21 y las principales Convenciones Ambientales

Uno de los documentos fundamentales aprobados en la Cumbre de Río y endosado por la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) fue la *Agenda 21*, considerada como un plan general de acción mundial, que contiene estrategias para prevenir el deterioro del medio ambiente y establecer las bases para un desarrollo sostenible a escala planetaria en el siglo XXI. Con el propósito de dar un seguimiento efectivo a los acuerdos de la Cumbre -en especial a lo expresado en la Agenda 21-, en 1992 se establece la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), que se ha reunido anualmente para evaluar el cumplimiento de lo acordado.

La Agenda 21 dedica especial atención al financiamiento para el desarrollo sostenible, la transferencia de tecnologías idóneas, el cambio de los patrones de

producción y consumo insostenibles, la lucha contra la pobreza, el fomento de la cooperación internacional, el desarrollo de capacidades técnicas, financieras e institucionales internas en los países subdesarrollados, entre otros temas, en los que lejos de registrarse un progreso significativo, más bien se ha retrocedido a nivel internacional en los últimos diez años.

El debate y las negociaciones sobre medio ambiente y desarrollo durante el período post-Río se han enriquecido notablemente con la participación de un número creciente de *organizaciones no gubernamentales ambientalistas (ONGA)*, orientadas en muchos casos a fomentar experiencias comunitarias de desarrollo sostenible y educación ambiental. Aún considerando su enorme dispersión y heterogeneidad, muchos de estos grupos ambientalistas sintetizan los esfuerzos y prioridades de amplios sectores y grupos de la población (campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas, etc.), que por lo general son excluidos del proceso de toma de decisiones en sus respectivos países, y que son portadores de propuestas alternativas en cuanto a desarrollo tecnológico, patrones de producción y consumo, formas y medios de financiamiento, entre otras cuestiones.

Como se indicó antes, durante los últimos años se han hecho mucho más evidentes algunos de los problemas ambientales globales que más preocupan a la humanidad. Con el objetivo de mitigar algunos de estos problemas ambientales, a partir de la Cumbre de la Tierra se han adoptado nuevas convenciones internacionales y se han reforzado las ya existentes.

La *Convención sobre Diversidad Biológica*, que entró en vigor en 1993, refleja un cambio de actitud en la estrategia global para la conservación de la biodiversidad; es decir, se procura satisfacer las necesidades humanas de recursos biológicos y, simultáneamente, asegurar la sostenibilidad a largo plazo del capital biológico de la Tierra. Esta Convención tiene tres objetivos básicos, que son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de dicho uso. Esta Convención ha sido ratificada por más de 180 países, con la notoria exclusión de EE.UU. que no la ha ratificado.

Con relación a la importancia estratégica de los recursos de biodiversidad, debe tenerse en cuenta, entre otras consideraciones, que todos los años se derivan medicamentos por un valor superior a los 100 mil millones de dólares de las plantas y de los animales de los bosques del mundo. Se estima además que unos 3 mil millones de personas dependen de los medicamentos tradicionales como fuente principal de medicinas.

Hasta el momento, el avance operativo de esta Convención ha sido insuficiente, lo que resulta preocupante, dada la persistencia de una pérdida creciente de la diversidad biológica a escala global. Se estima que el número total de especies sobre la Tierra es de entre 13 y 14 millones, y de esas especies sólo 1,75 millones han sido descritas. Se estima que el 90% del total de especies existentes tienen su hábitat en las selvas tropicales húmedas, que cubren alrededor del 8% de la superficie terrestre del planeta. Así, las regiones más ricas en biodiversidad son áreas subdesarrolladas de África, Asia-Pacífico y América Latina.

Las especies de algunos grupos de plantas y animales se están extinguiendo a un ritmo de entre 50 y 100 veces más rápido que la velocidad media natural prevista, y por tanto cada año se pierden unas 50 mil especies de plantas y animales.

Entre los factores que han provocado la destrucción del hábitat natural de la flora y la fauna silvestre, y pérdidas de la biodiversidad se encuentran la deforestación y los incendios forestales, el cambio climático, la contaminación ambiental y la introducción de especies exóticas. La amplia difusión de la agricultura intensiva, ha significado en muchos casos el desplazamiento de variedades locales por otras genéticamente uniformes, con las consecuentes afectaciones para la biodiversidad.

En el diseño de estrategias para la conservación de la biodiversidad, no debe relegarse la solución a los problemas de pobreza que afrontan sectores mayoritarios de la población en regiones ricas en biodiversidad. Cabe destacar que en las 25 “zonas críticas” para la protección de la biodiversidad, identificadas por la organización “Conservación Internacional”, residen 1100 millones de personas, con una tasa de crecimiento poblacional que supera, como promedio, a la media global; y un alto grado de dependencia de la agricultura.

Las afectaciones en el ambiente marino costero y en las aguas interiores son provocadas en gran medida por la destrucción del hábitat, la contaminación y la pesca excesiva. En este sentido cabe destacar, por ejemplo, que alrededor del 60% de las poblaciones de peces se ha sobreexplotado. Asimismo, más de la mitad de los arrecifes coralinos del mundo están amenazados por la actividad del hombre.

Con relación a las zonas marinas y costeras, debe tenerse en cuenta que más de la tercera parte de la población mundial vive a menos de 100 km de un litoral y aproximadamente, mil millones de personas dependen de la pesca como principal fuente de proteínas. En América Latina y el Caribe, 60% de la población y 60 de las 77 mayores ciudades se ubican cerca de la costa.

Otro de los resultados de la Cumbre de Río fue la *Declaración de principios sobre los bosques*, es decir un conjunto de directrices para el ordenamiento sostenible de los bosques a nivel mundial.

Más de un 80% de los bosques que recubrían la Tierra han sido talados, fragmentados o degradados de una u otra forma; y un 39% de los bosques naturales remanentes se encuentran bajo peligro de deforestación. De la superficie total de bosques de 3500 millones de hectáreas, algo más de la mitad se encuentra en los países subdesarrollados. Se estima que un total de 13,7 millones de hectáreas de bosques, son talados o incendiados cada año con grandes afectaciones registradas en América Latina, África y Asia. La deforestación se ha reforzado en las últimas décadas como resultado de la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción de madera con fines comerciales, y la utilización con fines energéticos en zonas pobres, entre otros factores.

En 1995 se estableció el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Bosques, donde se ha abogado por continuar el diálogo intergubernamental sobre políticas forestales, pero no se ha logrado acuerdo en aspectos tan cruciales como la asistencia financiera, los aspectos comerciales y las negociaciones para una convención global sobre los bosques.

En estas negociaciones, mientras los países desarrollados insisten en la necesidad de conservar a toda costa los bosques tropicales húmedos, ubicados preferentemente en naciones subdesarrolladas, la mayoría de los países subdesarrollados se han pronunciado contra aquellas propuestas que puedan erosionar el control soberano de cada país sobre los bosques y los productos forestales.

Adicionalmente, los países subdesarrollados han destacado la necesidad de adoptar un enfoque integral sobre los bosques, que considere los requerimientos de financiamiento adicional, el acceso a tecnologías ambientalmente idóneas, programas concretos para combatir la pobreza y asegurar los beneficios a las comunidades locales, la garantía de que las medidas comerciales con fines ambientales no enmascaren barreras comerciales no arancelarias, y la inclusión en las negociaciones de los distintos tipos de bosques, no sólo tropicales, sino también los templados y boreales.

Considerando que la desertificación afecta a la sexta parte de la población mundial y a la cuarta parte del área terrestre del planeta, en el período post-Río se adoptó la *Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación*, que entró en vigor en diciembre de 1996. En la actualidad más de 170 países han ratificado esta Convención.

La desertificación avanza sobre tierras agrícolas a ritmos de más de 6 millones de hectáreas anuales, lo que representa una importante amenaza para las zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas del planeta, que cubren alrededor del 40% de la superficie terrestre y constituyen el hábitat de más de 1 mil millones de personas.

También durante el período posterior a la Cumbre de Río, los países firmantes de la *Convención de Basilea* sobre movimientos de residuos peligrosos (1989) decidieron introducir reglamentaciones más estrictas a nivel internacional, entre las que se incluye la prohibición absoluta de la exportación de residuos peligrosos a países no miembros de la OCDE, aprobada en 1994. No obstante, la entrada en vigor de esta prohibición entraña el riesgo de que, aún cuando sea efectiva, estimule una mayor exportación de industrias contaminantes hacia los países subdesarrollados, de tal forma que los residuos peligrosos sean generados en esos países y no haya necesidad de trasladarlos.

Asimismo, las partes firmantes de la *Convención de Viena* para la protección de la capa de ozono (1985) y del *Protocolo de Montreal* sobre sustancias nocivas para la capa de ozono (1987) acordaron un calendario más estricto de actividades. Bajo las provisiones de estos acuerdos internacionales, el 1º de enero de 1996 debió concluir la producción de clorofluorocarbonos (CFC) en los países desarrollados; en tanto

que los países subdesarrollados tendrían un período de gracia de 10 años para eliminar la producción de esos gases.

Se estima que globalmente el deterioro de la capa de ozono ocurre a un ritmo de 3% por década, y se considera que una de sus consecuencias principales es el incremento de las radiaciones ultravioleta, lo que puede provocar quemaduras, cáncer en la piel, depresión del sistema inmunológico y ceguera. Se calcula que cada punto porcentual de disminución de la columna de ozono aumentará la incidencia de cataratas y glaucoma en un 0,6%-0,8%, lo que implica unos 100 mil a 150 mil nuevos casos de ceguera en el mundo.

Aún considerando que se cumpla lo acordado en el Protocolo de Montreal, para eliminar la producción de clorofluorocarbonos (CFC), las emisiones anteriores de estos gases continuarían erosionando la capa de ozono estratosférico durante décadas, y la completa recuperación de dicha capa no ocurriría antes del año 2100.

Diversas fuentes internacionales se refieren a las altas temperaturas, que caracterizaron a los años 80 y 90, como una posible consecuencia del reforzamiento del *efecto invernadero*. En efecto, los 10 años más calurosos de los últimos 130 años se ubican en este período. En este sentido, *Convención Marco sobre el Cambio Climático*, puesta en vigor en 1994 y ratificada por más de 165 países, busca controlar las emisiones de los principales gases que contribuyen al efecto invernadero, tales como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos. A finales del decenio de los años 90, las emisiones anuales de dióxido de carbono cuadruplicaban el nivel del año 1950.

En el presente, los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural), que representan alrededor del 90% del balance mundial de energía comercial, son responsables del 80% de las emisiones globales de dióxido de carbono, principal gas del *efecto invernadero*. Según estimaciones del PNUD, se requerirían inversiones anuales del orden de los 200 mil millones de dólares, sólo para reestructurar el sistema energético global sobre bases sostenibles. En ausencia de políticas efectivas para reducir el consumo de combustibles fósiles, para el año 2010 esos portadores energéticos aportarían las tres cuartas partes de la energía comercial demandada, aún considerando un crecimiento de las fuentes renovables de energía.

No debe olvidarse que mientras los países desarrollados han basado su desarrollo en el despilfarro de los combustibles fósiles y son los principales responsables históricos de las emisiones de gases de efecto invernadero, alrededor de 2 mil millones de personas, ubicadas en países subdesarrollados, todavía dependen de los combustibles tradicionales como la leña, y entre 1500 y 2000 millones de personas no tienen acceso a servicios de electricidad. Existen pocos indicios de que los países desarrollados hayan adoptado las medidas necesarias para hacer efectivos los compromisos de reducir sus emisiones de CO₂ para el 2008-2012, con relación a los niveles de 1990, como establece el Protocolo de Kyoto, y EE.UU. se ha negado a ratificar dicho Protocolo.

En sentido general, el balance del período post-Río confirma que la solución a los dilemas económicos, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad a inicios del

nuevo milenio, supone el diseño de estrategias de desarrollo sostenible que reconozcan la necesaria integración entre los problemas económicos, sociales y ambientales, como dimensiones que se complementan y refuerzan entre sí. Desde una perspectiva de largo plazo y con un enfoque integral, el crecimiento económico resulta incompatible con rezagos en términos de equidad y calidad ambiental.

Bibliografía

- CEPAL, 1992. *Equidad y Transformación Productiva: un enfoque integrado*, CEPAL, Santiago de Chile.
- Clapp, J., "The Toxic Waste Trade with Less-Industrialised Countries: Economic Linkages and Political Alliances", *Third World Quarterly*, vol. 15, No. 3, 1994.
- CMCC (1997), *Protocolo de Kyoto de la CMCC*, Kyoto, FCCC/CP/1997/L.7/Add.1.
- CNE (Climate Network Europe), *An NGO Guide to the Global Environment Facility*, Bruselas, 1996.
- International Institute for Sustainable Development, *Earth Negotiations Bulletin*, varios números.
- IIED (International Institute for Environment and Development), *OPINION World Summit on Sustainable Development*, 2002 (Sitio WEB: www.iied.org).
- IMF, *World Economic Outlook*, abril 2002 (Sitio WEB: www.imf.org).
- IRELA, *Diálogo Unión Europea-Grupo de Río sobre Desarrollo Sostenible*, 1997.
- Jamison, A. (1990), "The Internationalization of the Environmentalism. Implications for Science and Technology Policy"; en Jamison, A. y E. Baark, *Technological Innovation and Environmental Concern. Contending Policy Models in China and Viet Nam*, Research Policy Studies, RPI Discussion Paper No. 187, Lund.
- JIQ (*Joint Implementation Quarterly*), Groningen, Holanda, varios números.
- Naciones Unidas, Boletín Mensual del Centro de Información de las Naciones Unidas, julio de 1997.
- Pearce D. y J. Warford, 1993. *World Without End. Economics, Environment and Sustainable Development*, Oxford University Press.
- PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano*, Ediciones Mundi-Prensa, Nueva York, varios números.
- PNUMA, *Evaluación Mundial de la Biodiversidad*, Cambridge University Press, 1995.
- PNUMA, *Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO 2000)*, Ediciones Mundi Prensa, Madrid - Barcelona - México, 2000.
- Potter, G.A. (1992), *Medio Ambiente Ecológico y Desarrollo Sustentable* (mimeo), Lima.
- Pronk, J. y M. Haq (1992), *Sustainable Development. From Concept to Action* (The Hague Report), La Haya.
- Provencio, E. y J. Carabias (1992), "El enfoque del desarrollo sustentable. Una nota introductoria"; en *Problemas del Desarrollo*, México DF, No. 91, vol. XXIII.
- Simms, Andrew, "The social and economic cost of global warming will block all progress in the developing world", *Gardian Newspapers Limited*, Londres, 19 junio 2002.
- South Centre (1991), *Environment and Development*, Ginebra.
- UNDP, *Energy after Rio. Prospects and Challenges*, New York, 1997.
- UNDP, *Industry and Environment*, varios números.
- WCED (The World Commission on Environment and Development) (1987), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press.
- Wolfensohn, J. D., 2000. *Hacia un mundo con equidad*. Discurso ante la Junta de Gobernadores, Praga, República Checa, 26 de septiembre de 2000.
- World Coal Institute, Ecoal, Londres, varios números.
- WRI, World Resources, Washington, varios números.

Petróleo, energía y economía mundial 1964-2004

Ramón Pichs Madruga
Subdirector del CIEM

El análisis de lo que ha sucedido en el mercado petrolero internacional durante los últimos 40 años refleja cambios significativos en la correlación de fuerzas entre tres grandes grupos contendientes: los principales productores / exportadores, los grandes consumidores / importadores y las empresas transnacionales.

En este contexto, resulta evidente la vulnerabilidad de las economías subdesarrolladas ante las violentas sacudidas de precios registradas en este período, máxime si se toma en consideración la participación predominante que ha tenido este hidrocarburo en los balances energéticos de esas naciones.

Mercado de compradores hasta comienzos de los años 70

Entre comienzos de los años 60 e inicios de los 70 el mercado petrolero internacional se había consolidado como un mercado de compradores, donde regían bajos precios para los hidrocarburos y un férreo control por parte de las grandes compañías transnacionales, en particular el grupo de las llamadas “Siete Hermanas”¹.

No debe olvidarse que la recuperación y el crecimiento registrados por las economías capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron como sostén, en gran medida, el mantenimiento de bajas cotizaciones del crudo hasta comienzos de los años 70. Fue un período de grandes transformaciones tecnológicas basadas en el consumo de hidrocarburos baratos, que aseguraron un auge significativo en ramas como la industria automovilística, la petroquímica y la producción masiva de bienes de consumo durable.

La alta dependencia que registraban Europa Occidental y Japón de la ayuda norteamericana para la reconstrucción de posguerra (Plan Marshall) explica en alto grado la amplia difusión que tuvieron en esos países los patrones tecnológicos norteamericanos basados en la utilización intensiva de petróleo. En 1950 todavía el carbón representaba cerca del 85% del balance energético de Europa Occidental y Japón y las proporciones correspondientes a los hidrocarburos eran 12% y 5%, respectivamente; veinte años después la participación del carbón había caído hasta 34% en Europa y 25% en Japón, mientras que los hidrocarburos incrementaron sustancialmente su aporte a 57% en Europa y 71% en Japón.

¹Este grupo incluía cinco empresas norteamericanas: Standard Oil of New Jersey, Texaco, Standard Oil of California (SOCAL), Mobil Oil y Gulf Oil; una anglo-holandesa: Royal Dutch Shell y otra inglesa: British Petroleum.

Estos patrones energéticos basados en el consumo intensivo de petróleo también fueron transferidos hacia los países subdesarrollados como parte de los flujos de transferencias de tecnologías Norte-Sur. La participación del petróleo en el balance energético de los países subdesarrollados no miembros de la OPEP pasó de 46% en 1950 a 62% en 1973.

Del lado de los principales productores de crudo del Tercer Mundo, cabe recordar que el 14 de septiembre de 1960 había quedado constituida en Bagdad la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por cinco países (Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela), con la finalidad de coordinar las políticas petroleras de sus miembros y salvaguardar sus intereses.

El surgimiento de la OPEP ha sido considerado como la respuesta lógica de un grupo de productores de crudo del área subdesarrollada ante el monopolio ejercido por las grandes firmas petroleras transnacionales, que limitaba significativamente la participación de los gobiernos de esos países en los ingresos de venta de este producto en los mercados mundiales. Se calcula que a principios de la década del 60, apenas un 6.7% del precio final de un barril de petróleo correspondía a las rentas gubernamentales para los países productores.

Durante la primera década de existencia, la OPEP se reforzó con la incorporación de nuevos miembros, centró sus esfuerzos en la búsqueda de la estabilidad y el mejoramiento de los precios del crudo, y los países que la integraban decidieron participar de forma más activa en el control y manejo directo de la industria petrolera. En general, fue una década de logros discretos para esta Organización ya que la correlación de fuerzas con las compañías transnacionales no sufrió cambios importantes. En esencia, las grandes compañías seguían controlando la producción y el mercado (80% de las exportaciones mundiales de petróleo en 1970).

Altos precios del petróleo durante 1973-85

El alza de precios de comienzos de los años 70, decretada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y dirigida a recuperar parte de la renta petrolera que hasta ese momento pasaba a las arcas de las empresas transnacionales y de los gobiernos de los países industrializados, estremeció las estructuras neocolonialistas y sentó un justo precedente en la lucha del Tercer Mundo por su independencia económica.

En efecto, en 1973-74 se produjo lo que se conoció como el primer “*shock*” petrolero, durante el cual los precios del petróleo casi se cuadruplicaron, con efectos bastante disímiles para los distintos agentes que operaban en ese mercado.

Los principales consumidores mundiales de hidrocarburos, o sea, los países industrializados se ajustaron con gran rapidez a la nueva situación, transfiriendo los altos precios de la energía al exterior por la vía de las exportaciones. Además, llevaron a cabo de forma bastante generalizada programas de ahorro conservación y sustitución de petróleo, así como importantes inversiones para explotar las

reservas petroleras nacionales, con el objetivo de reducir el consumo de hidrocarburos importados.

Las empresas transnacionales que operaban en este sector, por su parte, fueron beneficiarias netas del alza de precios ya que el control que tenían sobre las fases superiores del ciclo productivo (refinación y comercialización), les permitió obtener grandes beneficios mediante el aumento de los precios al consumidor final. Al mismo tiempo, se revaluaron sus reservas, se estimuló la actividad petrolera en zonas de altos costos, que resultaban rentables en las nuevas condiciones, y se favoreció el desarrollo de programas energéticos alternativos, lo que llevó a que las mismas se convirtieran, en líneas generales, de transnacionales petroleras en transnacionales energéticas.

Los principales productores del Tercer Mundo, agrupados en la OPEP, acumularon grandes excedentes financieros, los cuales fueron reciclados en gran medida hacia los países industrializados para asegurar una colocación rentable en los mercados financieros internacionales. Consecuentemente, esos recursos lejos de coadyuvar al desarrollo de las economías de los países subdesarrollados importadores de petróleo, como se esperaba, contribuyeron a la plétora de capitales existente en la segunda mitad de la década del 70, lo cual aceleró el proceso galopante de endeudamiento externo del Tercer Mundo, que alcanzó su mayor dinamismo en ese período.

Entre 1974 y 1982 los países miembros de la OPEP registraron un excedente financiero de 471 mil millones de dólares, del cual más de las cuatro quintas partes se colocó en los países industrializados y sólo alrededor de un 15% se destinó al Tercer Mundo.

Para las naciones subdesarrolladas importadoras de hidrocarburos, el alza de los precios del petróleo tuvo un impacto sumamente negativo, que se adicionó al ya preocupante deterioro de los términos de intercambio con los países industrializados.

En este grupo de países subdesarrollados, a diferencia de las naciones capitalistas industrializadas, la adopción de medidas de ahorro y conservación de petróleo en gran escala fue imposible en el orden práctico, dadas las características de las tecnologías a que han tenido acceso, las cuales por lo general, han requerido un uso intensivo de combustible.

Ante esta situación, los países subdesarrollados importadores netos de hidrocarburos optaron, en la medida de sus posibilidades, por la explotación de las reservas petroleras nacionales y, en algunos casos, por el desarrollo de otras fuentes energéticas. Estos programas fueron financiados en parte con préstamos externos, obtenidos en aquella época con relativa facilidad, los cuales se tradujeron en más elevados niveles de endeudamiento de estas economías.

En sentido general, a partir del alza inicial de los precios del petróleo en 1973-74 se produjeron importantes cambios en la esfera energética mundial, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda de hidrocarburos.

Estas tendencias, sin embargo, comenzaron a sentirse con mayor fuerza después de la escalada de precios ocurrida en 1979-81, también conocida como segundo “*shock*” petrolero. Esta nueva elevación de precios se explica, en gran medida, por la interrupción temporal de la oferta petrolera internacional, derivada de la convulsión política en el Medio Oriente durante esos años.

Por el lado de la oferta, cobró especial auge la exploración y explotación de nuevas áreas petroleras, lo que condicionó el surgimiento de otros productores / exportadores, que gradualmente fueron desplazando a la OPEP de sus mercados tradicionales.

Entre 1973 y 1985 la producción de petróleo fuera de la OPEP se incrementó en casi 52%, bajo el estímulo que representaban los altos precios del crudo, mientras que la producción de la OPEP se redujo casi a la mitad en igual período, sobre todo durante la primera mitad de los años 80, como resultado, en gran medida, de los esfuerzos llevados a cabo por la Organización para estabilizar el mercado y mantener el control del mismo.

Por el lado de la demanda, en ese período el consumo mundial de hidrocarburos perdió dinamismo de forma sostenida, fundamentalmente después del llamado segundo “*shock*” petrolero de 1979-81.

Esta tendencia se acentuó principalmente en los países altamente industrializados, donde a la contracción de la demanda energética derivada de la profunda crisis económica de comienzos del decenio de los años 80, se sumó la maduración de los importantes programas de ahorro, conservación y sustitución de petróleo, dirigidos a reducir la dependencia del crudo importado, en especial del procedente de la OPEP. En 1974 fue creada, por iniciativa del gobierno de los EE.UU., la Agencia Internacional de Energía (AIE), con el propósito de enfrentar a la OPEP y conciliar los intereses de los países de la OCDE en materia energética.

En la reducción tendencial de la demanda petrolera en estos países han tenido un impacto significativo los cambios estructurales ocurridos en esas economías después de la crisis económica de 1974-75, debido al impulso que han recibido determinados sectores o ramas caracterizados por una baja intensidad en el uso de energía, como son los casos de la biotecnología, la informática, la electrónica y la robótica, en el contexto del llamado “nuevo paradigma tecno-económico”.

De esta forma, en los países altamente industrializados, que son los principales consumidores de hidrocarburos, la demanda de petróleo, después de crecer a un ritmo promedio anual de 7,5% en 1966-73 y de 0,5% en 1973-79, se redujo en más de un 3% en el período 1979-85. Para estos países, el consumo de petróleo por unidad de producción disminuyó en casi 40% entre 1973 y 1985; y la participación de este hidrocarburo en el balance energético cayó de 51% al 44% en igual período.

La sustancial reducción de la intensidad petrolera en las economías tecnológicamente avanzadas durante 1973-85 refleja el ajuste de estos países a

los patrones energéticos correspondientes al “nuevo paradigma tecno-económico”. Tales patrones pudieran resumirse como la tendencia a sustituir el petróleo por otras fuentes alternativas y la puesta en práctica de programas de conservación energética basados en la introducción de equipos y tecnologías más eficientes.

La sobreoferta creada por aumento de la producción petrolera fuera de la OPEP, en condiciones en que el consumo mundial de hidrocarburos registraba una marcada tendencia decreciente, aceleró el deterioro de las posiciones de la OPEP en los mercados internacionales, a pesar de los esfuerzos de esta Organización por mantener el control de dichos mercados. Entre 1979 y 1985 el aporte de la OPEP a la producción mundial de petróleo cayó de casi 50% a 30%, mientras que en las exportaciones mundiales de crudo la reducción fue de 88% a 64%. Esta pérdida de terreno de la OPEP se tradujo en una acelerada disminución de sus ingresos petroleros, cuyo monto en 1985 fue menos de la mitad del registrado en 1980.

Tendencias declinantes de los precios del petróleo en 1986-98

El abandono temporal de los controles de producción y de precios, decretado por la OPEP a finales de 1985 provocó una caída de las cotizaciones del crudo de más de un 50% en 1986. En 1987-97 los precios oscilaron entre 17 y 20 dólares por barril, antes de desplomarse en más de un 30% en 1998.

En estas condiciones, ciertos círculos económicos y políticos a nivel internacional han postulado que el sector energético debe regirse fundamentalmente por las condiciones del mercado, lo que ha condicionado un creciente proceso de privatizaciones y desregulación energética desde mediados de los años 80.

Los precios relativamente bajos, que predominaron durante la mayor parte del período 1986-98, afectaron en sentido general a todos los productores de crudo, pero el grado de afectación varió en función de las condiciones de producción y de la dependencia en que se encuentran esas economías de los ingresos petroleros.

Los países altamente industrializados lograron compensar en gran medida las pérdidas sufridas en los negocios vinculados con la producción petrolera, por la vía del consumo de un petróleo mucho más barato en otros sectores económicos. Según algunos estimados que comparan el valor real de las importaciones petroleras de EE.UU., Japón y Europa Occidental en 1986-98, con el valor que hubiesen tenido dichas importaciones de haberse mantenido el precio de 1985; el ahorro acumulado para el conjunto de esos países en el período indicado superó el millón de millones de dólares.

Las grandes empresas transnacionales lograron sortear en gran medida el desplome de los precios del petróleo con la utilización de una materia prima mucho más barata en las operaciones de refinación y mediante el recorte de los presupuestos de exploración. Según algunos estimados, las principales firmas petroleras han logrado reducir los costos de inversión en alrededor de un 30% en los distintos segmentos productivos, lo que reduce su vulnerabilidad ante los bajos precios.

Las grandes empresas transnacionales han fortalecido adicionalmente sus posiciones en el mercado, a través de la adquisición en gran escala de activos depreciados de aquellas compañías menos sólidas, como parte de un creciente proceso de fusiones y adquisiciones que adquirió particular auge sobre todo a partir de 1998.

Además, desde mediados de los años 80 se ha reforzado el control transnacional sobre la producción y comercialización del crudo extraído de los países subdesarrollados. Ciertamente, en la medida en que los gastos y riesgos relacionados con la exploración y la explotación de nuevas áreas petroleras han excedido la capacidad de esas economías para hacerles frente, se han ofrecido contratos con términos mucho más atractivos para las compañías extranjeras, se han reducido los impuestos a pagar por estas, se han abolido regalías y, en muchos casos, se ha debilitado el control directo por parte del Estado de este sector tan estratégico.

Del lado de los productores, cabe destacar que entre 1985 y 1998 los países miembros de la OPEP incrementaron significativamente sus niveles de producción, elevándose la participación de este grupo de países en la producción petrolera mundial de 30% a 42% en ese período. Sin embargo, como resultado de los bajos precios de los hidrocarburos, los ingresos petroleros de la OPEP se redujeron sustancialmente, llegando a representar en 1998 menos de la quinta parte del nivel récord registrado en 1980, en términos reales.

Sólo en 1998, la caída de precios del petróleo se tradujo en una reducción del PIB de la OPEP del orden de 3,5%, una pérdida de ingresos petroleros de 56 mil millones de dólares y un déficit en cuenta corriente de 14.5 mil millones de dólares para los 11 países miembros, en su conjunto.

Los más afectados dentro de los productores de hidrocarburos del Tercer Mundo - miembros o no de la OPEP- fueron aquellos países con grandes poblaciones y/o elevados niveles de deuda externa. En muchos de estos países los grandes esfuerzos realizados para tratar de compensar la caída de los precios por la vía del aumento del volumen exportado tuvieron poco éxito. Como muchos de estos países obtienen del petróleo entre el 60% y el 95% de sus ingresos en divisas y más de la mitad de los ingresos presupuestarios; durante 1986-98 se vieron en una situación económica sumamente restrictiva, que los obligó a emprender severas medidas de austeridad con un carácter recesivo.

Por su parte, los países subdesarrollados importadores netos de hidrocarburos, si bien registraron cierto ahorro en divisas como consecuencia del abaratamiento del petróleo, éste fue insignificante ante las presiones derivadas de la deuda externa. Además se puso en peligro la rentabilidad de los proyectos energéticos alternativos que fueron emprendidos en períodos de altos precios del crudo.

A medida que materializaba el tránsito de un mercado de vendedores (década del 70 y primera mitad de los años 80) a un mercado de compradores (1986-98), se produjeron cambios significativos en la oferta y la demanda de hidrocarburos.

Por el lado de la oferta, después de un descenso significativo entre 1979 y 1985, la producción mundial de petróleo se incrementó en alrededor de un 20% entre 1986 y 1998. Más del 75% del incremento total en los niveles productivos en ese período correspondió a los productores del Medio Oriente, que cuentan con las dos terceras partes de las reservas mundiales de petróleo.

Por el lado de la demanda, los bajos precios del crudo condicionaron un aumento de más del 17% en el consumo petrolero mundial en 1986-1998, luego de la drástica caída experimentada en la primera mitad de los 80. En los países de la OCDE, que absorbieron cerca del 63% del consumo total en 1998, el incremento de la demanda fue superior al 23% entre 1986 y 1998.

El hecho de que el consumo de petróleo por unidad de PNB (coeficiente de intensidad petrolera) haya continuado declinando en los países altamente industrializados, a pesar de la persistencia de precios relativamente bajos de los hidrocarburos en 1986-98, revela el carácter estructural de los cambios emprendidos en períodos anteriores de altos precios, con vistas a incrementar la eficiencia energética.

El deterioro de las cotizaciones del crudo entre 1986 y 1998 desestimuló la adopción de medidas adicionales para desarrollar fuentes energéticas alternativas y para incrementar la eficiencia energética en los países de la OCDE. Sin embargo, en los últimos años un nuevo factor promotor de tecnologías ahorradoras se ha dejado sentir con fuerza creciente en el diseño de las políticas tecnológicas de estos países. En efecto, han aumentado las presiones ecologistas dirigidas a reducir el impacto negativo del sector energético sobre el medio ambiente y a crear condiciones globales para un desarrollo sostenible, lo que se ha puesto de manifiesto en las negociaciones en torno a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCC), que entró en vigor en 1994.

La capacidad de ajuste de los países subdesarrollados a los patrones energéticos del “nuevo paradigma tecno-económico” continúa siendo extremadamente limitada debido, en gran medida, a las restricciones financieras y tecnológicas que enfrentan en el proceso de industrialización. Entre 1986 y 1998 el consumo petrolero del área subdesarrollada se incrementó en más de 58%.

Desde mediados de los años 80, también se ha registrado una tendencia creciente hacia la reintegración vertical de la industria petrolera internacional. Un elemento significativo en ese sentido ha sido la proliferación de inversiones llevadas a cabo por algunos productores de crudo del área subdesarrollada en las actividades de refinación y comercialización de los países industrializados.

Pudiera decirse que a diferencia de los años 70 y principios de los 80, cuando predominaban las políticas petroleras basadas en criterios de seguridad nacional e independencia energética en los principales centros de poder económico y político; desde mediados de los 80, y sobre todo después del conflicto en el Golfo Árabe-Pérsico de 1990-91, parece prevalecer la idea de la “interdependencia petrolera”

entre países desarrollados y las principales cuencas petroleras a nivel internacional.

Después de la guerra en el Golfo Árabe-Pérsico en 1990-91 se abrió un nuevo período en las relaciones entre los principales productores y consumidores de petróleo, que favorece sobre todo a los países petroleros con grandes reservas de crudo, a las grandes compañías petroleras y a los principales importadores de este producto (los países altamente industrializados).

El lugar reservado para los países subdesarrollados importadores de petróleo en este contexto ha sido totalmente marginal y dependiente. Estos países sólo han recibido los efectos de lo que acontece en el mercado, como resultado de la acción -muchas veces concertada- de los mayores exportadores de crudo, las grandes compañías transnacionales y los principales consumidores de hidrocarburos de mundo industrializado. De mantenerse estas tendencias, es de esperar una marginación aún mayor de amplios sectores de la población del Tercer Mundo, que ya enfrentan serias limitaciones para acceder a la energía requerida para satisfacer las necesidades más elementales.

Los productores de crudo del área subdesarrollada enfrentan el reto de sopesar adecuadamente, en función de los intereses nacionales, las opciones que se abren ante ellos en medio de la actual reestructuración de la economía mundial. De lo contrario, la llamada "colaboración entre productores y consumidores" no pasaría de ser un mecanismo de renovada dependencia de los productores del Tercer Mundo respecto a los intereses de los países industrializados, en materia energética.

Para la próxima década, se han elaborado numerosos planes de expansión de las capacidades de producción, particularmente en aquellos países que cuentan con grandes reservas de hidrocarburos. Sin embargo, la materialización de tales planes implicaría un desembolso de cuantiosos recursos, que en muchos casos no están disponibles.

Con el nuevo reordenamiento en el mercado petrolero mundial se ha abierto una nueva etapa de incertidumbre y ajustes para los países subdesarrollados, donde no debe descartarse un retorno a viejos métodos de dominación económica y política.

Nueva coyuntura alcista de los precios petroleros en 1999-2004

Después de una caída superior al 30% en 1998, los precios internacionales del petróleo han registrado una tendencia alcista, sólo interrumpida en el 2001, cuando las cotizaciones internacionales cayeron en alrededor de un 16% bajo los efectos de la recesión económica mundial. En la actualidad, persisten las presiones alcistas sobre los precios en un contexto de creciente inestabilidad e incertidumbre. En estas condiciones el precio promedio de los crudos de la OPEP entre enero y mediados de abril 2004 se ubicó en unos 30.8 dólares por barril.

Tabla 1
Precios internacionales del petróleo de la OPEP (promedio) 1998-2003, en dólares por barril.

1998	1999	2000	2001	2002	2003
12.33	17.44	27.55	23.10	24.32	28.10

Fuente: *OPEC Bulletin*, varios números.

El incremento de precios de 1999-2000 estuvo condicionado por una combinación de factores entre los que cabe mencionar el recorte productivo adoptado por la OPEP y otros productores de crudo, desde finales de marzo de 1999 hasta finales de marzo del 2000; una drástica reducción de los inventarios (petróleo almacenado) en los principales consumidores; cierto repunte de la demanda petrolera mundial con relación a los deprimidos niveles de 1997-98, particularmente en Asia; y una fuerte actividad especulativa en los mercados internacionales, que se estima explicaba cerca de la cuarta parte del precio vigente a finales del 2000. Las crecientes tensiones políticas en el Medio Oriente también contribuyeron a elevar las cotizaciones internacionales del crudo y sus derivados.

Un acontecimiento relevante en el escenario petrolero mundial del año 2000 fue la segunda reunión cumbre de jefes de estado de la OPEP, celebrada durante los días 27 y 28 de septiembre, en plena turbulencia del mercado petrolero. La primera cumbre de esta Organización se celebró en 1975 en Argelia.

Como resultado de esta importante reunión, los representantes de los 11 países miembros adoptaron la *Declaración de Caracas*, donde se enfatiza el objetivo de preservar y ampliar el papel del petróleo en la satisfacción de la demanda energética futura.

Uno de los principales temas analizados fue la necesidad de preservar precios "justos" y estables para el crudo y en este sentido se abogó por mantener los precios dentro de una banda de 22 dólares a 28 dólares por barril; lo que supondría, para los miembros de la OPEP, un alto grado de disciplina a la hora de llevar a cabo ajustes en sus cuotas de producción en correspondencia con este objetivo.

Además, se abogó por un diálogo efectivo entre países productores y consumidores de petróleo, a los efectos de garantizar seguridad y transparencia en el mercado petrolero; así como sostenibilidad en el crecimiento de la economía mundial.

La *Declaración de Caracas* señala que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza constituyen la principal prioridad global y, tras reconocer el carácter insostenible de la deuda externa del Tercer Mundo, aboga por un esfuerzo significativo de la comunidad de acreedores internacionales para concretar iniciativas de reducción de deudas. En este sentido, se destaca la posición venezolana que se pronunció por un diálogo con los países industrializados, donde además del tema petrolero se discutan otros problemas que preocupan a muchos de los países de la OPEP y a la mayoría de los países

subdesarrollados, como son la deuda externa, la creciente pobreza y los problemas ambientales.

Durante la Cumbre también se hicieron sentir las críticas de la OPEP a los impuestos que imponen los gobiernos de países desarrollados a los productos petroleros y que representan una porción significativa del precio final de estos productos. Otros temas tratados se refieren a la preocupación en torno a las negociaciones internacionales sobre medio ambiente y desarrollo; y a la necesidad de promover la innovación tecnológica en los países miembros.

Durante los tres primeros trimestres del 2001, los precios internacionales del petróleo se mantuvieron relativamente estables (en torno a los 25 dólares por barril como promedio para los crudos que comercializa la OPEP), aunque con una tendencia declinante, que se reforzó a partir de los actos terroristas del 11 de septiembre y sus implicaciones recesivas para la economía mundial.

Durante el año 2002, a pesar de la persistencia de síntomas de recesión económica mundial, los precios registraron un crecimiento sostenido. Esta elevación de precios estuvo asociada, en gran medida, a la inestabilidad política en el Medio Oriente (derivada del recrudecimiento del conflicto árabe-israelí) y a la creciente amenaza de intervención militar directa de EE.UU. y otras potencias de la OTAN en uno de los principales países petroleros de esa región: Irak. La posibilidad de que el conflicto bélico se extendiese a otros países vecinos que son grandes exportadores de crudo como Arabia Saudita y Kuwait generó una situación de incertidumbre y, por tanto de especulación, que llegó a explicar hasta 3-5 dólares por barril en la conformación de los precios internacionales, lo que se definió como una sobretasa por riesgo de guerra.

En el 2003 los precios mantuvieron una tendencia alcista, como resultado, en gran medida, de la inestabilidad generada con la ocupación de Irak por EE.UU. y sus aliados, las crecientes acciones de la resistencia iraquí y los problemas de inseguridad en el Medio Oriente (atentados perpetrados en países como Arabia Saudita y Marruecos).

Los precios también reflejaron la muy lenta recuperación de la producción petrolera iraquí y los efectos de la caída de la producción y las exportaciones de Venezuela – sobre todo durante el mes de enero de 2003, como consecuencia del paro golpista que afectó seriamente a PDVSA – y las afectaciones en Nigeria, derivadas de disturbios étnicos en ese país. Otro factor condicionante de los altos precios en el 2003 fue la reducción de las reservas de petróleo almacenado en los países desarrollados, particularmente en EE.UU., lo que redujo el margen de maniobra del mercado ante acontecimientos imprevistos.

Implicaciones para los países subdesarrollados

En el mundo subdesarrollado, las más recientes elevaciones de los precios del petróleo han tenido un impacto sumamente adverso y han agravado significativamente los términos de intercambio de los importadores netos de petróleo.

La inmensa mayoría de las naciones subdesarrolladas ha sido severamente afectada por los altos precios de los hidrocarburos, debido a su elevado grado de dependencia del crudo importado. Muchos de estos países están sometidos, además, a serias restricciones externas derivadas de la creciente deuda externa y de los niveles de precios deprimidos de sus principales productos de exportación, que generalmente son productos básicos diferentes del petróleo.

Debe tenerse en cuenta que, en condiciones de encarecimiento del petróleo los sectores más pobres de la población en los países subdesarrollados importadores de hidrocarburos son forzados a depender cada vez más de los combustibles tradicionales de la biomasa para satisfacer sus necesidades energéticas básicas.

Se estima que más de 2000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en el Tercer Mundo; y entre 1500 millones y 2000 millones de personas dependen en lo fundamental de los combustibles tradicionales de la biomasa como leña, carbón vegetal y residuos de plantas y animales. Consecuentemente, la mayoría de los países subdesarrollados importadores de energía se mueven en un entorno caracterizado por la vulnerabilidad tecnológica, la crisis energética y el deterioro ambiental.

Teniendo en cuenta las realidades antes expuestas, en relación con el curso errático de los precios del petróleo y las afectaciones para los exportadores e importadores de petróleo del mundo subdesarrollado; debe continuarse avanzando en el desarrollo de fórmulas de complementación entre países subdesarrollados exportadores e importadores de petróleo, que tengan en cuenta las prioridades e intereses de ambos grupos de países.

En la actualidad existen algunos ejemplos de complementación energética entre países subdesarrollados, como es el caso del *Pacto de San José*, firmado por Venezuela y México, que favorece a alrededor de una decena de naciones importadoras de hidrocarburos de Centroamérica y el Caribe. Desde su firma en agosto de 1980, este Pacto, que no tiene precedentes como instrumento de cooperación entre países subdesarrollados exportadores e importadores de petróleo, se ha renovado anualmente.

La demanda petrolera de los países beneficiados, que es cubierta por el *Pacto de San José*, asciende a unos 160 mil barriles diarios de crudo y productos refinados, y es abastecida a partes iguales en México y Venezuela.

Los países beneficiarios pagan los precios del mercado internacional cuando éste es inferior a los 15 dólares por barril; y cuando el precio internacional supera ese nivel, una parte de la factura petrolera (entre 20% y 25%) se convierte en créditos que se utilizan para financiar proyectos de desarrollo y flujos de comercio entre los países beneficiarios y los proveedores.

Esta fórmula podría servir de antecedente a la hora de pensar en nuevas propuestas internacionales, que tengan en cuenta las prioridades e intereses de los países subdesarrollados, tanto los exportadores como los importadores de petróleo.

En octubre del 2000 se firmó el *Acuerdo Energético de Caracas*, concebido por el gobierno venezolano como un acuerdo de suministro petrolero a varias naciones centroamericanas y caribeñas, en condiciones preferenciales. Este acuerdo funciona de manera paralela al *Pacto de San José* y constituye un paso adicional en la necesaria cooperación energética Sur-Sur.

Implicaciones para los países desarrollados

La mayoría de los países industrializados, que son importadores netos de energía, se han visto afectados por la elevación de los precios internacionales del crudo. En algunos de estos países se han reforzado las tendencias económicas recesivas y se han registrado presiones inflacionarias como consecuencia de los altos precios de los portadores energéticos durante estos años.

En Europa, los altos precios del petróleo en 1999-2000 coincidieron con el debilitamiento del euro (que perdió alrededor de un 25% de su valor desde su creación en enero de 1999 hasta finales del 2000), lo que se tradujo en un encarecimiento aún mayor de la factura petrolera europea ya que el petróleo se cotiza en dólares en los mercados internacionales. En esos años, diversas ciudades europeas fueron escenario de crecientes movimientos sociales de protesta contra el alza del precio del combustible y los elevados impuestos con los que la mayoría de los gobiernos europeos gravan a los productos petroleros. Estos impuestos representan cerca del 60% del precio final, como promedio, en los países de la Unión Europea.

Para EE.UU., los altos precios del petróleo han devenido tema candente en los años electorales 2000 y 2004. A pesar de que EE.UU. es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, es a su vez el mayor consumidor e importador mundial.

En el estado de California, la escasez de energía registrada en el 2000 desembocó en una seria crisis energética, condicionada en gran medida por el proceso de desregulación de los mercados energéticos iniciado en 1996 en ese estado. Otros estados, sobre todo aquellos ubicados al oeste de la Unión, también registraron afectaciones en ese sector.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, dentro de los EE.UU., los altos precios del petróleo favorecen a las compañías petroleras más involucradas en la exploración y extracción del crudo, así como a los estados norteamericanos productores de petróleo como Texas, Alaska, California y Louisiana, donde se concentra el 84% de las reservas petroleras de la Unión.

A pesar de la elevada dependencia del crudo importado, en la actualidad las economías industrializadas son mucho menos vulnerables ante los altos precios de la energía que a comienzos de los 70; debido entre otras razones a una mayor presencia de sectores y ramas socioeconómicos que requieren menor cantidad de materias primas y energía por unidad de producción o servicio.

Además, debe recordarse que en condiciones de altos precios de los hidrocarburos, una parte importante de los ingresos adicionales que captan los países subdesarrollados exportadores de petróleo suelen retornar, en gran medida, a los

países industrializados a través de los canales comerciales y financieros internacionales.

Las regiones subdesarrolladas exportadoras netas de petróleo aportan alrededor del 80% del crudo que se comercializa en el mundo. La OPEP, que controla el 41% de la producción petrolera y 78% de las reservas mundiales de crudo, aporta cerca del 60% de las exportaciones globales.

Las exportaciones de petróleo de los países subdesarrollados se dirigen preferentemente hacia los países industrializados, que absorben alrededor del 80% de dichas ventas; mientras los países subdesarrollados importadores netos de hidrocarburos sólo captan el 20% restante. Se estima que los tres grandes centros de poder (EE.UU., Europa Occidental y Japón) captan las dos terceras partes del petróleo que se comercializa internacionalmente.

El consumo de energía comercial por habitante de los países desarrollados es casi siete veces superior a la media de los países subdesarrollados. Se estima que un habitante de los EE.UU. consume como promedio más de 10 veces la energía comercial que utiliza un habitante del Tercer Mundo y 27 veces más que lo consumido por un residente de los países más pobres, también llamados países menos adelantados.

Estos elevados índices de consumo energético por habitante en los países industrializados se traducen en serias afectaciones para el medio ambiente. Los países industrializados, emiten más del 50% de las emisiones mundiales de CO₂, que es el principal gas de efecto invernadero.

La dinámica de las cotizaciones del petróleo en los mercados internacionales durante los meses venideros dependerá, en gran medida, de la evolución de la situación política y militar en el Medio Oriente, y en particular en Irak.

Perfil petrolero e intereses de EE.UU. en el Medio Oriente

Los móviles de la estrategia intervencionista norteamericana en el Medio Oriente van mucho más allá de los pretextos relacionados con la “guerra contra el terrorismo”, decretada por el presidente de los EE.UU. a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, y están muy vinculados a los intereses petroleros de grandes compañías petroleras basadas en EE.UU., que están bien representados en la actual administración republicana.

Como se mencionó antes, el perfil petrolero de los EE.UU. se caracteriza por su doble condición de gran productor de petróleo, por un lado, y de primer consumidor e importador de hidrocarburos a escala mundial, por otro lado.

En términos productivos, con una extracción de crudo de 350 millones de toneladas (9,9% del total mundial), EE.UU. fue el tercer mayor productor del mundo en 2002, después de Arabia Saudita (11,8%) y Rusia (10,7%).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la producción de crudo de los EE.UU. ha registrado una caída sostenida desde mediados de la década de los 80 del pasado siglo. En efecto, entre 1985 y 2002, la extracción petrolera norteamericana cayó en alrededor de un 30%.

EE.UU. cuenta con el 2,9% de las reservas probadas de petróleo del mundo, suficiente para apenas 10,8 años de mantenerse las tasas actuales de producción. Esta situación contrasta con la duración esperada de las reservas en otros grandes productores como Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos (más de 100 años en cada caso); Arabia Saudita (86 años); Venezuela (74 años); Irán (73,8 años), Azerbaijón (62,5 años) y Libia (59,4 años).

La política energética nacional de la actual administración, lanzada el 17 de mayo de 2001, está orientada básicamente a garantizar la “oferta de energía”, donde el petróleo es una pieza clave. En este sentido, uno de los temas más polémicos es la propuesta de abrir a la exploración el refugio de vida silvestre de Alaska, área ecológicamente frágil donde se localizan reservas estimadas ascendentes a unos 16 mil millones de barriles de petróleo. Otro tema controversial de la mencionada política energética es la flexibilización de la supervisión gubernamental de las inversiones que se realicen en infraestructura energética.

En general, esta política energética nacional tiene implícito un alto costo ambiental y ha sido calificada como una retribución de la actual administración a las grandes industrias del petróleo, el gas y el carbón por sus contribuciones a la campaña electoral de G. Bush y D. Cheney, que por demás tienen antecedentes como ejecutivos petroleros.

El petróleo es la fuente predominante en el balance energético norteamericano con un aporte de alrededor de 40% de la energía comercial consumida por EE.UU. en el 2002. Con menos del 5% de la población mundial, EE.UU. absorbió el 25,4% del consumo mundial de petróleo en 2002, seguido a gran distancia por China (7%) y Japón (6,9%). A diferencia de la producción petrolera, el consumo petrolero norteamericano creció sostenidamente entre 1985 y 2002, y registró un aumento acumulado de más de 24% en esos años.

Las importaciones petroleras norteamericanas registraron un crecimiento acumulado de 2,2 veces entre 1985 y 2002; lo que equivale a una tasa promedio anual de casi 5% y revela la significativa desproporción entre un consumo interno rampante y una producción nacional de petróleo declinante. Consecuentemente, las importaciones cubren más del 60% del consumo petrolero del país.

Más del 81% de las importaciones petroleras de los EE.UU. corresponden al petróleo crudo, que es procesado en el amplio sistema de refinerías con que cuenta el país. Cabe destacar que EE.UU. aporta más del 20% de la capacidad mundial de refinación.

A EE.UU. le correspondió más del 26% de las compras mundiales de petróleo en el 2002. En ese año, las importaciones petroleras norteamericanas procedían en lo

fundamental de América Latina (35%), Medio Oriente (21%), Canadá (17%) y África (12%).

En términos prospectivos, uno de los problemas más serios que enfrenta el sector petrolero de los EE.UU. es la rápida ampliación de la brecha entre producción y consumo, que sería cubierta por nuevas importaciones. Sobre esta base, se estima que el consumo de petróleo importado se elevaría en un 50% hasta el 2020.

La actual política energética de los EE.UU. reconoce que, aunque se logre incrementar la oferta energética doméstica en los niveles esperados, las importaciones petroleras continuarán cubriendo una parte significativa del consumo nacional; y en ese sentido se aboga por garantizar los suministros petroleros desde el exterior.

Se calcula que para obtener toda la energía adicional que será necesaria hasta el 2020, EE.UU. tendría que gastar aproximadamente 2.5 millones de millones de dólares por concepto de petróleo importado en ese período, sobre la base de un nivel de precios moderado. Bajo este escenario se prevé un aumento potencial de las acciones militares de EE.UU. en el exterior para asegurar las condiciones de producción y la protección de los flujos de hidrocarburos demandados.

Entre las principales áreas de interés energético para los EE.UU. fuera de su territorio se encuentran el Golfo Árabe-Pérsico, la Cuenca del Mar Caspio, África y América Latina.

EE.UU. adquiere en el Medio Oriente algo más de la quinta parte de sus importaciones de crudo, a diferencia de otros países industrializados como Japón que registra una dependencia del orden del 77%. No obstante, esta área geográfica resulta de gran interés estratégico para Norteamérica por concentrar las dos terceras partes de las reservas mundiales de crudo, y por la contribución de los flujos de petróleo provenientes de esta región a la estabilización de los precios en los mercados internacionales. Además, el control de los recursos petroleros de esta zona asegura una mayor influencia en los asuntos mundiales, y en especial una mayor influencia en las economías de aquellos centros de poder que son más dependientes del crudo del área.

Como parte de la estrategia norteamericana de mantener bajo control los abundantes recursos petroleros de la zona, desde 1991 el Departamento de Defensa de los EE.UU. ha expandido significativamente las fuerzas y medios de guerra de ese país en la zona del Golfo Árabe-Pérsico; al tiempo que han continuado las multimillonarias ventas de armamento moderno a gobiernos aliados en el área.

Arabia Saudita, con una capacidad ociosa de 2,5 millones de barriles diarios es el único país que en la coyuntura actual pudiera incrementar sustancialmente sus niveles de producción en un plazo no mayor de 90 días. Es decir, estaría en mejores condiciones que otros países petroleros para compensar caídas de los precios con un aumento inmediato de la producción.

En términos prospectivos, Arabia Saudita que concentra la cuarta parte de las reservas petroleras del mundo, necesita incrementar aún más su capacidad de producción para continuar asegurando un suministro ininterrumpido de petróleo a Occidente. Según reportes del Departamento de Energía de los EE.UU. la producción petrolera saudita debe duplicarse en los próximos 20 años, lo que tendrá un costo económico sumamente elevado. En estas condiciones, el gobierno norteamericano realiza grandes esfuerzos por lograr una mayor apertura del sector petrolero saudita a los inversionistas de EE.UU.

En cuanto a dotación de reservas petroleras, después de Arabia Saudita se ubica Irak, país que concentra casi 11% de las reservas mundiales. Hasta el momento de la nacionalización petrolera iraquí en 1970, compañías norteamericanas y británicas dominaban la industria de hidrocarburos en este país. Antes de la ocupación de Irak, las compañías de EE.UU. estaban excluidas por el gobierno norteamericano de la posibilidad de realizar inversiones petroleras en ese país, ya que Irak estaba incluido en la lista de los países promotores del terrorismo.

Así, la más reciente invasión y ocupación militar de EE.UU. contra Irak, presentadas por el gobierno norteamericano ante la opinión pública internacional como una contribución a la lucha contra el terrorismo, responde a los intereses de importantes grupos de presión de los EE.UU., entre los que se inscriben los representantes del complejo militar-industrial de ese país e importantes compañías petroleras que nunca se resignaron a quedar fuera de los negocios petroleros en Irak.

Se ha llegado a considerar un crecimiento en la producción de petróleo iraquí hasta unos 7 u 8 millones de barriles diarios en unos 7 años; e incluso la posible retirada de este país de la OPEP, con lo que se eliminaría toda posibilidad de asumir compromisos en cuanto a cuotas de producción dentro de esa Organización.

Las reservas probadas de petróleo de Irak ascienden a 112 mil millones de barriles y han sido valoradas en unos 2.8 millones de millones de dólares (a precios de 25 dólares / barril), lo que equivale a unos 120 mil dólares / habitante. Si a las reservas probadas se añaden las probables, el monto total alcanzaría los 200-300 mil millones de barriles.

Adicionalmente, las reservas de gas natural ubicadas en Irak son de unos 110 millones de millones de pies cúbicos, valoradas en alrededor de 1 millón de millones de dólares, que equivale aproximadamente a 40 mil dólares per cápita. A estas reservas probadas se añaden más de 150 millones de millones de pies cúbicos de reservas probables.

Cabe señalar que el territorio iraquí está muy poco explorado; sólo 15 de los 73 campos descubiertos han sido desarrollados, y a diferencia de Arabia Saudita y Kuwait en Irak se han perforado muy pocos pozos profundos. Además, los costos de producción en ese país son muy bajos, del orden de los 2 dólares por barril.

El control de Irak también facilitaría la creación de un corredor de energía para el petróleo y gas de la región del Mar Caspio.

Como antecedente directo de la ocupación de Irak cabe recordar la reciente guerra en Afganistán. Aunque los motivos de la guerra de EE.UU. contra Afganistán no pueden reducirse a razones vinculadas al “negocio petrolero”, tampoco debe subestimarse la dimensión petrolera de ese conflicto. En este sentido, cabe destacar que, además de las reservas energéticas de Afganistán (importantes reservas de gas natural y algunos recursos de petróleo y carbón), los gobiernos de los países industrializados, y el de los EE.UU. en particular, están muy interesados en asegurar la estabilidad de Afganistán como ruta de tránsito potencial para exportaciones de petróleo y gas natural desde Asia Central. Téngase en cuenta que Turkmenistán cuenta con la tercera más grande reserva de gas natural en el mundo, y que otros países de la región como Uzbekistán y Tadjikistán cuentan con importantes reservas petroleras.

Acciones de esta naturaleza, promovidas por los círculos de poder económico y político en los EE.UU. son ingredientes clave en la configuración de un mercado petrolero mundial que se ajusta cada vez más a la lógica transnacional de reacomodar a su favor los distintos segmentos de la economía mundial, y que se aleja cada vez más de una reestructuración ordenada y favorable para todos los agentes que operan en ese importante mercado.

En tales condiciones, se está produciendo una mayor concentración del control transnacional en el negocio petrolero internacional, donde la parte leonina de las utilidades es captada por aquellas compañías transnacionales sobre todo norteamericanas, que gozan de mejor salud financiera, que cuentan con una mayor diversificación geográfica de su actividad y que muestran una integración vertical más completa.

Bibliografía

- Adame, Horacio A., Martha G. Alcalá, 1988. *La OPEP y la dinámica del mercado petrolero mundial*. UNAM, México.
- Agencia Internacional de Energía (AIE), *Selected Energy Statistics for 1996*, <http://www.iea.org/stats>
- Banco Mundial, 1999. *Informe sobre Desarrollo Mundial 1998/99*.
- BP, *Statistical Review of World Energy*, varios años.
- BP-Amoco, *Statistical Review of World Energy*, 1999-2002.
- EIA-DE (Energy Information Administration – Department of Energy), 2002. *Monthly Energy Review*, Washington D. C., abril 2002.
- EIA-DE, 2001. *OPEC Revenues Fact Sheet*, Washington D.C., septiembre 1998 (<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/opecrev.html>) y diciembre 2001.
- EIA-DE, 2002. *World Oil Market and Oil Price Chronologies: 1970-2001*, Washington D.C., January 2002.
- FMI, *World Economy Outlook*, diversos números (1986-2002).
- FMI, 1983. *World Economic Outlook. Occasional Paper 21*, Washington.
- Klare, M.T., 2002. *Petropolítica global: implicaciones del Plan energético de Bush en el extranjero*, 15 abril 2002 (Tomado de Internet).
- NEPDG (National Energy Policy Development Group), 2001. *National Energy Policy*. Washington D.C., mayo 2001.
- OCDE, *OECD Economic Outlook*, diversos números.
- OPEC, 2002. *Answers to frequently asked questions about the petroleum industry* (http://opec_archivos/frame_archivos/AnswersAboutPrtroileumInd.htm).
- OPEC, 2000. *OPEC Annual Statistical Bulletin 2000*.
- OPEC, 1995. *OPEC Review*, vol. XIX, No. 1.
- OPEC, *OPEC Bulletin*, diversos números.
- Petroleum Economist*, diversos números.
- Pichs, R., 2002. "Las dimensiones energética y ambiental en las negociaciones del ALCA", en *Memorias*. Revista mensual de política y Cultura, No. 163, septiembre 2002, México D.F.
- PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano*, Ediciones-Prensa, Nueva York, diversos números (1995-2001)
- PNUD, 1997b. *Energy After Rio. Prospects and Challenges*, United Nations Publications, New York.
- WRI, 1998. *World Resources 1998-99*, Oxford University Press, Washington.

Pobreza y deterioro social

Blanca Munster Infante

Investigadora del CIEM

En el actual escenario en que se desenvuelven nuestras sociedades, existen redes globales que articulan individuos, segmentos de población, regiones y ciudades, al mismo tiempo que excluyen otros tantos individuos, grupos sociales o territorios. Consiguientemente los países están atravesados por dicha lógica dual, en que se crean redes transnacionales de componentes dinámicos de la globalización, al mismo tiempo que se segregan y excluyen grupos sociales al interior de cada región o ciudad.

Puede asumirse, que el nuevo mundo, implica transformaciones estructurales en las relaciones de producción, cuyas manifestaciones más claras en la sociedad son: el aumento de la pobreza y exclusión social.

Aunque las estadísticas sociales en estos últimos cuarenta años han cambiado significativamente, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad, calidad de la información disponible y a las metodologías utilizadas para su medición, se puede afirmar que a pesar de mejorías en algunos indicadores sociales (mortalidad infantil, esperanza de vida, alfabetización), la tendencia general es al deterioro de la situación social en el mundo, fundamentalmente en los países subdesarrollados.

Pobreza y desigualdad del ingreso

Las estadísticas de ingreso disponibles en la década de los ochenta, mostraban que mil millones de personas se encontraban en la extrema pobreza, de ellos 800 millones de personas en los países subdesarrollados recibían un ingreso diario equivalente a 41 centavos de dólar de ese año

En la actualidad, más de 1,200 millones de personas –una de cada cinco en todo el mundo- sobrevive con menos de \$1 al día. La mayor concentración de pobreza de ingresos se encuentra en Asia Meridional y Oriental. Sólo China en los noventa consiguió sacar de la pobreza a 150 millones de personas (el 12 % de su población). Sin embargo, en América Latina y el Caribe, los Estados Árabes, Europa Central y Oriental y en los países subsaharianos aumentó el número de personas con ingresos inferiores a \$ 1 diario.

Otras fuentes como la UNCTAD, señalan en su último informe dedicado a la situación de los países más pobres, que la extrema pobreza se ha duplicado en los últimos 30 años y que afecta ahora a 307 millones de personas. Los países llamados eufemísticamente “menos adelantados” por diversos organismos internacionales, son 49 en total, de ellos 34 de África. Según advierte la UNCTAD

en su informe, si persisten las condiciones económicas actuales el número de personas en la extrema pobreza en estos países superará los 420 millones para el 2015.

La ausencia de un crecimiento económico sostenido y el aumento de la desigualdad se han convertido en un freno para la reducción de la pobreza. En los noventa, tan sólo 30 de los 155 países subdesarrollados y países exsocialistas de los que se disponen datos-aproximadamente uno de cada cinco-alcancó un crecimiento de ingresos per cápita de más de un 3% anual.

De 67 países de los que se dispone de datos, 37 vieron como sus tasas de pobreza aumentaban en la década de los noventa.

Los habitantes de Europa Central y Oriental y de la Comunidad de Estados Independientes finalizaron la década de los noventa con peor salud y con unos ingresos medios más bajos que los habitantes de América Latina y el Caribe. La pobreza se ha triplicado para casi 100 millones de personas; el 25 % de la población de estos países ex-socialistas. Los siete de la Comunidad de Estados Independientes finalizaron la década de los noventa con ingresos cercanos a los de los países subdesarrollados más pobres.

Fuentes especializadas coinciden al decir que aunque se logre reducir a la mitad la proporción de personas en situación de pobreza absoluta para el año 2015 con relación a 1990, al menos 900 millones de personas seguirán viviendo en la extrema pobreza en el mundo subdesarrollado.

La desigualdad de los ingresos a nivel mundial y por países sigue siendo fuente de pobreza.

Ya en la década de los ochenta, se hacía evidente la notoria desigualdad existente entre los países ricos y los países más pobres. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, en 1980 el PNB per cápita de un grupo seleccionado de 19 países capitalistas desarrollados ascendió a la suma de 6 658 dólares en 1975, mientras que en 63 países de ingresos medios era de 903 dólares y en los 32 países más pobres era tan sólo de 168 dólares.

En 1999, la brecha de ingresos aumentó, siendo el PIB per cápita de los países capitalistas desarrollados de 25,860 dólares, en cambio el de los países subdesarrollados en su conjunto de 3,530 dólares, mientras que en los países más pobres, el PIB per cápita era de 1,170 dólares. La brecha del ingreso promedio de los 20 países más ricos y el promedio de los 20 países más pobres ha aumentado en los últimos cuarenta años a más de 30 veces.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2002 apuntaba que, aunque la definición de desigualdad de ingresos global es confusa, existe un consenso generalizado sobre lo vergonzoso de sus niveles y que esta desigualdad continúa en aumento. Los ingresos se distribuyen más desigualmente entre los habitantes de la Tierra (con un coeficiente de Gini de 0,66) que en el país más desigual (Brasil, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini de 0,61)

Según el Banco Mundial, en 1960 el ingreso promedio en los 20 países más ricos era 37 veces mayor que el de las 20 naciones más pobres y esta brecha se ha duplicado en los últimos 40 años.

Diferentes estudios señalan que en 1820, los ingresos per cápita de Europa occidental equivalían a 2,9 veces los de África y en 1992 a 13,2 veces. Otros estudios nos muestran las diferentes formas en que se manifiesta la desigualdad de ingresos en el mundo.

- En el año 2001, el 5% más rico de la población mundial recibió 114 veces los ingresos del 5% más pobre.
- Los 25 millones de norteamericanos más ricos tenían en el año 2001 tantos ingresos como los casi 2,000 millones de personas más pobres del mundo.
- La desigualdad a nivel mundial es muy elevada. En 1993, el 10% más pobre del mundo tenía sólo un 1,6% del ingreso del 10% más rico.
- El 1% más rico de la población mundial recibió tanto ingreso como el 57 % más pobre (año 2001).
- Alrededor del 25% de la población del mundo recibió el 75% del ingreso mundial en el año 2001.
- Las tres personas más ricas del mundo tenían en el 2001 activos que superan el PIB combinado de los 48 países más pobres.

Se agudiza la inseguridad alimentaria.

En 1975, la FAO declaraba que 500 millones de personas pasaban hambre, en la actualidad la cifra ha aumentado, según la propia organización, que calcula que unos 840 millones de habitantes padecen hambre o están expuestos a los efectos de la inseguridad alimentaria, de ellos 777 millones viven en los países subdesarrollados. A nivel regional, si se excluye China, el número de hambrientos ascendió. En Asia Meridional y África Subsahariana se concentra el mayor número de personas que pasan hambre.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en 1996, se lanzó el compromiso de reducir el número de personas subalimentadas a 400 millones para el año 2015. Para eso hace falta una reducción anual de por lo menos 20 millones de personas para poder alcanzar la meta de la Cumbre.

Debido a la pobreza, 150 millones de niños en los países subdesarrollados tienen bajo peso, un factor que aumenta el riesgo de muerte e inhibe el desarrollo mental y físico. Por otro lado, mientras que en los países ricos menos del 5% de todos los niños menores de cinco años sufre de malnutrición, en las naciones pobres la proporción es de hasta el 50%. Según la propia FAO, un niño de un país industrializado va a consumir en toda su vida lo que consumen 50 niños en un país subdesarrollado.

Las cifras de recién nacidos con bajo peso al nacer y de menores de cinco años que padecen de insuficiencia ponderal son muy elevadas en África Subsahariana (14% y 29 %) y en Asia Meridional (30% y 46%), respectivamente.

Según la FAO un adulto requiere para su adecuado desempeño de 2 300 cal/día, bien podríamos, para el caso de los niños, hacer el siguiente cálculo: cada niño consumiría (conforme a las necesidades de los adultos) 839500 cal/año. Es decir, una sola tonelada de cereal nutriría a más de 4 niños, bastarían 1,5 millones toneladas/año para evitar la muerte de los 6 millones de niños menores de cinco años que mueren anualmente. Tal inversión es apenas un 4,5 % de la fortuna de Bill Gates, suponiendo que se comprase el trigo más caro del mercado mundial (norteamericano, por supuesto).

Educación.

En 1980, la UNESCO calculaba que había en el mundo 814 millones de adultos analfabetos, actualmente esta cifra ha aumentado, 854 millones de adultos son analfabetos, de ellos 543 millones son mujeres.

Según datos de la UNESCO y de la UNICEF en 1980 en los países subdesarrollados, más de 200 millones de niños estaban fuera de la escuela, en la actualidad la cifra es de 325 millones de niños en los niveles primarios y secundarios, 183 millones de ellos son niñas.

Mientras la población de los países desarrollados poseía 10 años de escolaridad promedio en 1999, la de los países subdesarrollados apenas llegaba a 3,7 años. En 20 países del Tercer Mundo las tasas de matriculación secundaria de las niñas siguen siendo inferiores a la de los niños.

Los países del Asia Meridional y África Subsahariana se hallan muy rezagados respecto a otras regiones. La tasa de alfabetización de adultos en Asia Meridional se mantiene en el 47% y en el África Subsahariana es del 50%, muy por debajo del 67% para los países subdesarrollados en su conjunto.

Las tasas de alfabetización de adultos en los hombres mayores de 15 años, son superiores a las de las mujeres en casi todos los países del mundo. En África Subsahariana, la tasa de alfabetización de las mujeres alcanza sólo el 53% y en el caso de Asia Meridional el 42 %.

Alrededor de 121 millones de niños no están escolarizados y el número de matriculaciones en el África Subsahariana (59%) y en Asia Occidental y Meridional (74%) es muy bajo. Una vez inscriptos, tan sólo existe una posibilidad entre tres de que un niño finalice la escuela primaria en África.

A esto hay que añadir que uno de cada seis adultos en el mundo es analfabeto y la brecha de género persiste, ya que unas tres quintas partes de los 121 millones de niños sin escolarizar son niñas, y dos tercios de los 876 millones de analfabetos adultos son mujeres.

Aunque no haber conseguido siquiera reducir el número total de niños y niñas sin escolarizar es un fracaso lo suficientemente preocupante por sí -solo en especial si se consideran los peligros como la explotación que supone el trabajo infantil o el

contagio del VIH/SIDA, a los que esos niños y niñas sin escolarizar están muchos más expuestos- las cifras mundiales esconden una verdad aún más preocupante en el plano regional.

Pasan los años y África Subsahariana alberga proporcionalmente el mayor número mundial de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria sin escolarizar, 41 millones en 1990 y 45 millones en 2002.

En muchos casos, las niñas sin escolarizar son invisibles: o bien no se informa sobre su presencia o no se proporciona información suficiente. La terminación de estudios entre las niñas sigue estando por detrás de la de los niños, un 76% contra un 85%. Esta enorme brecha que separa a niños de niñas supone que hay más millones de niñas que de niños que abandonan la escuela cada año. El 84% de todas las niñas sin escolarizar en el mundo viven en África Subsahariana, Asia Meridional y Oriental y el Pacífico.

Las últimas cifras mundiales de la UNICEF, que incluyen tanto la asistencia como la matriculación de las niñas, muestran que 70 países tienen tasas inferiores al 85%.

Una vez más las estadísticas más preocupantes provienen de África Subsahariana, donde el número de niñas sin escolarizar ascendió desde los 20 millones en 1990 a los 24 millones en 2002. En África Subsahariana, entre 8 % y 25% de las tasas de abandono escolar son resultado del embarazo.

En la mayoría de los países, la provisión de educación básica es muy poco equitativa; el 20% de las personas más pobres reciben mucho menos del 20 % del gasto público, mientras que el 20% de las personas más ricas consiguen mucho más. Además, la educación primaria recibe mucha menos financiación por estudiante que la secundaria y la educación superior.

Al mismo tiempo, todavía existen diferencias significativas en el gasto público en educación (en relación con el PIB). En los países subdesarrollados dicha proporción sigue siendo menor de la que dedican los países desarrollados; 3,4% del PIB en los países más pobres, frente al 5,6% en los países más ricos. En los años 90 la Ayuda Oficial al Desarrollo descendió en un 30% en términos reales, a 4,700 millones de dólares de los cuales tan sólo 1,500 millones de dólares estaban dirigidos a la educación.

Empleo

En 1980, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mostraba cifras de desempleo y subempleo en el mundo subdesarrollo de 100 millones de personas. En la actualidad el desempleo continúa siendo un problema muy preocupante y las tasas de desempleo se mantuvieron en niveles récord en el mundo en 2003, con 185,9 millones de personas buscando trabajo, anunció la Organización Internacional del Trabajo en su más reciente informe. Los más afectados fueron los jóvenes de 15 a 24 años (unos 88,2 millones de desempleados), con una tasa de desempleo "considerable" de 14,4%.

- De los desempleados del mundo cerca de 108,1 millones eran hombres, 600 mil más que en el año 2002.
- Los más perjudicados fueron los cerca de 88,2 millones de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, que enfrentaron una abultada tasa de desempleo del 14,4 %.
- La llamada "economía informal" ha continuado en aumento, sobre todo en los países subdesarrollados que registraron tasas bajas de crecimiento del PIB.
- Por regiones, América Latina y el Caribe fue la más afectada por la recesión económica mundial de 2001 en términos de crecimiento de la producción y de pérdidas de empleo.
- A pesar del crecimiento del PIB, Asia Oriental registró un aumento del desempleo. Por su parte, Asia Meridional no sólo no registró un descenso del número de trabajadores pobres, sino que además registró un aumento del empleo informal.
- Oriente Medio y África del Norte también experimentaron un aumento del desempleo, alcanzando una tasa de desempleo del 12,2%, lo que representa la incidencia de desempleo más alta del mundo
- África Subsahariana continua bajo el impacto de la repercusión del VIH/SIDA en los mercados laborales y la continua "fuga de cerebros" que privan a la región de capital humano, haciendo poco probable que puedan alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. En África Subsahariana la gran cantidad de trabajadores pobres, agravada por la pandemia del VIH/SIDA, constituyen un serio obstáculo al crecimiento y el desarrollo.

El número de mujeres que ingresa en la fuerza de trabajo mundial nunca ha sido tan elevado, pero tienen que hacer frente a tasas de desempleo más elevadas y a salarios más bajos y representan el 60 por ciento de los 550 millones de trabajadores pobres. En 2003, 1,100 millones de los 2,800 millones de trabajadores del mundo, esto es el 40%, eran mujeres, lo que representa un aumento en todo el mundo de casi 200 millones de mujeres con empleo en los últimos 10 años.

Por otra parte, según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo de las mujeres en 2003 fue superior al de los hombres en todo el mundo en su conjunto (6,4% para las mujeres y 6,1% para los hombres), de forma que 77,8 millones de mujeres que estaban dispuestas a trabajar y buscaban trabajo se quedaron sin empleo. Sólo en Asia Oriental y África Subsahariana la tasa regional de desempleo de los hombres superó a la de las mujeres, con un 3,7% de desempleo masculino en Asia Oriental frente a un 2,7% de desempleo femenino, y un 11,8% de desempleo masculino en África Subsahariana frente a un 9,6% de desempleo femenino.

Según la misma fuente, en América Latina y el Caribe, la tasa de desempleo femenino fue de un 10,1% frente a una tasa del 6,7% para los hombres, mientras que en Oriente Medio y África del Norte la tasa de desempleo femenino del 16,5% fue 6 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

Para los jóvenes en general, pero sobre todo para las jóvenes de 15 a 24 años resultó incluso más difícil encontrar un trabajo, elevándose el número de mujeres jóvenes desempleadas en todo el mundo a 35,8 millones

De los 550 millones de trabajadores pobres del mundo, 330 millones, esto es el 60%, son mujeres, señala el informe de la OIT. Si a los 330 millones de trabajadoras pobres se suman los 77,8 millones de desempleadas significa que se tienen que crear como mínimo 400 millones de empleos decentes para que las mujeres pobres y desempleadas puedan superar la pobreza.

Salud.

Aunque las tasas de mortalidad infantil han descendido en estos 40 años aún las desigualdades en los indicadores de salud entre los países ricos y los países pobres son significativas. Estimados de UNICEF publicados en el "Estado Mundial de la Infancia 2004", indican que la tasa de mortalidad infantil de lactantes es en el Tercer Mundo de 62 por cada mil nacimientos (99 por mil nacidos vivos en los países más pobres); mientras que en los países desarrollados es de 5 por mil nacidos y en África Subsahariana la cifra asciende a 106 por mil nacidos vivos.

Mientras que la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en los países subdesarrollados es de 90 por mil nacidos vivos, en los países más pobres la cifra se eleva a 158 por mil nacidos vivos y en el África Subsahariana a 174 por mil nacidos vivos.

La esperanza de vida al nacer en los países subdesarrollados es de 64 años (en los países más pobres es de 43 años), mientras que en los países industrializados es de 78 años como promedio. En el caso de África Subsahariana, la esperanza de vida sigue siendo de apenas 46 años.

Cada año, en los países del Tercer Mundo más de 12 millones de menores mueren por causas que en la mayoría de los casos pueden evitarse. De ellos, casi tres millones fallecen por enfermedades diarreicas, unos 500 mil niños quedan definitivamente ciegos a causa del déficit de vitamina A y no menos de 40 mil nacen anualmente con graves lesiones mentales y físicas debido a la carencia de yodo en las madres gestantes.

De acuerdo a la UNICEF, en el año 2000, más de 50 millones de recién nacidos no fueron registrados, un 41% de los nacimientos en todo el mundo. Por regiones, el porcentaje de nacimientos anuales que no se registran es el siguiente: África Subsahariana, 71%, Asia Septentrional 56%, y otras regiones del mundo subdesarrollado, 16%.

En cuanto a la salud reproductiva, cada año, aproximadamente 500 mil mujeres pierden la vida debido a complicaciones durante el parto y el embarazo. De esas defunciones, un 99 % ocurren en los países subdesarrollados, todavía en el 2001 vemos que en estos países la cantidad de partos atendidos por personal calificado es solo del 56% y en los países más pobres solo de 29%.

Las tasas de mortalidad materna en el total de países subdesarrollados es de 440 por cada 100 mil nacidos vivos, y en África Subsahariana la cifra es de 940 por cada 100 mil nacidos vivos

De los 40 millones de personas contagiadas con el VIH/SIDA en el mundo en el 2001, el 95% vivía en los países subdesarrollados. Once hombres, mujeres y niños se contagian por minuto. La enfermedad azota con mayor agresividad al África Subsahariana, donde reside el 10% de la población mundial, el 70% de las personas contagiadas con el VIH y el 90% de los huérfanos del SIDA, y donde han muerto el 80% de las víctimas de la epidemia en todo el mundo.

En algunos países africanos, actualmente más del 10% de los niños menores de 15 años son huérfanos. Las estimaciones anteriores de que hacia el año 2001 más de 13 millones de niños del mundo habrían perdido a sus madres o a ambos progenitores debido al SIDA ya se habían superado a fines de 1999.

Distintas instituciones humanitarias han señalado que, de seguir como hasta ahora el azote del SIDA, puede darse una pérdida de 17 años en la esperanza de vida de los 9 países de África en que el VIH tiene una mayor incidencia, con lo cual se regresaría a la esperanza de vida del decenio de 1960 en el año 2010 (47 años).

Aunque el África Subsahariana detenta casi el 70% de los casos de VIH/SIDA, la epidemia está causando daños considerables en otras regiones. La situación en Rusia, India y China, todas con grandes poblaciones y con el riesgo de ver un aumento vertiginoso en sus índices de infección por VIH. En un escenario muy moderado se prevé que para el año 2025 casi 200 millones de personas podrían estar infectadas sólo en estos tres países.

A pesar del enorme potencial de los recientes avances en biotecnología, relativamente poca inversión está orientada a la tecnología que ayuda a solucionar los problemas de la pobreza. Las enfermedades tropicales y la tuberculosis suponían el 11% de la carga mundial de enfermedad en 1999, sin embargo, de los 1 393 nuevos medicamentos aprobados entre 1975 y 1999, sólo 16 algo (más del 1%) estaban desarrollados específicamente para estas dolencias.

En 1998 el gasto mundial en investigación sobre salud fue de 70 mil millones de dólares; pero sólo se destinaron 300 millones de dólares a las vacunas contra el VIH/SIDA y unos 100 millones de dólares a la investigación sobre el paludismo. Actualmente sólo el 10% del gasto total de I+D en el campo de la medicina está dirigido a las enfermedades del 90% más pobre de la población mundial. El paludismo está concentrado casi por completo en los países pobres (99% de los casos) y sigue siendo la causa principal de muerte en muchos de ellos.

A su vez, hay unos 2 mil millones de personas que siguen careciendo de medicamentos esenciales básicos de bajo costo (como la penicilina). La mitad de los niños africanos de un año no han sido inmunizados contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión. La terapia de rehidratación oral, un tratamiento que salva vidas, no se utiliza en casi un 40% de los casos de diarrea en países subdesarrollados.

La tasa de inmunización contra el sarampión en todo el mundo es, como promedio, de sólo el 80% y por año mueren más de un millón de niños, muchos de ellos en África Subsahariana, donde la tasa de inmunización es la más baja, alrededor del 60%. Desde 1990, en África Subsahariana el porcentaje de niños vacunados ha disminuido a menos del 50%.

Casi dos millones de personas mueren todos los años a causa del paludismo y por enfermedades relacionadas con él en su mayoría en los países más pobres. La tuberculosis sigue siendo junto al SIDA, la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad entre adultos, causando hasta 2 millones de muertes al año.

Agua y saneamiento

Se calcula que 600 millones de habitantes urbanos y más de mil millones de personas rurales viven en viviendas superpobladas y de mala calidad.

De los 4 600 millones de habitantes de los países subdesarrollados, 968 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua mejoradas y 2400 millones están sin acceso a saneamiento básico. En Asia vive el 65% de la población sin acceso a agua potable y en África el 28%. Por otra parte, el 80% de la población sin acceso a saneamiento se encuentra en Asia y un 13% en África.

Mientras que en las principales ciudades de Europa y América del Norte, más del 90% de los hogares disponen de conexiones de agua corriente y alcantarillado, en el resto del mundo la situación es muy diferente. En todas las regiones, la cobertura del saneamiento es mucho peor que la del agua.

La privatización del agua y el saneamiento provoca una reducción del acceso de los pobres a los servicios sociales básicos. En los países subdesarrollados, hallar agua segura y de bajo costo es una lucha diaria para la mayoría de la población pobre. En muchas ciudades y pueblos de estos países, entre el 50% y 70% de la población vive en tugurios y asentamientos ocupados por los residentes y sin vivienda digna ni servicios básicos. Muchos pobres terminan pagando hasta 20 veces más que los ricos por el agua.

Las consecuencias de la insuficiencia o la falta de acceso al agua son devastadoras, especialmente para las mujeres y los niños. En los años noventa, el número de niños muertos por diarrea causada por la falta de agua y saneamiento superó a las víctimas de conflictos armados registradas desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que 2,2 millones de personas, niños en su mayoría, mueren cada año a causa de enfermedades asociadas con la falta de acceso a agua potable, saneamiento inadecuado y falta de higiene.

En el Asia Meridional, sólo el 37% de la población tiene acceso a saneamiento adecuado, cerca de 1 400 millones de personas aún defecan en espacios abiertos o en antihigiénicas letrinas de cubo. En el África Subsahariana, el problema más apremiante es el agua potable, al que sólo tiene acceso el 57% de la población, un

promedio que no muestra las enormes diferencias entre las zonas rurales y urbanas.

Las mujeres y las niñas soportan el grueso de la carga que representa el abastecimiento del agua en las viviendas del medio rural, y a menudo deben caminar grandes distancias para buscarlas y satisfacer las necesidades mínimas de su hogar. En los países más pobres, el 20% de los niños mueren antes de cumplir los cinco años, principalmente por enfermedades contagiosas relacionadas con la insuficiencia o la mala calidad del agua.

Se calcula que las mujeres de África y Asia deben caminar una distancia promedio de seis kilómetros para recoger agua. El peso del agua que las mujeres en África y Asia llevan sobre la cabeza asciende a unos 20 kilogramos.

Según diversas fuentes de las Naciones Unidas, el costo de lograr la meta de prestar servicios sociales básicos para todos en los países subdesarrollados se estima en unos 40 mil millones de dólares por año hasta el año 2005. Esta cifra representa menos del 0,2% del ingreso mundial y alrededor del 1% del ingreso de los países subdesarrollados.

Si desagregamos esta cifra, veremos que el costo anual de garantizar la enseñanza básica para todos sería de 6 mil millones de dólares anuales, en salud y nutrición básicas 13 mil millones de dólares, en salud reproductiva y planificación familiar 12 mil millones de dólares y por último, en el suministro de agua y saneamiento de bajo costo la cifra sería de 9 mil millones de dólares, que en total nos daría la suma de 40 mil millones de dólares.

Bibliografía.

- Banco Mundial: *Informe sobre el Desarrollo Mundial 2001/2002*
Banco Mundial: *Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2004*
CEPAL (2004): *Panorama social de América Latina 2002-2003*
FAO (2001): *El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo*
PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003*
OIT (2004): *Tendencias mundiales del empleo 2004.*
OMS (2003): *World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life.*
Ginebra.
UNICEF. *Estado Mundial de la Infancia 2003,2004*
UNCTAD (2002): *The Least Developed Countries Report*

Economía de los Estados Unidos: una retrospectiva de las últimas cuatro décadas.

Faustino Cobarrubia Gómez

Coordinador del Grupo de Comercio e Integración del CIEM

Del auge económico sostenido a la “estanflación”

Las significativas transformaciones ocurridas en el orden económico internacional de posguerra han tenido, de una u otra forma, en su base el desempeño de la economía de los Estados Unidos y su lucha por mantener o recuperar la hegemonía económica que ejerció desde el fin de la 2da. Guerra Mundial. En las postrimerías de los años 60 comenzaron a manifestarse de forma creciente los problemas económicos norteamericanos, que desembocaron en las profundas crisis cíclicas de 1970/1971, 1974/1975 y 1980/1981, caracterizadas por fases recuperativas cada vez más cortas y de inflación galopante. Había llegado definitivamente el fin de la “época dorada” de la posguerra.

Durante todo el periodo 1974-1979, una de las manifestaciones más agudas de la crisis fue la aparición del novedoso fenómeno de la “estanflación” –la combinación de una baja tasa de crecimiento económico, desempleo masivo y una inflación de dos dígitos–, incluyendo la fase de recuperación cíclica que se extendió desde marzo de 1975 hasta noviembre de 1979. A través de esta y a pesar de todas las medidas aplicadas para estimular la economía, se hizo evidente que la crisis no había sido superada y que el costo de los mecanismos “salvadores” era una espiral inflacionaria asentada en un estancamiento económico relativo, que a su vez impulsaba aún más la ampliación del crédito y la especulación.

Mientras en la década del 60 la inflación se mantenía en torno al 2%-3%, entre 1971 y 1973 se elevó a 5%, saltó a 10% en 1974/1975 y alcanzó el pico de 13% en 1979/1980. El desempleo, por su parte, llegó al record de 9% durante las fases recesivas – como en 1975 y 1981– y su nivel más bajo nunca resultó inferior al 6% (Stoffaes, 1982).

Debido a la excesiva emisión monetaria por parte de los Estados Unidos, las fuerzas inflacionarias estaban derramándose de un país a otro, hasta abarcar la totalidad de la economía mundial, tanto a través del canal de los niveles de precios en el mercado internacional, como por la vía de los flujos de capital. Esta nueva “era de inflación”, distorsionó los valores de las monedas y socavó la estabilidad económica tanto en el ámbito nacional como global.

La espiral de gastos militares alimentada, entre otras cosas, por la escalada masiva de la guerra de Viet Nam, combinado con el aumento de las erogaciones sociales enmarcadas en el Programa de la Gran Sociedad del presidente Johnson,

originaron fuertes tensiones en el presupuesto federal, que trocaron el exiguo excedente de 1969 en déficit crecientes que alcanzaron los 79 mil millones de dólares en 1981 (Economic Report of the President, 2001).

Además de la persistencia del desbalance fiscal, un papel importante en el descontrol inflacionario lo desempeñó la notable tendencia hacia el endeudamiento generalizado provocada por la progresiva pérdida de confianza en el dólar, la inclinación hacia el consumo y el favorable sistema impositivo. En otras palabras, el endeudamiento estaba siendo intensamente utilizado para llevar a la producción, al consumo e incluso a la especulación— a la cual se dedicó parte importante del crédito— más allá de lo que habría sido posible por las solas condiciones imperantes en el ámbito productivo; pero ello ocurría a costa de una progresiva y peligrosa falta de correspondencia entre los niveles de endeudamiento y los bajos ritmos de la acumulación.

En el decenio del 70, las deudas pública, personal y de las corporaciones se incrementaron en 137%, 190% y 243%, respectivamente. En conjunto, estas obligaciones sumaban en 1980 los 5 mil millones de dólares y los intereses alcanzaban el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Por otra parte, el balance comercial norteamericano, que había sido favorable a lo largo de 77 años (entre 1893 y 1970) se hizo negativo en 1971 y lo siguió siendo cada vez más (años 1972, 1974 y 1976 en adelante) hasta alcanzar el déficit record de casi 30 mil millones de dólares en 1978. La balanza en cuenta corriente también empeoró desde principios de los años setenta y los déficits se hicieron más altos y frecuentes (años 1971, 1972, 1977, 1978, 1979 y 1982 en adelante).

Es en la pérdida de competitividad basada en el retraso en los ritmos de crecimiento de la productividad del trabajo donde se encuentra la explicación básica a estos continuos déficits externos norteamericanos. En efecto, el rendimiento anual por trabajador aumentó apenas un 0,2% en Estados Unidos entre 1973 y 1980, mientras que en los restantes países capitalistas desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alcanzó un 2,2%.

Todo lo anterior se reflejó en el debilitamiento relativo de la hegemonía económica norteamericana y, en consecuencia, en el derrumbe del sistema establecido en Bretton Woods, el cual precisamente funcionaba sobre el supuesto de que la moneda-divisa, el dólar, expresaba condiciones de alta competitividad y solidez de la economía emisora.

Quizás, los acontecimientos que primero indicaron la transformación en la posición global de la economía norteamericana, tuvieron lugar en 1973. En fecha tan temprana, Estados Unidos perdió el control, primero del sistema monetario internacional, cuando el presidente Nixon se vio obligado a suspender unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro provocando el colapso del sistema de Bretton Woods y el paso a tipos de cambio flexibles; y luego del mercado mundial de energía a partir de la crisis petrolera.

En términos más concretos, el deterioro de la hegemonía estadounidense se expresó en la declinación del país en determinadas categorías del poderío económico. Mientras que en 1950 la economía norteamericana representaba el 20% y el 40% del comercio y el PIB mundiales, respectivamente, ya en 1980 la proporción era de 21,5% de la producción (se había reducido casi a la mitad) y de sólo 11% en el comercio mundial.

Por esos años la Comunidad Económica Europea (CEE) y Japón redujeron apreciablemente la distancia que los separaba de Estados Unidos y especialmente a fines de la década del 60 y principios de la del 70, los países comunitarios actuaron con notable dinamismo logrando avances en el proceso integracionista eurooccidental y llegando a superar a Estados Unidos – como sumatoria de países miembros– en cuanto a PIB, producción industrial y primer centro comercial internacional. Parecía a algunos, entonces, que Europa Occidental integrada económicamente y efectuada incluso su unión monetaria frente al derruido sistema monetario de Bretton Woods y la caída del dólar, podría alcanzar y quizás sobrepasar en no mucho tiempo a Estados Unidos. También Japón comenzaba a perfilarse como un serio rival al alcanzar entre 1961 y 1973 un crecimiento medio anual del PIB de 9,6% –comparado con sólo 4% para Estados Unidos– y mostraba una notable competitividad comercial y altos ritmos de crecimiento de la productividad del trabajo.

La administración Reagan: el difícil tránsito hacia el neoliberalismo

Cuando la administración Reagan asume el poder en los años 80 se propuso como objetivo esencial restaurar la salud económica de Estados Unidos y su debilitada hegemonía, sobre todo a través de la contención de la inflación. En correspondencia con su visión de que la causa del problema radicaba en la aplicación desmedida de la política keynesiana de intervencionismo estatal, el programa económico del nuevo inquilino de la Casa Blanca se encauza por una vía de marcado sesgo neoliberal.

De los tres pilares del reaganomics –recorte simultáneo de impuestos y gastos federales (entiéndase no militares), eliminación de las regulaciones y la burocracia estatal, y la reducción de la inflación a través del control de la oferta monetaria– sólo el primero rompe verdaderamente con la tradición conservadora de un programa antinflacionario. Los otros dos componentes reflejaban ideas en boga en Estados Unidos desde hacía tiempo. En este sentido, la política económica de Reagan es más el final de un camino que una ruptura con la tradición.

El reaganomics, si bien logró controlar la inflación y relanzar el crecimiento económico, aceleró el deterioro de largo plazo de la posición de Estados Unidos. Al retrasar la tarea de la recomposición productiva del país, hizo más difíciles los problemas estructurales de dicha economía y dejó una pesada carga.

Una masiva reducción de impuestos sin una reducción complementaria de los gastos del gobierno federal, había dado como resultado un enorme y continuado déficit presupuestario. Este déficit dió un poderoso estímulo fiscal o keynesiano subsiguiente a la economía norteamericana y, en menor medida, a la economía

mundial. Sin embargo, los inadecuados ahorros norteamericanos significaron que Estados Unidos tuvo que financiar el déficit presupuestario a través de grandes préstamos tomados en los mercados internacionales de capital.

Así, desde finales de 1982, se inició una etapa de recuperación, que resultó entonces la más larga en tiempos de paz desde la 2da. Guerra Mundial. Sin embargo, esa recuperación, y aún teniendo presente su notable duración de más de 90 meses, se asemejó a la de 1976-1979 en el sentido de que se desarrolló con bajos ritmos de crecimiento de los niveles de actividad, los cuales distaron mucho de alcanzar las tasas que se dieron en las etapas de recuperación de las décadas previas a los años 70.

La masiva estructura militar creada en los años ochenta, que elevó los gastos por este concepto hasta niveles sin precedentes y la larga recuperación económica experimentada por Estados Unidos fueron financiadas principalmente a través de préstamos externos. Las tres fuentes mayores del financiamiento norteamericano fueron los países que ahorraban el superávit mundial: ciertos productores árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –principalmente Arabia Saudita–, Alemania Occidental y, en especial Japón.

En este contexto, Japón suplantó a Estados Unidos como nación acreedora dominante y potencia financiera. Mientras la economía nipona se convertía en la principal exportadora de capitales del mundo, Estados Unidos se erigía, en 1985, en un deudor neto por primera vez desde 1914. Nunca antes en la historia de las finanzas internacionales se había producido semejante cambio decisivo en un tiempo relativamente tan corto. En menos de cinco años, el país más rico del mundo había revertido una tendencia mantenida durante un siglo, convirtiéndose en la nación más endeudada del mundo.

La presencia cada vez mayor de capitales japoneses en Estados Unidos, comprando todo tipo de activos, desde Columbia Pictures hasta edificios del centro de Manhattan, incluido el centro Rockfeller, provocó las reacciones más diversas en la prensa estadounidense. Los norteamericanos comenzaron a preocuparse por el hecho de que, como bromeó un empresario: “No sólo nuestros automóviles se hacen en Japón, sino también y cada vez más, nuestras tasas de interés”.

Estados Unidos se transformó, definitivamente, en una “sociedad casino”, la centralización de capitales y los movimientos especulativos de capital pasaron a constituir fenómenos de primer orden, amparados por el crecimiento de la bolsa de valores, por procesos de adquisiciones y fusiones con base en un elevado “apalancamiento” y por medio de instrumentos como los “bonos chatarra”, entre otros.

Los niveles de endeudamiento alcanzados en la economía estadounidense resultaron tan desproporcionados que el sistema financiero se transformó en un verdadero “talón de Aquiles”, en torno al cual se configuraron los mayores grados de incertidumbre respecto al comportamiento futuro de la economía y las mayores amenazas en relación con un posible estallido que tendría el detonador más eficiente en los aspectos financieros. La relación entre la deuda total de los

sectores no financieros y el PIB de Estados Unidos aumentó de 142% en 1980 a 187% en 1990, es decir, representaba casi el doble del producto.

Una consecuencia directa de esos elevados montos de endeudamiento fue el rápido crecimiento de los pagos por intereses en los gastos de las empresas, de las personas y del gobierno. Entre 1980 y 1989, los pagos por concepto de intereses para las corporaciones no financieras aumentaron de 3,6% a 5,1%; mientras que para el gobierno lo hicieron de 9,4% a 14,5%.

Contrariamente a la teoría de la oferta, los consumidores norteamericanos respondieron a la reducción de impuestos endeudándose más, en lugar de aumentar sus ahorros. La tasa de ahorro personal cayó de 10,2% en 1980 a 7,5% en 1989, al tiempo que la tasa de ahorro bruto en igual período pasó de 19,6% a 17,6%. Los norteamericanos estaban consumiendo la fuente de su riqueza nacional y también la de otros, en lugar de ponerla en inversiones productivas.

Por otra parte, los llamados déficit gemelos (fiscal y comercial) se hicieron crónicos y alcanzaron cifras sin precedentes, lo mismo que el desequilibrio en la cuenta corriente de Estados Unidos. El dólar sobrevaluado resultante del déficit presupuestario, alentó una entrada masiva de importaciones y forzó a la industria norteamericana a producir en el exterior cada vez más de sus componentes y productos destinados tanto al mercado nacional como internacional.

La desindustrialización de significativos sectores de la economía norteamericana y el creciente desempleo, alimentaron fuerzas favorables al proteccionismo económico. La agricultura estadounidense, que hacía tiempo era un baluarte del comercio libre, se vio devastada por altas tasas de interés y por el dólar sobrevaluado; los granjeros norteamericanos sufrían una crisis de deuda, al mismo tiempo que estaban perdiendo sus tradicionales mercados de ultramar.

El masivo ingreso de capitales en la economía estadounidense durante los años 80 constituía una expresión concentrada de algunos de los principales problemas presentes en la economía norteamericana desde la década anterior.

Por un lado, la entrada de capitales fue impulsada por los voluminosos déficits en la balanza comercial y por la desfavorable posición competitiva de Estados Unidos frente a otros países, no solamente industrializados sino también respecto de algunas economías consideradas como de desarrollo medio. Por otro lado, el nivel alcanzado por el ingreso de capitales era resultado de la creciente vocación deudora de la economía estadounidense, que condicionaba un funcionamiento cada vez más dependiente de elevados niveles de crédito de origen interno y externo.

Asimismo, la avalancha de capitales hacia Estados Unidos, que llegaban en un volumen progresivamente mayor que la salida de los capitales estadounidenses al resto del mundo, era una consecuencia del grado en que la economía norteamericana pasó a depender de recursos mayores a los que era capaz de generar, para hacer frente tanto a la continuidad de sus procesos de acumulación, como a las necesidades de recomposición de su base productiva.

El alcance de la nueva economía

Durante los últimos 15 años se han producido profundas transformaciones en la base tecno-productiva del funcionamiento económico de los Estados Unidos, apoyadas en los notables avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Esta formidable oleada tecnológica habría abierto paso a una “nueva economía” y, por lo tanto, Estados Unidos entraba en una era de prosperidad y de bienestar social duraderos, caracterizada por un crecimiento económico sin límites, la desaparición de las crisis cíclicas, el establecimiento de la competencia perfecta y la recuperación de la hegemonía económica norteamericana. La “nueva economía”, apoyada básicamente en las nuevas tecnologías, se presentaba, así, como sepulturera automática de las viejas reglas de funcionamiento del sistema capitalista porque se sustentaba en una lógica totalmente diferente, la de las redes y el ciberespacio.

En efecto, aunque representan una porción relativamente pequeña de la economía de los Estados Unidos, las industrias de la informática (software y equipos) y las comunicaciones han incrementado su participación dentro del PIB, de 4,9% en 1985 a más de 8% actualmente. En la segunda mitad de la década de los 90, estos sectores tecnológicos contribuyeron en casi un tercio al crecimiento económico real del país y sus ingresos crecieron en alrededor de 120%. Se ha consolidado el sesgo de la economía norteamericana hacia la actividad terciaria o de servicios (72% del PIB).

La parte de la economía estadounidense que funciona sobre la base de Internet se eleva hasta aproximadamente 70%. Las tecnologías de la información e Internet crearon más de 2,3 millones de nuevos empleos entre 1995 y el 2000. Más del 60% de las pequeñas y medianas empresas norteamericanas están conectadas a Internet, al menos el 40% de ellas tiene sus propios sitios o páginas web. Algo más de la mitad de la población estadounidense posee una computadora personal y esta conectada a Internet.

Sin dudas, esta llamada revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones desempeñó un papel nada despreciable en la larga expansión económica que disfrutó Estados Unidos en la década del 90. La influyente revista Business Week lo reflejaba así: “el carácter excepcional de esta expansión, lograda por la alta tecnología, explica en buena medida la capacidad de la economía norteamericana para hacer cohabitar tasas de desempleo bajas, crecimiento acelerado e inflación controlada, de una manera que los economistas consideraban imposible” .

Desde marzo de 1991 hasta marzo del 2001, la economía estadounidense disfrutó del período de expansión más largo en tiempos de paz de su historia, con 120 meses consecutivos de crecimiento, que eclipsaron el record anterior de 106 meses establecido en los años sesenta durante la administración Johnson. Especialmente, en 1995-2000, el aumento del PIB fue superior al 4% promedio

anual (comparado con 1,8% Alemania y 1,2% Japón) y la tasa de desempleo descendió a 4,6% –lo que equivale casi al pleno empleo–, mientras la inflación apenas tocaba el 2%.

En la base de este dinamismo estaban los impulsos constantes de la productividad del trabajo debido a la acelerada integración del desarrollo tecnológico en la economía de Estados Unidos, lo cual facilitó el aumento del empleo sin una escalada de los precios. La productividad del trabajo en el sector industrial norteamericano se elevó, de una tasa promedio anual de 1,4% antes de 1995, a un nivel en torno al 3% como promedio anual durante 1995-2000 (The Economist, 2003).

Este marco favoreció la aplicación de una política monetaria esencialmente expansiva. Dado el predominio de un clima de control inflacionario, se puso en práctica una política de reducción de las tasas de interés, las cuales se mantuvieron en torno al bajo nivel de 3% hasta más allá de mediados de la década del 90. En síntesis, se instrumentó una política monetaria que combinó flexibilidad, ante el aumento de las posibilidades de crecimiento económico, con el mantenimiento de una firme credibilidad en su orientación antinflacionista.

Al propio tiempo, se aplicó una política fiscal de claro signo restrictivo, guiada por una disminución sensible de los gastos sociales –al punto de colocar en fuerte cuestionamiento el sistema de bienestar norteamericano– y por cierta austeridad de las erogaciones militares, derivado del período de distensión que pareció abrirse con la desaparición de la URSS. El enorme déficit en las cuentas del gobierno, superior a los 290 mil millones de dólares en 1992, se transformó en superávit creciente entre 1998 y el 2001.

Sin embargo, los resultados apuntados previamente se han logrado a costa de la acumulación y profundización de importantes problemas estructurales en la economía norteamericana, los cuales imponen límites a su expansión.

Uno de los problemas es la formación de una “burbuja financiera” creada a partir de un irracional proceso especulativo en la bolsa de valores. En siete de los ocho años comprendidos entre 1992 y 1999, el consumo creció más rápido que los ingresos de los estadounidenses.

La búsqueda de altos márgenes de ganancia sobre el capital en el corto plazo –facilitada por los grandes adelantos tecnológicos y los cambios institucionales–, intensificó el traslado, casi masivo, de las compañías estadounidenses hacia los mercados financieros, sobre todo hacia la compraventa de títulos, creando una enorme brecha entre el alto dinamismo de ese mercado y el resto de la actividad económica.

Al final del 2000, los hiperinflados precios de las acciones habían aumentado la riqueza en el mercado de valores hasta 17 millones de millones de dólares, cifra superior en más de 10 millones de millones de dólares a la de 1995. El capital financiero norteamericano manejaba una masa de dinero tan colosal, que

superaba decenas de veces el valor de lo que se producía en bienes y servicios en el país.

A tal punto llegó el frenesí especulativo que para 1995-1997 la economía estadounidense por sí sola representaba más del 40% del total mundial de capitalización y más del 50% en valores comerciados en la totalidad de las bolsas de valores, las cuales incrementaron su presencia en el funcionamiento económico interno de los países desarrollados.

Muy asociado con lo anterior, está el desmedido endeudamiento de las familias, las compañías y el gobierno norteamericanos, que pidieron préstamos teniendo como principal garantía el valor artificial de las acciones poseídas. En conjunto, estas obligaciones más que duplicaban el PIB de la nación en el año 2001.

A todo lo largo de los años 90, la primera economía del planeta se afianzó como verdadera aspiradora de capitales externos, siendo actualmente, por mucho, la principal deudora del mundo. La deuda externa neta estadounidense ha crecido desde un promedio de 268 mil millones de dólares en 1990-96 hasta la escandalosa cifra actual superior a los 2,8 millones de millones de dólares (23% del PIB), casi la dimensión de las economías de Alemania y Francia combinadas (USTR, 2001). Esto significa, entre otras cosas, que los Estados Unidos están muy expuestos a los cambios en las tasas de interés globales y a las expectativas del mercado financiero internacional.

Adicionalmente, las tendencias relacionadas con la capacidad de ahorro de la sociedad norteamericana no resultaron favorables. Mientras que durante 1992-2000, la proporción del ahorro neto del sector público norteamericano (gobierno federal estadual y local) en el PIB se elevó en 7,8 puntos porcentuales, la participación del ahorro neto privado cayó en 5,5 puntos porcentuales. A principios del 2001, la tasa de ahorro personal en los Estados Unidos descendió a su más bajo nivel en la historia.

Más aún, los ahorros se apartaron de su distribución más productiva en el sector privado, con lo cual, en el largo plazo, se socava la productividad del trabajo, el crecimiento económico y los niveles de vida.

No es posible olvidar en este inventario de problemas estructurales de la economía estadounidense el asombroso incremento de los desequilibrios en la balanza comercial y en la cuenta corriente. Luego de la evidente tendencia hacia la disminución del desbalance comercial registrada entre 1988 y 1991, se ha suscitado nuevamente una espiral ascendente que ha llevado dicho desbalance de 35,6 mil millones de dólares en 1992 hasta el record histórico de más de 490 mil millones de dólares en el 2003. El desequilibrio en la cuenta corriente alcanzó los 541,8 mil millones de dólares en el 2003 frente a apenas 50 mil millones de dólares en 1992, lo cual precisa de una entrada de capitales de mil 500 millones de dólares por cada día laborable.

Como expresión concentrada de todos estos desequilibrios apareció la recesión económica en Estados Unidos entre marzo y noviembre del 2001, tras el estallido

de la burbuja especulativa, que afectó especialmente a las empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cayó la inversión productiva, disminuyeron las ganancias corporativas y se elevaron los niveles de desempleo, entre otras evidencias.

Situación más reciente

La expansión de la actividad económica de los Estados Unidos en 3,1% durante el año 2003, al dejar atrás los magros resultados del 2001 (0,5%) y del 2002 (2,2%) parece despejar el camino de la Casa Blanca, empeñada en la aplicación de una política económica que asegure un segundo mandato al presidente Bush. No obstante, es necesario anotar que entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado la dinámica del PIB de la primera economía del planeta se desaceleró abruptamente y cayó más de la mitad, de 8,1% pasó a 4,1%.

Una parte importante de este comportamiento favorable se explica por el repunte de los gastos de consumo personal, que constituyen más de las dos terceras partes de la actividad económica de la nación y hasta ahora el principal motor de la recuperación iniciada oficialmente en noviembre del 2001. Las compras de los norteamericanos se incrementaron 3,1% durante el 2003, un ritmo casi igual al del año anterior (3,4%).

El refinanciamiento de los créditos hipotecarios a menores tasas de interés y una ligera reanimación de los créditos bancarios, acompañado de las reducciones impositivas puestas en práctica por la actual administración republicana, han contribuido a levantar el ánimo y reorientar las decisiones de los agentes económicos. Los impuestos a las corporaciones medidos como porcentaje del PIB, se ubican en niveles de hace 70 años y el estímulo impositivo general se calcula, hasta ahora, en 68 mil millones de dólares.

El incremento de las erogaciones asociadas a la defensa ha sido otro elemento clave en la prevención de una contracción económica en el corto plazo, al elevarse hasta niveles jamás vistos desde la guerra de Corea (1950-1953). El “combate contra el terrorismo”, incluida la guerra contra Irak y la necesidad de suministros y el mantenimiento de las tropas, provocó un aumento promedio de los gastos militares estadounidenses desde 348,5 mil millones de dólares en el 2002 hasta 497,7 mil millones de dólares en el 2003. Durante el año en curso, el gobierno federal podría solicitar 50 mil millones de dólares adicionales sólo para las operaciones en Irak.

El Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés) refiere que los gastos antiterroristas asociados a la “seguridad del hogar” se elevaron hasta el 4,7% del PIB en el 2003. Asimismo, se estima que el gobierno norteamericano oculta 337 mil millones de dólares de sus gastos de defensa: el presupuesto de defensa anunciado para el 2005 asciende a 420 mil millones de dólares (4,2% del PIB), pero alcanzará en realidad un mínimo de 757 mil millones de dólares.

Por otra parte, la inversión productiva parece despertar del gran letargo de casi dos años y en el 2003 creció 4,3%, frente a los descensos de -8,4% y -1,2% en el 2001 y el 2002 respectivamente. En particular, los importantes gastos en software y equipos aumentaron 5,5%, sobre todo en los dos últimos trimestres del año (17,6% y 15,1% consecutivamente), consolidando su tendencia positiva iniciada en el segundo trimestre del 2002.

Adicionalmente, en el tercer y cuarto trimestres del 2003 se suscitó un repunte de las exportaciones estadounidenses, cuya dinámica se elevó hasta 9,9% y 21% respectivamente, lo cual está vinculado, en lo fundamental, a la depreciación del dólar.

Perspectivas

A la luz de todas estas evidencias, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ha proseguido con la estrategia deliberada y virtualmente agotada de bajar las tasas de interés para impulsar la reactivación de la economía estadounidense. El precio del dinero ha caído hasta 1% después de 13 rebajas sucesivas desde enero del 2001, un registro sólo comparable al de 1958.

La caída en los rendimientos y en las tasas de interés hipotecarias, que se encuentran en los niveles más bajos de las últimas cuatro décadas, tuvieron un papel vital para sacar a la economía de la recesión que vivió en el 2001 y cualquier viraje de la tendencia podría obstaculizar al crucial mercado de la vivienda.

Ello se apoya, entre otras cosas, en el hecho de que la inflación aumentó a ritmos muy moderados: durante el año 2003, el índice de precios al consumidor se incrementó a un ritmo anual inferior al 2%. Si bien el alza en el precio del petróleo ha conducido a un avance de la inflación general en el último año, la llamada inflación estructural, que excluye los costos de los alimentos y la energía, se ha desacelerado.

En la situación actual el riesgo principal asociado a la política monetaria no es la inflación, sino la deflación, o reducción de los precios dado un pobre crecimiento económico. La preocupación se debe a la semejanza que pudiera establecerse entre la situación económica actual de Estados Unidos y las dificultades confrontadas en este sentido por Japón, derivadas de la inutilidad en que cae la política monetaria cuando la deflación se entroniza en un contexto de estancamiento económico. Una tasa de interés muy baja, cercana a cero, crearía problemas con los instrumentos financieros de corto plazo y por ello la Reserva Federal debe crear un plan contra la posibilidad de una crisis deflacionaria.

La política fiscal de la administración de George W. Bush ha sido muy activa y ha estado marcada por tres reducciones de impuestos. Esta ha sido su principal política en el terreno de la economía. Se considera, desde la perspectiva oficial, que estas disminuciones deben estimular el crecimiento económico, si los recortes de impuestos se traducen en inversiones y mayores gastos de consumo, en lugar de reducir el crecimiento de la economía debido a la posible subida de las tasas de

interés, que podría ocurrir si el tamaño del déficit y la deuda federal con respecto a las dimensiones del producto nacional desvían financiamiento del sector privado.

Sin embargo, existen evidencias de que estas reducciones impositivas han tenido un sesgo regresivo en un primer momento; es decir, han empeorado la distribución de la riqueza y han encarecido relativamente el costo de la fuerza de trabajo, contribuyendo a la anémica inversión y creación de empleo.

El último programa de reducción de impuestos, firmado por el Presidente el 28 de mayo del 2003, --denominado "paquete de crecimiento de 350 mil millones de dólares"-- aprovechó la victoria militar en Irak para reducir la resistencia de los críticos en el Congreso. Se ha estimado que debe aportar indirectamente unos 210 mil millones de dólares entre el 2003 y el 2004, dándole un impulso adicional al mercado.

En esta reducción de impuestos se considera que el Presidente se ha interesado más en reducir impuestos, que en realizar cambios estructurales en el sistema impositivo. No menos importante es identificar la evidente inclinación neoclásica, o neoliberal de tal política, en tanto privilegia los instrumentos indirectos de mercado, en lugar de estimular el empleo de mecanismos de intervención directa a través de los gastos del presupuesto.

La reforma impositiva en combinación con las abultadas erogaciones militares, podría terminar alimentando el círculo vicioso de crisis económica, fundamentalmente por la vía del incremento del déficit presupuestario, que en el actual año fiscal alcanzó el record de 374 mil millones de dólares, más del doble que el año anterior. Para el 2004 se pronostica que el desequilibrio presupuestario sobrepasará los 500 mil millones de dólares. El aumento del desequilibrio fiscal junto al de la cuenta corriente de Estados Unidos constituye la principal fuente de inestabilidad económica en el mediano plazo, según Kaspar Villieger, presidente de la junta de gobernadores de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial y ministro de Finanzas de Suiza.

En el ámbito de los Estados de la Unión, la política gubernamental ha derivado en una crisis presupuestaria bastante más sensible políticamente, que la administración observa con cierta indiferencia, al menos si no llega a tener mayores repercusiones en el plano electoral. Los Estados de conjunto enfrentan una carencia de ingresos ascendente a 21,5 mil millones de dólares en el año fiscal 2003, la mitad de los cuales están concentrados en dos Estados: California y Nueva York. Ello se debe a que excepto Vermont, todos los Estados tienen que balancear sus presupuestos. Ello implica reducir los gastos estatales, o aumentar los impuestos. Las medidas son dolorosas. La mitad de las escuelas de los distritos de Oregon están pensando en reducir el año docente, muchos Estados tendrán que disminuir el financiamiento a las escuelas y aumentar el costo de la matrícula en las universidades estatales. Cerca de 1,7 millones de personas han perdido, o están por perder, los subsidios médicos estatales.

Lo anterior implica que el gobierno tendrá que emitir muchos más bonos del Tesoro para financiar el desequilibrio presupuestario, lo que algunos temen podría

conducir a un alza en los rendimientos, a la vez que incrementaría los costos del crédito en toda la economía. Si la actual administración insiste en inflar su deuda, hará subir tarde o temprano las tasas de interés, lo que sumado al enorme déficit comercial, causará más recesión, pudiendo precipitar una sustancial y abrupta depreciación del dólar y un crack financiero estadounidense, con cesaciones de pagos incluidas.

En realidad, la economía norteamericana intenta navegar a través de un mar de incertidumbres, caracterizado por la pérdida de confianza e inestabilidad que han desatado las fuerzas combinadas de los crecientes déficits gemelos (fiscal y comercial), del endeudamiento generalizado, los despidos masivos, la caída de las bolsas y los fraudes corporativos. Hacia el futuro es difícil imaginar la reactivación de las inversiones de capital y el gasto de los hogares, al menos en la magnitud suficiente para lograr un ritmo de crecimiento alto y sostenido.

En síntesis, la sensibilidad de la coyuntura económica actual estadounidense a ligeros cambios puede desencadenar distintos resultados, lo que hace la situación muy fluida, compleja y difícil de predecir. A grosso modo, en el corto plazo, existen tres escenarios futuros probables: 1) una agudización de las condiciones recesivas, o recaída recesiva; 2) afianzamiento del patrón de recuperación; y 3) situación de continuidad muy parecida a la actual, caracterizada por una recuperación contradictoria con rasgos recesivos. Este último escenario, intermedio entre los dos anteriores, sería, quizás, el más probable.

Bibliografía

- Economic Report of the President*, February 2002, Washington 2002.
Periódico *El País*
Lunes, 7 de enero de 2002
Sábado, 12 de enero de 2002
Jueves, 31 de enero de 2002
Cables de Prensa Latina
The economist, febrero 27 - marzo 5 de 1999.
Información obtenida a través de la página Web *El País* de INTERNET
Business Week, Agosto 19, 1996.
Time, agosto 19, 1996.
El Economista:
No. 5670, julio del 2000, Madrid, España
No. 5668, junio del 2000
No. 5641, diciembre de 1999
No. 5656, marzo del 2000
No. 5661, mayo del 2000
Clarín
Rebellion. Org
BBC, 2003
WEO, 2004: *World Economic Outlook*, abril 2004, Internet.

Una mirada a la economía de Japón: de la post-guerra a la actualidad

Ernesché Rodríguez Asien / Katia Cobarrubias Hernández
Investigadores del CIEM

Japón es hoy la segunda economía industrializada después de los Estados Unidos. Numerosos especialistas a lo largo de los años han estudiado diversos aspectos de su desempeño económico. Entre ellos se pueden mencionar: su emergencia como una de las principales potencias económicas mundiales unos años después de culminada la 2da Guerra Mundial, el estallido de la “economía de burbuja” a inicios de los noventa y la prolongada recesión que ha padecido su economía en los últimos 13 años.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar las principales características de la evolución de la economía japonesa en el período comprendido entre 1964 y el 2004. Se hace referencia a la recuperación que sucedió al fin de la 2da Guerra Mundial, los principales problemas actuales y las perspectivas de crecimiento en el futuro más cercano. También se hace referencia al comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo de Japón en los últimos años, debido a la creciente importancia que adquiere el tema por la deplorable situación económica y social de muchos países subdesarrollados.

De la post-guerra al colapso de la “economía de burbuja”

En agosto de 1945 un Japón devastado por la guerra aceptó los términos de la rendición impuesta por los aliados y, por edicto imperial, depuso las armas. Como consecuencia de la 2da. Guerra Mundial, Japón perdió el 42% de su riqueza nacional y el 44% de su capacidad industrial: energía, instalaciones, maquinaria, etcétera. El personal militar desmovilizado y los civiles que regresaron, por una parte, agravaron la ruina y el hambre y, por otra, se unieron de inmediato a la fuerza de trabajo, cubriendo sobradamente las necesidades de mano de obra para la reconstrucción económica durante la primera etapa del período de posguerra.

Durante algunos años después de la derrota, la economía japonesa estuvo casi totalmente paralizada con una severa escasez de alimentos, una aguda inflación y los efectos de un mercado negro generalizado. La demanda interna descendió con la interrupción de las compras militares y el comercio exterior se contrajo.

En un período histórico relativamente breve Japón logró, no sólo reconstruir su economía, sino convertirse en una de las naciones industrializadas más importantes del mundo actual. En ello desempeñó un papel fundamental la regulación económica estatal y la política industrial concebida para la reconstrucción. El gobierno promovió determinadas industrias y las protegió de la

competencia nacional y extranjera, primeramente a través de tarifas y luego con la aplicación de barreras no arancelarias.

Las instalaciones industriales fueron modernizadas completamente, poniendo el énfasis en las industrias químicas y petroquímicas y en la industria de maquinaria pesada. A mediados de la década de 1950, la producción industrial había superado los niveles anteriores a la guerra.

En los años 60, hubo una incorporación masiva de ingenieros a las empresas, desarrollándose la actividad de Investigación y Desarrollo, premisa para aumentar la capacidad innovadora y competitiva de los países. Los gastos en Investigación y Desarrollo representaron en 1967 un 1,30% del PIB. Se promovió intensamente la "ingeniería inversa"², con lo cual se lograban mejoras sustanciales sobre la tecnología importada aplicada a los procesos de producción, así como una elevación en la calidad de los productos. En este sentido, se puede señalar que el ritmo de crecimiento industrial alcanzó el 9,4% anual durante el período comprendido entre 1965 y 1980.

Muy vinculado con el desarrollo científico y técnico está el tema de la productividad. Entre 1960 y 1973, la productividad total en Japón creció en un 6,6% como promedio anual, crecimiento muy superior al de este indicador en los Estados Unidos, principal país industrializado, donde la productividad creció en un 1,9%.

A finales de la década de los 60 las exportaciones experimentaron un crecimiento sin precedentes. Entre 1960 y 1969 las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual del 15,7%, crecimiento superior al del PIB, que creció a una tasa promedio del 10,4% anual en el mismo período.

Japón es un país con una dotación escasa de recursos naturales y, por tanto, un fuerte importador de productos primarios. No obstante, Japón pudo desarrollar sus industrias pesada y química gracias, entre otros factores, al bajo precio del petróleo que se mantuvo en el nivel de 2 dólares/barril durante veinte años después de la 2da. Guerra Mundial. La cotización fija de 360 yenes/dólar que duró hasta agosto de 1971 permitió a Japón incrementar sus exportaciones sin reevaluación alguna de su moneda nacional.

Antes de los años 70 la economía japonesa estuvo rodeada de un ambiente favorable hasta el estallido de la guerra del Medio Oriente, en octubre de 1973, la cual causó la primera crisis petrolera. Esta crisis del petróleo obligó a Japón a una reestructuración económica. El país hizo esfuerzos por hacer sus producciones menos consumidoras y más independientes. Además, se buscaron fuentes de

² La "ingeniería inversa" consiste en la introducción de los avances de las ciencias física, matemática y genética a las técnicas de producción industriales y agrícolas que, al tomar como base los resultados obtenidos en otros procesos y países diferentes y descomponerlos en sus elementos integrantes, logra localizar aquellos que determinan los atributos de su eficiencia y, además, actuar sobre éstos de manera tal que su modificación conduzca a una elevación en los niveles de eficiencia.

combustible más estables y cercanas. En los últimos años de la década de los 70 se inició un proceso de cambio estructural de la economía nacional.

Durante el período de la recesión que se inició después de la segunda crisis petrolera hasta los primeros años de la década de los 80, se aplicaron medidas para incrementar las exportaciones y mantener el crecimiento económico. Como consecuencia de las dos crisis petroleras y el flujo de las divisas hacia los países exportadores de petróleo, los países industrializados y sus industrias estaban enfrentándose con serios problemas. La situación fiscal de Japón empeoró seriamente debido a la disminución de ingresos por concepto de impuestos, lo cual imposibilitó aumentar la inversión pública, como medida para superar la recesión. Bajo esta circunstancia, la industria japonesa no tuvo otra manera de buscar la salida que en el aumento de exportaciones.

Entre 1970 y 1979, la economía japonesa creció a un menor ritmo, un 4,6% como promedio anual. La productividad total también manifestó una desaceleración en su crecimiento: entre 1973 y 1979, creció un 1,8% como promedio anual. Las exportaciones, por su parte, crecieron a un ritmo mayor que el PIB, un 8,6% como promedio anual. Desde 1974, el balance comercial de Japón presenta superávit. Entre 1974 y 1982 el superávit acumulado ascendió a poco más de 100 mil millones de dólares. Esta situación de la balanza comercial provocó un superávit acumulado de casi 18 mil millones de dólares en la Cuenta Corriente japonesa en el mismo período.

Vale destacar que ya en los 70 Japón se había convertido en el país más industrializado de Asia y en la segunda potencia económica mundial después de los Estados Unidos.

En los 80, se incrementó rápidamente el superávit comercial de Japón frente a los Estados Unidos. Aumentó entonces la presión de los Estados Unidos y también de Europa contra Japón, exigiendo la restricción voluntaria de las exportaciones y el aumento de las importaciones mediante la expansión del consumo interno. Como punto de partida de los esfuerzos gubernamentales de Japón, fue elaborado un informe (Informe de Maekawa) en abril del 1986 por la Sociedad de Investigaciones sobre la Estructura Económica para la Coordinación Internacional, organización de asesoramiento privado del primer ministro Nakasone. En este informe se recomendó una transformación estructural de la economía nipona: pasar de una economía de exportación a otra en la que el consumo en el mercado interno tuviera mayor importancia. Sobre la base de las recomendaciones de este informe, se tomaron sucesivamente varias medidas para la liberalización del mercado japonés, la supresión de barreras comerciales para las importaciones, la inversión pública adicional y el incremento del consumo interno por medio de la política financiera.

En septiembre de 1985, el G-5 ³ acordó una acción conjunta para devaluar el dólar, el cual se cotizaba demasiado alto. A esta reunión se le llamó "Acuerdo Plaza". La economía japonesa experimentó una recesión momentánea a causa del dramático ajuste en el precio del dólar y la aceleración del alza del yen ocurrida

³ El G-5 estaba formado por los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Inglaterra.

como resultado del acuerdo. Esta alza del yen presionó a la disminución de los precios, lo cual tuvo efectos muy serios para la economía nipona.

Sin embargo, la economía japonesa volvió a recuperarse a partir de noviembre de 1986 debido a la expansión del consumo interno, provocada por la rebaja de los precios de los productos importados debido a la alta cotización del yen (mejora en los términos de intercambio comercial), a la aplicación del financiamiento a gran escala y al incremento de la inversión en obras públicas. Esta recuperación también se produjo como consecuencia de las medidas fiscales y monetarias tomadas por el gobierno y el Banco de Japón en 1987 para aumentar la demanda interna, con vistas a potenciar la recuperación económica y reducir el superávit de la cuenta corriente. Los puntos más significativos de esta serie de medidas incluían la reducción de la tasa oficial de descuento al 2,5%, la asignación adicional de financiamiento para obras públicas y las reducciones del impuesto sobre la renta.

La larga expansión duró cincuenta y cuatro meses desde noviembre de 1986 hasta mayo de 1991 y es comparable al récord previo ocurrido entre octubre de 1965 y julio de 1970 conocido como la “expansión Izanagui”, la cual duró cincuenta y siete meses.

El primer factor que sustentó este largo período de expansión fueron los llamados “triples méritos”:

1. La rebaja de precio de las materias primas debido a la alta cotización del yen a partir de 1987.
2. La rebaja de gran envergadura del precio del petróleo, lo que tuvo un impacto significativo para la economía ya que el gasto de la economía japonesa para la importación de petróleo era y es aún muy grande.
3. La disminución de la tasa de interés: la tasa de descuento oficial se rebajó seis veces en un año y medio hasta el nivel de 2,5%.

El segundo factor estuvo dado por el cambio en la estructura empresarial. A consecuencia del alza del yen ocurrida desde 1985 y el agravamiento de las fricciones comerciales se decidió enfatizar en el desarrollo de industrias de nueva tecnología, como productos electrónicos y equipos de comunicación e información.

El tercer factor fue el énfasis que se puso en la demanda interna. El nivel de importaciones de productos manufacturados era todavía estructuralmente bajo. Por esta razón, aumentó la presión de los Estados Unidos y Europa para que Japón, mediante la expansión de la demanda interna, incrementara las importaciones.

Además del crecimiento de la demanda interna, la estructura económica de Japón experimentó otros cambios importantes desde mediados de los años 80. En primer lugar, aumentó la inversión en tecnologías modernas que hacían posible el surgimiento de nuevos productos de mayor valor agregado. Se redujeron las operaciones de industrias estructuralmente estancadas, mediante el traslado del eje de las industrias pesada y química por ejemplo, la industria de automóviles,

electrodomésticos e industria naviera hacia las de electrónica con productos como semiconductores y computadoras de alta tecnología.

Además, se expandió la inversión directa en el exterior. Se trasladaron las bases de la producción al exterior para reducir los costos de producción y, al mismo tiempo, abastecerse de las plantas externas para obtener materias primas, piezas o partes prefabricadas.

Los noventa: década pérdida de la economía japonesa

En la segunda mitad de la década de los 80 y especialmente desde finales de 1987, los precios de las acciones y del suelo se inflaron de manera acelerada, dando lugar a lo que se conoce como economía de burbuja. Esta elevación de los precios trajo como resultado una especulación en los mercados bursátiles e inmobiliarios.

Otro factor importante para la formación de la burbuja económica fue el exceso de créditos. Esto fue lo que ocurrió realmente a finales de los años 80. Entre 1987 y 1989 la cantidad de circulante monetario experimentó un aumento del 10,8% como promedio anual y superó el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) nominal en una medida de 4,5 puntos.

Entre 1985 y 1990, la desregulación financiera que acompañó a la emisión financiera monetaria total que creció en promedio 10% anual, provocó desde el segundo semestre de 1988, un excesivo auge especulativo que desembocó en la compra de terrenos, acciones, pinturas y artículos de lujo.

El dramático aumento de los precios de las acciones y de los bienes inmuebles causados por la baja tasa de interés y el incremento de la oferta de crédito, permitió una especulación que acrecentó la burbuja económica. Esta situación fue perjudicial para la economía japonesa debido a que se invirtió muy poco en la esfera productiva provocando una inflación con dos causas fundamentales: la escasez de productos y la subida de los precios de las acciones y bienes inmuebles, lo que redundó en una devaluación del yen.

Desde principios de 1990 la economía de burbuja comenzó a colapsar con el acelerado desplome del precio de las acciones. Así, sumándose a la restricción financiera, el estallido de la guerra del Golfo y el retroceso de la economía, cayeron con fuerza los precios de los terrenos, de las obras de arte y de los metales preciosos. Esta caída fue la peor de la historia, superando la caída registrada durante 1949 y 1950 cuando la economía japonesa estaba todavía afectada por los efectos de la 2da. Guerra Mundial. En consecuencia, se paralizó la capacidad de financiamiento de las empresas mediante la bolsa de valores. Además, algunos bancos y empresas entraron en un círculo vicioso en el cual se giraba alrededor del empeoramiento de la economía y la rebaja del precio de las acciones, lo que llevó a la economía a la crisis desde la segunda mitad de 1991.

A principios de 1990 colapsó la economía de burbuja, colapso que se manifestó en la brusca caída del precio de la tierra, la disminución de la demanda de bienes

raíces, de automóviles y de artículos de lujo, así como la paralización de algunos centros turísticos.

En 1991 los préstamos hipotecarios basados en el precio futuro de las acciones y terrenos que ofrecía el sistema financiero se paralizaron. Así, la capacidad de préstamos de los bancos se redujo y los mismos afrontaron serias dificultades financieras debido a la enorme cantidad de préstamos irrecuperables. También, como las utilidades de las empresas comenzaron a reducirse, se estancó el salario de los trabajadores y cayó consecutivamente la inversión en vivienda y el consumo personal.

La entrada a la recesión propiamente dicha se da a comienzos de 1992. En 1993 se agravó la depresión por la continuación de la apreciación del yen, la aceleración de las importaciones desde Asia y la inestabilidad política que retardaba la aplicación de medidas de reactivación económica. Debido a la pésima situación de las ganancias de las empresas, estas tuvieron que ajustarse aún más, lo cual obligó a la reestructuración del personal. Se redujo la inversión en plantas y equipos.

Ante esta situación, el gobierno decidió en abril de 1993 lanzar las “nuevas medidas económicas integrales” con un monto financiero considerable dirigido a inversiones públicas adicionales. Asimismo, en octubre de ese año, se lanzó otro conjunto de medidas económicas de emergencia con financiamiento dirigido a las empresas. En el mismo mes el Banco de Japón rebajó la tasa de descuento oficial por séptima vez consecutiva al 1,75%.

A la década de los 90 se le llamó “la década perdida” por la aguda crisis económica que la caracterizó: el PIB creció entre 1990 y 1998 a una tasa promedio anual del 0,8%. En general, la década se caracterizó por: la quiebra de bancos debido a la acumulación de créditos irrecuperables, las numerosas quiebras empresariales, el empeoramiento de las condiciones de empleo, incluida la disminución de los salarios por la reducción de las utilidades de las empresas. Además, la continúa apreciación del yen con respecto al dólar, lo que ha traído como consecuencia una disminución de las exportaciones japonesas, una contracción notable de la inversión y del consumo personal. Otra característica importante es la aguda deflación, que ha afectado las utilidades empresariales, y por tanto el empleo y los salarios.

El 21 de junio del 2001 el Consejo de Gobierno presidido por el Primer Ministro Junichiro Koizumi, decidió oficialmente las directrices básicas para las reformas estructurales, económicas y fiscales que tendrían como principal propósito la reactivación de la economía japonesa.

Entre las medidas que ya se han tomado como parte de las Reformas se encuentran: la privatización de corporaciones públicas (Corporación Pública de Autopistas de Japón, Corporación Pública de Viviendas y Urbanización y Corporación Pública del Petróleo), la privatización del sistema postal del país (correo y telecomunicaciones), la privatización del sistema de salud y una reducción considerable de los impuestos a las grandes empresas.

Vale destacar que en junio del 2003 el Fondo Monetario Internacional entregó a Japón una lista de drásticas medidas para que el Gobierno acelerara sus reformas, subiera los impuestos y recortara los gastos.

Situación económica más reciente

A pesar de la fragilidad de la economía en los últimos años y de la debilidad del sistema financiero, Japón registró en el 2003 un crecimiento bastante superior al previsto inicialmente. El crecimiento económico japonés se ubicó durante todo el año en el 2,7% según la OCDE, totalmente diferente al año anterior, cuando se contrajo un 0,4%.

La economía japonesa es una economía en la que los servicios es el sector que hace el mayor aporte al PIB con un 67,7% estimado para el 2001. El sector de los servicios es también el que más personas emplea con un 64,6% en ese mismo año. Este sector creció en un 1% en el 2003 con respecto al año anterior, lo que representa un avance con respecto a la contracción del 1% registrada en el 2002.

La industria es el segundo sector en cuanto a aporte al PIB con un 30,9% en el 2001 y empleaba en ese año un 30,3% del total de personas empleadas. En el año 2002 la producción industrial disminuyó en un 1,4% con respecto al 2001. La agricultura, por su parte, aportaba un 1,4% del PIB en el 2001 y empleaba a un 4,9% de la fuerza laboral.

Actualmente las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) continúan siendo estimuladas. Según el Survey of Research and Development 2002, el gasto total en Investigación y Desarrollo de Japón durante el año fiscal 2001 creció en un 1,5% con respecto al año anterior y significó un 3,29% del Producto Interno Bruto.

El predominio de las nuevas tecnologías ha pasado a ser un factor clave para el desempeño de las sociedades y la economía en el futuro. Japón ha ubicado al desarrollo tecnológico como una de las estrategias principales para dejar atrás la crisis económica y financiera. Actualmente Japón es uno de los principales exportadores de bienes de alta tecnología y ha experimentado grandes avances en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tras la ruptura de la burbuja económica de Japón en 1991, el índice de desempleo del país aumentó constantemente, pasando del 2,2% al 5,4% en el 2002. El empleo sólo empezó a recuperarse cuando el clima económico mostró signos de mejora a partir de septiembre del 2003. Según el Buró de Estadísticas del gobierno japonés, en enero del 2004 el desempleo se ubicaba en un 5,0%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronostica que para el presente año 2004, el desempleo en Japón se ubique en el 5,2%.

En cuanto a la balanza comercial, se puede anotar que en el 2002 el valor de las exportaciones creció en un 6,4%. Estas exportaciones estuvieron dirigidas principalmente a Asia, región que absorbió el 45,8%. En el 2002 Japón se ubicó en el lugar cinco entre los principales exportadores de servicios comerciales con un

4,1% de las exportaciones mundiales. En cuanto a las exportaciones de mercancías ocupó el lugar tres con un 6,5% del total mundial.

En cuanto a las importaciones, en el 2002 disminuyeron en un 0,4% y el 55,6% provenían de Asia. Japón también es uno de los principales importadores de mercancías y servicios comerciales. En el 2002 ocupó el lugar 4 entre los importadores de mercancías con un 5% de las importaciones mundiales. A su vez, ocupaba la posición tres entre los importadores de servicios comerciales con un 6,9% del total mundial.

Japón es miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y es actualmente uno de sus principales donantes. Este país es el más importante donante para diecisiete países de Asia, cinco del Medio Oriente, seis de África, catorce de Latinoamérica y el Caribe y cinco de Oceanía.

De manera general se observa una tendencia a la disminución de los desembolsos por este tipo de cooperación. Mientras en 1991 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Japón representó el 0,27% del Ingreso Nacional Bruto, en los años 2001 y 2002 esta proporción fue del 0,23%. Lo bajo de estas cifras es más notable si se les compara con el compromiso contraído por los países industrializados de aportar el 0,7% del Ingreso Nacional Bruto como AOD para los países subdesarrollados. Se puede afirmar que, de manera general, la ayuda japonesa está respondiendo fundamentalmente a las necesidades de su propia economía y a sus intereses geopolíticos, de ahí la definición de Indonesia y China como dos de los principales países receptores de la ayuda nipona.⁴

En los últimos meses del 2003 tuvo lugar una reducción de las presiones deflacionistas, reflejada tanto en los precios al consumidor como en los precios al por mayor. En el 2002 se estimó una tasa de inflación de -0,9%. En enero del 2004 la inflación era de un -0,3% según el Buró de Estadísticas. No obstante, todavía sería apresurado concluir que se ha iniciado una reversión definitiva de la deflación, ya que la moderación de la caída de los precios se ha debido parcialmente a factores transitorios, relacionados con subidas de tarifas públicas y de los precios de las materias primas. Asimismo, persiste un importante grado de exceso de capacidad en la economía japonesa, que limita el recorrido al alza de los precios.

El déficit público de la Administración Central respecto al PIB aumentó del 0,7% en 1991 al 8,2% en 2002 (por ejemplo, el déficit público de Francia, uno de los países que la Unión Europea considera problemáticos en este aspecto, alcanzó el 3,1% en 2002). La deuda pública / PIB también aumentó del 61,1% de 1991 hasta el 142,7% en 2002 (Francia se situó en el 66,7% en 2002). Sin embargo, toda esta

⁴ Indonesia resulta de gran importancia para Japón debido a sus estrechas relaciones en cuanto al comercio y las inversiones. Además, ocupa una importante posición en la transportación marítima japonesa y provee también petróleo, gas natural y otros recursos naturales muy necesarios para Japón.

El mantenimiento estable y progresivo de la relación entre Japón y China conduce a la paz y la estabilidad de la región Asia- Pacífico y del mundo en general. Además, China está próxima geográficamente a Japón y ambos países tienen una fuerte unión histórica, política y cultural.

deuda tiene su contrapeso en el ahorro de los japoneses (la cartera financiera de las familias asciende a 11 billones de euros) y el superávit de la balanza por cuenta corriente es uno de los mayores del mundo (2,8% respecto al PIB en 2002).

En cuanto al tipo de cambio, las autoridades japonesas intervinieron a lo largo del año 2003 para contener la tendencia apreciatoria del yen frente al dólar, de manera que su evolución se separó de la del euro. Sin embargo, las recientes declaraciones del G-7 a favor de una mayor flexibilidad cambiaria, propiciaron una súbita y fuerte apreciación del yen a finales de septiembre, con riesgos potenciales para la economía japonesa.

En el año 2004 la economía nipona podría tener una gran mejoría y se ha considerado por algunos especialistas como el año crucial para salir de la crisis, aunque el fortalecimiento del yen podría actuar en sentido contrario. La divisa japonesa con su tendencia alcista amenaza con frenar las exportaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé que Japón se recuperará y tendrá un crecimiento de un 1,8% en el 2004.

A modo de resumen

Japón experimentó un corto pero intenso período de recuperación después de finalizada la 2da Guerra mundial. Ya a finales de los años 50 el país había emergido como una importante potencia industrial. En este período se destaca la activa regulación económica por parte del Estado, el cual promovió y protegió diversas industrias como estrategia para lograr el desarrollo industrial del país. A partir de los años 60 y hasta los ochenta, Japón alcanzó una de las mayores tasas de crecimiento económico a nivel mundial.

En la década de los ochenta se acumuló una burbuja financiera que se manifestó entre otros, en un aumento del precio de las acciones y de los bienes inmuebles. En 1990 la “economía de burbuja” estalló cuando descendieron bruscamente los precios de las acciones. Esto desencadenó una recesión económica que dura hasta la actualidad. La crisis económica se ha mantenido con períodos de agudización y en algunos momentos con signos muy discretos de recuperación.

A pesar de las extensas medidas de carácter fiscal, monetario y de liberalización promovidas por el gobierno, se mantienen en la actualidad problemas como el aumento de la tasa de desempleo, la reducción de los salarios, los bajos niveles del consumo privado, la gran cantidad de créditos de difícil recuperación y los bajos niveles de inversión en maquinarias y plantas.

Aunque Japón es actualmente el más importante donante del Comité de Ayuda al Desarrollo, en los últimos años ha disminuido sus aportes para la Ayuda Oficial al Desarrollo, tendencia también notable para la mayoría de los países desarrollados.

En los últimos tiempos, las perspectivas de crecimiento de Japón han mejorado gracias al buen comportamiento de la inversión empresarial y a la mejoría del entorno exterior. Pero, para que el proceso de recuperación se consolide, es necesario acometer con decisión los procesos de reforma necesarios en el

sistema financiero y en el sector empresarial, de forma que se impida la materialización de los riesgos derivados de los elementos de fragilidad de la economía japonesa.

Bibliografía

- Arias Marrero, Adelaida, Joaquín Fernández Núñez, Magaly León Segura, Ernesto Molina Molina, Olga Pérez Soto e Idalia Romero Lamorú. 1995. *La organización empresarial japonesa y sus aspectos compatibles con la reestructuración empresarial en Cuba*. Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, División de Estudios Japoneses del CEAO, La Habana, Cuba.
- Aquino, Carlos. 1997. "El Sistema Financiero Japonés y su Reestructuración", *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos*, Lima, Perú.
- Cámara de Comercio de la República de Cuba. 1984. *Guía para la exportación a Japón*, La Habana.
- Cervera, Manuel. 1996. *Globalización Japonesa: Lecciones para América Latina*. Siglo XXI Editores, s.a de c.v.
- CIA (Central Intelligence Agency). 2003. *The World Factbook*, (Tomado de Internet).
- Cutts, Robert L. 1992. "Capitalism in Japan: Cartels and Keiretsu", *Harvard Business Review*, julio-agosto.
- Fernández Joaquín y Ernesto Molina. 1996. *La organización empresarial japonesa como escuela en el campo de la teoría económica y el papel del Estado japonés en el desarrollo del capitalismo*, CEAO, La Habana, Cuba.
- Ishikawa, Kaoru. 1997. *¿Qué es el control total de calidad?*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
- Kitamura, Makoto. 2003. *El nuevo despegue de Japón*, Servicios de Información, Embajada del Japón en España. <http://www.es.emb-japan.go.jp/>
- Martínez, Osvaldo y otros. 1988. *Estados Unidos y la economía internacional*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
- MPHPT. (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications). 2002. *Survey of Research and Development 2002*. [<http://www.stat.go.jp/english/data/kagaku/1531.htm>]
- _____. 2003. *IT Statistics of Japan*, Edit. Statistical Research and Training Institute. [<http://www.stat.go.jp/english/data/it/index.htm>]
- _____. 2003. *Japan Statistical Yearbook 2003*. [<http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-20.htm>]
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2003. *OECD in Figures*. Statistics on the Member Countries, (Tomado de Internet).
- OMC (Organización Mundial del Comercio). 2003. *Estadísticas del Comercio Internacional 2003*, <http://www.wto.org/>
- Rodríguez, Ernesché. 1999. *La economía de burbuja en Japón*. Editorial Ciencia Sociales, La Habana, Cuba.
- Revista Cuadernos de Japón*, varios números
- Información cablegráfica diversa

Economía e integración en Europa

Jourdy James Heredia
Investigadora del CIEM

La integración europea ha sido un proceso que, en su devenir, ha marcado pautas no sólo en su interior, sino también a nivel mundial. Bajo su influjo han ocurrido importantes transformaciones en el orden comercial, monetario-financiero e integracionista a nivel internacional.

En su avance, la actual Unión Europea (UE) ha tenido que sortear muchos obstáculos, que comprenden, desde rivalidades entre los Estados miembros, hasta aspectos vinculados a la limitación de la soberanía nacional.

Después de la Segunda Guerra Mundial, con una Europa dividida y empobrecida, es cuando renace con fuerza la necesidad de una unidad europea con el objetivo de adquirir protagonismo frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. El total desmoronamiento de Europa permitió dar impulso a la idea de un nuevo ordenamiento en Europa Occidental.

La misión fundamental de Europa, en aquel entonces, era la de coordinar la producción del carbón y el acero y sentar las bases para un futuro mercado común europeo. En 1951 se constituye la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). En 1957 se creó mediante los Tratados de Roma, la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA o Euratom) por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Estas tres comunidades pasaron a constituir lo que se denominó “Las Comunidades Europeas” y se unificaron a mediados de la década del 60 bajo la dirección de un sistema único y centralizado, encabezado por el Consejo de Ministros, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Parlamento Europeo, dando un impulso significativo al proceso de integración. Además, el Tratado de Roma concedió a la Comunidad Económica Europea la calificación de ente supranacional con personalidad jurídica propia.

Uno de los objetivos del Tratado de Roma fue la creación de la Unión Aduanera. En 1968, dieciocho meses antes de la fecha prevista, se logró la Unión Aduanera a través de la cual se suprimieron todos los derechos de aduana entre los seis países miembros de la Comunidad Económica Europea y se estableció un arancel común frente a terceros países. Más aún, en enero de 1962 se estableció la Política Agrícola Común (PAC).

La Unión Aduanera produjo un brusco crecimiento del comercio entre los Estados miembros. Desde 1958 hasta 1970, las transacciones comerciales entre los países de la Comunidad Económica Europea, de entonces, se multiplicaron por seis,

mientras que el comercio con el resto del mundo se triplicó. Durante el mismo período, el Producto Nacional Bruto de la Comunidad creció un 70%.

De manera general, los primeros 12 años de funcionamiento de la Comunidad Económica Europea estuvieron caracterizados por un crecimiento acelerado de los ritmos de su actividad económica a nivel mundial. Desde la posguerra hasta finales de la década de los 60 se observó una tendencia de crecimiento de largo plazo en el conjunto de la economía internacional, gracias al estímulo de la demanda de posguerra. Las principales variables macroeconómicas internacionales, a saber: el PIB, la inversión y el consumo internacional aumentaron a tasas muy elevadas durante los 60 con ritmos superiores al 5% como promedio anual.

Específicamente, en la Comunidad Europea en el decenio de los 60 las tasas de crecimiento económico fueron altas. Se destaca, el comercio exterior con ritmos de crecimiento de 12% aproximadamente, por encima de los incrementos registrados por el grupo de países que conformaban la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Era notorio el desempeño de las economías francesa e italiana, las cuales lograron tasas de aumento del PIB superiores al 5%.

Sin embargo, el desmedido entusiasmo de finales de los 60 se fue agotando y el europesimismo se apoderó de la Comunidad Económica Europea. Las dos profundas crisis por las que atravesó la economía mundial (1974-1975, 1981-1982) y la agudización de los desequilibrios tanto internos como externos de las economías a nivel internacional, trajeron consigo grandes problemas para el proceso integracionista de Europa.

Las economías comunitarias en la década de los 70 reflejaron elevadas y crecientes tasas de desempleo e inflación, desequilibrios agudos en balanza de pagos, acentuados desajustes en las finanzas públicas, así como incumplimientos de algunos de sus objetivos integradores. Eran los tiempos en que tanto en los círculos diplomáticos como académicos, se hablaba de la "euroesclerosis".

El período 1970-84 fue ilustrativo también de claros ejemplos de logros en el proceso de integración. En 1974 se creó el Consejo Europeo; en 1975 se pone en funcionamiento el Fondo Europeo de Desarrollo Regional; en 1984 se originó el Programa Sprit para el desarrollo de una política comunitaria de ciencia y tecnología; en 1979 se crea el primer Parlamento Europeo, todo ello como vías para promover una mejor posición mundial de Europa y de su proceso integracionista. No obstante, no es menos cierto que, de forma general, esta etapa del proceso de integración estuvo caracterizada por el retroceso y el incumplimiento de los objetivos integradores, a tal profundidad que a inicios de los 80 la Comunidad Económica Europea parecía haber perdido el ahínco anterior que la había caracterizado.

En este contexto, los países comunitarios decidieron imprimirle un nuevo impulso al proceso integracionista. En 1985 se publica el llamado "Libro Blanco" por la Comisión Europea para el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo. Seguidamente, en 1987 se ratifica la firma del "Acta Única" con el objetivo de garantizar el basamento legal necesario para que los acuerdos del "Libro Blanco" fueran cumplidos. En 1988 se

crea el Comité Delors cuyos fundamentos básicos estaban referidos a la creación de una Unión Económica y Monetaria (UEM).

La aprobación del Acta Única Europea (AUE) supuso la primera revisión significativa del tratado de Roma, además del fortalecimiento de la capacidad de decisión de la Comunidad y el lanzamiento de un programa destinado a la realización, para 1993, de un verdadero mercado único. También introdujo la necesidad de cooperación entre las políticas económicas y monetarias de los Estados miembros y la cooperación política, como un paso hacia la consecución de la UEM.

Nuevos cambios se introdujeron con el Acta Única en el mecanismo de toma de decisiones de la UE, los cuales estuvieron relacionados principalmente con la forma de votación. Se introduce como principio más generalizado el de la mayoría calificada.

El AUE introdujo también otros cambios importantes: el Consejo Europeo, que había aportado el impulso principal para la consecución del Mercado Único, consiguió personalidad jurídica, el Parlamento Europeo logró tener mayor voz e influencia, y los estados miembros acordaron unificar normativas fiscales, sanitarias y referentes al medio ambiente.

Dos años después se produce la caída del campo socialista y específicamente en noviembre de 1989 del muro de Berlín, y se lleva a cabo la unificación monetaria de Alemania en junio de 1990 y la fusión política en octubre de ese mismo año con enormes repercusiones dentro de la UE.

La década de los 90 y el proceso de profundización de la integración europea

La década de los 90 fue crucial para el proceso integracionista de Europa. El derrumbe del campo socialista, el nuevo contexto internacional de globalización económica y aplicación de políticas neoliberales y búsqueda, por parte de Europa de un lugar importante en medio de una competencia global cada vez más fuerte, influyeron de manera decisiva en el desarrollo de la integración europea.

La Cumbre de Maastricht, en 1992, representó un salto cualitativo para la Comunidad Económica Europea al incorporar objetivos políticos a este proceso, y establecerse el Tratado de la Unión Europea. Además, propuso la constitución de la UEM y estableció nuevas responsabilidades en torno a la Política Exterior y de Seguridad Común, entre otros elementos.

Particularmente, durante la década de los 90, la UE realizó un conjunto de tareas vitales para la exitosa realización de la UEM y la ampliación hacia el Este. Por tanto, Europa ha estado moviéndose desde la reconciliación interna hacia un papel más visible y protagónico en el ámbito mundial. En otras palabras, la UE está inmersa en el desarrollo de los procesos de profundización y ampliación, que si bien no son excluyentes, el avance de uno aminora el progreso del otro.

La constitución del mercado único europeo fue el primer paso de un conjunto de transformaciones emprendidas por la UE en la década de los 90 en el contexto de la globalización y lucha hegemónica a nivel mundial. Para Europa, con un atraso tecnológico evidente en los sectores de punta con relación a Estados Unidos y Japón y el temor de ser relegada a una posición secundaria, la constitución del mercado único significó ampliar la posibilidad de economías de escala, sumado al aumento de la especialización, la eficiencia y la productividad de la industria europea, lo cual permitiría mejorar la competitividad en el mercado internacional.

Con la puesta en funcionamiento del mercado único en enero de 1993, se llevó a cabo una liberalización efectiva de los intercambios intracomunitarios de bienes y de servicios, de los capitales, y las personas. El mercado único europeo, se constituyó como el mayor mercado unificado del mundo industrializado, con más de 370 millones de consumidores y un PNB de más de ocho millones de millones de dólares.

La libre circulación de bienes fue, sin duda alguna, el mayor éxito del programa del mercado único. Las empresas pueden ofrecer sus bienes y servicios en cualquier lugar de la UE sin impedimento y, se benefician de mercados más amplios y de la reducción de los costos de producción. El abanico de productos disponibles ha aumentado considerablemente como resultado del mercado único.

Especialmente para los productos agrícolas, la liberalización en el mercado único no se ha concluido y se inscribe dentro de la reforma de la PAC mediante la cual se prevé el paso del mecanismo de sustentación del ingreso de los agricultores europeos a través del mecanismo de los precios, a un sistema directo de sustentación del ingreso mediante compensaciones, premios y ayudas. Este cambio permitirá la disminución de los precios agrícolas comunitarios, aproximándolo a los internacionales y un mejor control sobre la producción con el objetivo de disminuir el costo de la PAC, tanto para los consumidores europeos como para el presupuesto comunitario y los mercados externos y, en consecuencia, incrementar la real competitividad de los bienes agrarios a nivel interno y externo.

La disminución de los precios prevista por la reforma será compensada a condición de que los agricultores no exploten más determinados porcentajes de tierras cultivables, entre otros elementos. Entre los productos más afectados por la disminución de precios se encuentran los cereales, las semillas oleaginosas y la carne bovina.

Se otorgarán premios a los agricultores por la disminución de la densidad de animales por hectáreas, de las producciones de leche y sus derivados, de las tierras cultivables, etc. Se establece un sistema de cuotas máximas a la producción de lácteos. También se estipulan nuevas ayudas para las acciones de protección del medio ambiente, para apoyar la jubilación temprana (programas de pre-jubilación), así como para el mejoramiento de la relación entre la actividad agrícola y la conservación de la naturaleza.

Realmente, todas estas medidas traerán consigo un menor gasto para los consumidores europeos, aunque a un mayor costo para el presupuesto comunitario, al menos en el corto plazo y, principalmente, para los presupuestos de los estados miembros, en tanto otra de las medidas de la reforma es la descentralización presupuestaria.

A pesar de todos estos cambios, continúa existiendo una preferencia comunitaria que limitará en gran medida el acceso de los productos básicos procedentes de terceros países a la UE, ya que se fijarán precios mínimos a las importaciones, que implican un margen preferencial comunitario de alrededor de 40% para los cereales. Asimismo, la disminución de los subsidios a las exportaciones traerá como resultado una reducción de los excedentes comunitarios como se previó en la Organización Mundial de Comercio, pero “continuarán existiendo reservas importantes para abastecer mercados estratégicos y deficitarios como los de la ex-URSS, del Mediterráneo del Sur y los ACP, entre otros”.

Aunque se ha avanzado en la eliminación de los obstáculos en la movilidad de las personas en el espacio comunitario, la libre circulación de personas no se ha completado. Todavía existen controles de identidad en las fronteras interiores, en tanto en algunas de ellas aún se llevan a cabo verificaciones internas de los documentos de identificación.

Alemania, España, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Portugal hicieron efectiva la libre circulación de personas desde Marzo de 1995 (Acuerdo de Schengen). Italia y Austria suprimieron las regulaciones a partir de 1998 y actualmente sólo Reino Unido e Irlanda continúan efectuando controles sobre todas las personas que entren en su territorio. Adicionalmente, Islandia y Noruega, que no pertenecen a la Unión Europea, están asociadas a este Pacto.

El mercado único europeo es un proceso y como tal ha implicado la adaptación de los agentes económicos europeos a las nuevas condiciones legislativas y de mercado y a la efectiva aplicación de la legislación comunitaria por parte de los países miembros, sin embargo, no todas las naciones y empresas han sido ganadores en este mercado. En realidad, el mercado único está homogeneizado por el gran capital financiero y las empresas transnacionales, es un espacio económico que está controlado por los grandes centros de poder del gran capital financiero europeo y delimitado por la hegemonía de las grandes corporaciones transnacionales en los distintos sectores.

Las grandes transnacionales europeas, tales como la British Petroleum, Siemens, Philips, Nestlé y Fiat, han eliminado las barreras que afectan su competitividad en el mercado único agudizando un proceso de colaboración, fusión y concentración empresarial sin precedentes en la historia europea. De las 39 compañías que dominaban el sector europeo de electrodomésticos en los años 70, solo 5 han sobrevivido, y entre 1986 y el 2000, las multinacionales europeas doblaron sus fusiones y adquisiciones. Particularmente en Alemania, se vendió a transnacionales de otros países el sector de producción de fármacos.

El hecho de que el mercado único no se haya completado plenamente, en tanto se mantienen mecanismos restrictivos e insuficiencias en las políticas y prácticas indispensables para su funcionamiento, se explica básicamente por las diferencias en el nivel de desarrollo económico entre las regiones de la UE, teniendo en cuenta, entre otros elementos, que de los 15 estados miembros antes de la reciente ampliación, en 11 de ellos existen territorios clasificados como de menor desarrollo relativo, en un contexto en el cual las ayudas destinadas a atenuar las disparidades dentro de la UE sufrirán una disminución notable en los próximos años.

Desde el inicio de la Comunidad Europea el desarrollo desigual ha estado presente, en particular existían y existen zonas como el sur de Italia y los departamentos franceses de ultramar, donde el grado de desarrollo ha sido claramente inferior al del resto. Con la entrada de Grecia, España y Portugal, la brecha que separaba a los diferentes países se ha ampliado y se ampliará todavía más con el ingreso de los nuevos miembros.

Las desigualdades de ingresos por habitante son apreciables: Dinamarca con el ingreso más alto supera en unas tres veces a Portugal y, aproximadamente en la misma proporción a Grecia.

A pesar de que se fomentaron mecanismos compensatorios para atenuar las diferencias regionales como los fondos estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo para la Cohesión Económica, Fondo Social Europeo), el problema de las regiones atrasadas y también las diferencias entre los países continúa y parece mantenerse y agudizarse en los próximos años.

Con todo, el mercado único constituyó una premisa esencial para la UEM y el nacimiento del euro. Estos últimos han sido complementos naturales y esenciales del mercado único europeo. Y viceversa, con la moneda única europea el mercado común se va perfeccionando aún más gracias a la eliminación de los costos de transacción generados por la conversión de monedas, a la desaparición de las variaciones de los tipos de cambio que perturban el comercio y las inversiones y a la transparencia de los precios en euros.

Para alcanzar la UEM se establecieron los criterios de convergencia económica sobre tipos de cambio, tasa de inflación, tasa de interés, déficit y deudas públicas. Dichos criterios se convirtieron en los fundamentos de las políticas de ajuste, de tipo neoliberal, para los países del espacio comunitario. El cumplimiento de estos criterios monetarios y fiscales se convirtió en la prioridad para los gobiernos comunitarios, subordinando los cambios estructurales que deben llevarse a cabo en las economías nacionales.

Los países europeos llevaron a cabo una política de reducción en los gastos sociales, para cumplir con los requisitos de la UEM, lo que trajo como resultado la agudización del desmantelamiento de los sistemas de bienestar social europeos. Actualmente, la UE refleja carencias que hasta hace poco se percibían como propias de los países subdesarrollados. Se observa un aumento de la pobreza, el trabajo precario y la exclusión social en casi todos los países europeos.

El 18% de la población de la UE está en la pobreza, alrededor de 68 millones de personas. El gasto en protección social se ha reducido consecutivamente desde 1993, actualmente representa el 27,6% del PIB de la UE; en Irlanda y España este porcentaje es menor, 14,1% y 20%, respectivamente.

Con respecto a la distribución del ingreso, el 20% más pobre de la población percibe el 8% de la renta total, mientras que el 20% más rico obtiene el 39%, es decir 5,4 veces más. Sin embargo, en Portugal, España, Grecia y Reino Unido e Irlanda esta diferencia es mayor.

Durante la década de los 90, el comportamiento económico de la UE, que resultaba crucial para tan ambicioso proyecto, fue inestable y lento. Específicamente, durante 1991-99 el PIB del conjunto de estos países europeos creció 1,3%, comparado con 2,3% en el período 1981-1990.

A pesar de estas dificultades, los países comunitarios hicieron grandes esfuerzos para cumplimentar los criterios de convergencia económica. Sin embargo, algunas naciones fueron aceptadas en la UEM, incluso sin cumplir los parámetros fiscales estrictos, con la condición de que una vez que participaran hicieran los ajustes pertinentes (Pacto de Estabilidad). Finalmente, se logró cierta estabilidad macroeconómica relativa antes de 1999, aunque con un costo social mucho mayor.

En enero de 1999 se constituyó la UEM y culmina el proyecto de integración monetaria en Europa con el surgimiento del euro. Actualmente forman parte del euro 12 países de los 15 que conformaban la UE antes de la reciente ampliación, al margen de la zona han quedado Suecia, Dinamarca y Reino Unido. Entre 1999 y el 2001, el euro funcionó como dinero electrónico, tanto para las transferencias entre los bancos y la valoración de las cuentas, como para las tarjetas de crédito bancarias. El lanzamiento físico del euro tuvo lugar a inicios del 2002, en un proceso rápido y normal de sustitución de las monedas nacionales por la nueva divisa.

La llegada del euro ha traído ventajas no sólo para Europa, sino también para el resto de los países del mundo. Entre los beneficios más inmediatos se conocen los relacionados con la eliminación de los costos comerciales de las transacciones cambiarias y la disminución de los riesgos asociados a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Todo ello, aumenta la estabilidad económica global ya que los exportadores e inversores, tanto nacionales como extranjeros, ahorran costos al operar en el mercado europeo.

El euro supone un mundo con un poder más compartido, al menos en su expresión monetaria. Se considera que antes del 2010 más de la tercera parte de las transacciones financieras y de los intercambios bancarios de los países desarrollados se realicen en euros.

Muchas excolonias, colonias y neocolonias de Europa adoptaron el euro; entre ellas la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mónaco, San Marino, el Vaticano, Andorra, Kosovo y Montenegro. También, China ha cambiado parte de

sus reservas a euros. En los Balcanes y en los Estados Bálticos, los bancos centrales operan mayoritariamente en euros, como moneda alternativa.

Algunos países petroleros a nivel mundial han decidido facturar el petróleo en euros, como el Medio Oriente, naciones como Irak (antes de la ocupación) e Irán. Corea del Norte también ha dejado de utilizar el dólar en su comercio exterior por razones políticas. Del otro lado, otros países como Venezuela y Rusia han diversificado las reservas de sus bancos centrales. Los bonos del tesoro de Brasil se venden en euros.

Al nacer la nueva divisa europea, la tasa de cambio se fijó en 1,18 dólares por euro, lo cual expresaba, según algunos especialistas, una sobrevaloración en función de la realidad macroeconómica y de las oportunidades relativas de inversión productiva y financiera de la UE en comparación con Estados Unidos.

No obstante, la alta valoración inicial de la moneda única europea se ajustó con el transcurso del tiempo, condicionada también por diversos factores que incidieron tanto por el lado norteamericano como europeo, al real comportamiento de las economías europeas, y a finales del 2001 el euro cayó aceleradamente hasta 0,887 dólares.

En el año 2002, el euro se revalorizó en un 12% frente a la moneda estadounidense y en el 2003 continuó apreciándose. A finales de marzo del presente año se cotizaba a 1,1882 dólares. Esta coyuntura alcista estuvo asociada, básicamente, a la incertidumbre en los mercados bursátiles y financieros de Estados Unidos, alimentada por los abultados y crecientes déficit de la cuenta corriente norteamericana y los problemas de confiabilidad contable de grandes empresas, tales como Enron, WorldCom, Xerox, Andersen y otras que dañaron la confianza de los inversores.

En otras palabras, la revaluación temporal del euro constituye un reflejo de las crecientes dificultades por las que atraviesa la economía estadounidense, más exactamente la inestabilidad reinante en Wall Street; y no de factores asociados a un mejor comportamiento de los indicadores económicos fundamentales de la UE.

El nacimiento del euro ha coincidido con una etapa de desaceleración del crecimiento económico. Efectivamente, desde el segundo semestre del 2000, la actividad económica en Europa se desaceleró y aún continúa estancada. Específicamente, en el 2001 los ataques terroristas a los Estados Unidos profundizaron la disminución y en el 2002 la crisis sincrónica a nivel mundial produjo una contracción mayor al incrementarse el PIB en 1,1% (1,7% el año anterior). El panorama de estancamiento económico en Europa se mantuvo en el 2003 al crecer sólo 0,7%, la tasa más baja desde 1993; en la zona del euro la desaceleración fue más aguda con un 0,4%.

Particularmente, entre 1991 y el 2001 el PIB de Alemania, la locomotora europea, sólo creció 1,5% frente a 2,8% en el decenio anterior. Concretamente, desde 1994, el crecimiento económico de la nación germana se sitúa por debajo de la media de

los países de la UE y desde 1998 ocupa el último lugar junto con Italia. En el 2003 el crecimiento de la primera economía europea se contrajo hasta 0,1%.

El alto nivel de desocupación está lastrando el crecimiento económico en Europa desde hace más de una década. A partir del 2001, a la debilidad del mercado de trabajo europeo se ha sumado la crisis económica generalizada a nivel internacional.

La tasa de desempleo de la UE, en los años que corren de la primera década del siglo XXI, se ha incrementado, en comparación con la reducción que se venía observando desde finales de los 90. Actualmente, la tasa de desocupación es de 8% aproximadamente para la UE en su conjunto y de 8,8% para los países de la zona del euro. Alrededor de 14,2 millones de personas están desocupadas en Europa.

En España el desempleo se ubicaba en enero del 2004 en 11,2%, la tasa más alta dentro del contexto comunitario. En Alemania, la tasa de desocupación se eleva aproximadamente al 11,1% (4 641 000 personas), el nivel más alto en los últimos 5 años.

Ni en la etapa de euroesclerosis el nivel de desocupación fue tan alto como ahora. La tasa de desempleo a finales de los años 70 se ubicaba en torno al 6% y desde mediados de los 80 comenzó a manifestar niveles de dos dígitos hasta alcanzar en 1994 el 11,5%. Claramente, los criterios neoliberales de convergencia económica propiciaron un proceso de privatización alto, despido masivo de fuerza de trabajo y el brote de otras formas de ocupación como el trabajo a tiempo parcial, temporal, entre otros.

En los últimos años, en la UE, el mínimo crecimiento del nivel de empleo ha estado relacionado con contratos a tiempo parcial, temporal, de baja remuneración y para trabajadores no calificados. El 15% de los trabajadores comunitarios, alrededor de 16,5 millones de personas tienen bajos salarios. Las mujeres conforman el 77% de los empleados de bajos salarios.

Existen países donde el porcentaje de trabajadores de bajos salarios es mayor al promedio comunitario, tal es el caso de Grecia (con el 27%) y el Reino Unido (21%).

Otros elementos que han incidido en el deterioro de la estabilidad interna del euro han sido el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y las limitaciones de la política monetaria del Banco Central Europeo.

Es decir, la política monetaria en el área del euro encierra una gran paradoja en su interior; tiende a ser restrictiva ante las presiones inflacionistas en la zona que pudieran atentar contra el euro en un momento en que debe ser más laxa frente a la recesión económica internacional generalizada y el descenso notorio del crecimiento europeo.

Por su parte, la política fiscal, que está descentralizada, muestra límites reales a la expansión del crecimiento económico. En efecto, el margen establecido por los criterios de convergencia económica y el Pacto de Estabilidad para el área del euro impide la instrumentación de medidas expansivas. Sin embargo, Alemania y Francia, dos de los principales impulsores del proyecto de unión monetaria en Europa, en ausencia de la política monetaria –al ser esta competencia del Banco Central Europeo– han recurrido a la política fiscal y han roto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecido al interior de la zona del euro, mediante el cual se establecía que el déficit fiscal no debía superar el 3% del PIB. Ambas naciones en los últimos años han superado el límite establecido para el déficit fiscal: Alemania en el pasado año 2003 tuvo un saldo fiscal negativo de –3,9% del PIB y tendrá en el 2004, por tercer año consecutivo, un déficit mayor al límite establecido y se espera que para el 2005 aún se mantenga alto. En Francia en el 2003, el déficit público alcanzó el 4,1% del PIB, por lo que superó, por segundo año consecutivo, el tope fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Tanto la política monetaria, competencia del Banco Central Europeo, como la fiscal dentro del contexto del área del euro tienden a ser restrictivas. Este diseño de política económica europea es controversial en el sentido de que lo que es bueno para una cosa es malo para otra. Al respecto, algunas naciones logran el equilibrio presupuestario pero poseen una tasa de inflación elevada – el caso de España -, contrariamente, en otras el índice de precios al consumidor tiene bajos niveles sin embargo el déficit fiscal es alto, como en Alemania.

En realidad, los países del área del euro tienen una moneda común pero viven en 12 economías diferentes. Las perspectivas de la economía europea continúan estando signadas en la incertidumbre. La básica dependencia del sector externo para estimular el crecimiento – vía depreciación del euro y disminución de los precios del petróleo -, en un contexto de aumento del desempleo, constituyen un peligro potencial, que no se puede vencer a través de la política monetaria o por la limitada política de estímulo del gobierno y que impediría un crecimiento económico alto y sostenido, en el corto-mediano plazo. Ahora más que nunca antes, ante la ampliación, se requiere la realización de reformas económicas que permitan una mejora de la situación de la economía europea.

El proceso de ampliación de la integración europea

La UE desde que se constituyó se ha ampliado varias veces. En 1973 se incorporaron Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda, en 1981 se afilió Grecia, en 1986 lo hicieron Portugal y España y en 1995 se adhirieron Austria, Finlandia y Suecia.

El quinto proceso de ampliación involucra a 10 naciones y se hizo efectivo el 1 de mayo del 2004. Los nuevos miembros son Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre. Así, la población de la UE se incrementa en 75 millones de personas hasta alcanzar los 450 millones, en este sentido la UE ampliada es el tercer conjunto de población del mundo detrás de China e India.

Bulgaria y Rumania seguirán negociando hasta el 2007 como meta para la adhesión. Turquía, por el contrario, el único país musulmán aspirante a ingresar en la Unión, tendrá que esperar hasta diciembre del 2004 para saber si la UE (los 25 socios) considerará cumplidas las condiciones democráticas para su adhesión.

Esta última ampliación es la más extraordinaria y difícil en la historia de la UE, tanto por el número de países a incorporar (10 en total) la anterior orientación política de ellos (exsocialistas), como por la difícil situación socioeconómica de la UE y de los nuevos miembros y el actual contexto internacional.

Sin embargo, la nueva ampliación se convierte en un elemento estratégicamente necesario para la UE ante la consolidación de la presencia europea a nivel internacional y de su Política Externa y de Seguridad Común y también para evitar la proliferación de gobiernos de orientación socialista en Europa Central y Oriental. La extensión del espacio comunitario hacia 10 naciones ex socialistas no es más que una manifestación del capitalismo europeo de recuperar el espacio perdido durante varias décadas en países tan cercanos geográficamente pero tan distantes desde el punto de vista de la ideología que enarbolaban.

Evidentemente, la ampliación de la UE hacia los países de Europa Central y Oriental se ha convertido en una necesidad tanto política como económica.

Desde el punto de vista político, la nueva ampliación, supone una mayor garantía de que no se introduzcan cambios en el sistema político de estos países y el fin de la Guerra Fría en esa parte del continente. En el ámbito económico, se convierte en una forma de evitar que las crisis internas que ocurran en dichas zonas repercutan al interior de la Unión y de impedir las constantes migraciones que se vienen sucediendo desde estas naciones al interior del espacio comunitario.

Estas pretensiones llevan a los países de la UE a intensificar sus lazos comerciales con todas estas naciones, haciéndolas merecedoras, a diferencia de otras áreas del mundo subdesarrollado, quizás, de las mayores preferencias en el campo de lo comercial, financiero y de circulación de personas y capitales, así como hace extensivo el acercamiento entre ambas regiones en materia de índole política y legislativa.

De hecho, la pirámide de privilegios establecida por la UE en sus vínculos externos con el mundo subdesarrollado se ha modificado. Los países de Europa Central y Oriental hoy han escalado a la primera posición dentro del esquema comercial preferencial comunitario desplazando a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) que se ubicaban en el vértice.

Los países de Europa Central y del Este, que realizaban un cuarto de su comercio exterior con la UE, ahora realizan el 60% de sus intercambios con los 15 (cuando el comercio intra-comunitario representa en promedio el 65% de los intercambios de los países miembros). Los cuatro nuevos miembros de Europa Central, Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovenia, son los que tienen los intercambios más orientados hacia la UE. Debido a su peso económico y a su

orientación comercial, estos cuatro países representan, por sí solos, más del 80% del comercio de los diez recién incorporados a la UE.

Incluso, el peso de los países de Europa Central y Oriental en el comercio extra-comunitario se ha incrementado entre un 7% y un 8% de las importaciones y de las exportaciones de la UE. La importancia de los países de Europa Central y Oriental en el comercio de la Unión Europea ha venido creciendo desde finales de los años 80, ya que en 1988 los intercambios con estos países representaban entre un 2% y un 3% de los intercambios de la Comunidad de los Doce (sin contar el comercio intra-comunitario). El 25% de las exportaciones y el 33% de las importaciones alemanas se realizan en Europa Central y Oriental.

El 78,5% de las inversiones que entran en los diez nuevos miembros proceden de la UE. Con excepción de Eslovenia, los costos salariales son mucho menores en los países entrantes que en los 15 de la UE. Además, el nivel educativo de la mano de obra es más elevado que el de otras economías emergentes, lo que ha convertido a estas naciones en lugares muy atractivos para la inversión.

Entre 1993 y el 2002, ocho países de Europa Central y del Este recibieron 126 mil millones de dólares en inversiones extranjeras directas, es decir, 30% de su PIB. En consecuencia, varias firmas han comenzado a trasladar sus operaciones a la zona.

En Alemania y otros países existe preocupación porque la industria automotriz se está trasladando a Europa del Este. Los nuevos productos que Volkswagen y Porsche han colocado en el mercado, tales como la camioneta deportiva Touareg y el modelo Cheyenne, son producidos de manera exclusiva en Eslovaquia para el mercado global.

Por otra parte, la UE diseñó dos programas de ayuda, el PHARE y el TACIS, a los países del Este y a la Comunidad de Estados Independientes respectivamente, para contribuir a la financiación de un gran número de proyectos de cooperación.⁵ Particularmente, a través del programa PHARE se canalizan 1 500 millones de euros al año. Desde 1997 se ha centrado sobre las dos prioridades esenciales vinculadas a la adopción del acervo comunitario: la capacidad institucional y administrativa de los nuevos miembros (30% del presupuesto) y la financiación de las inversiones en infraestructuras (70%).

Se firmaron los Acuerdos de Asociación Europeos (AAE) con los países de Europa del Este, a través de los cuales se otorga un tratamiento preferencial a estos países frente a terceros y se ha hecho extensivo el acercamiento entre ambas regiones a asuntos de índole político y legislativo. Se han realizado concesiones por la UE en el campo comercial, financiero y de capitales.

⁵ El Programa PHARE (Programa para la cooperación financiera y técnica hacia los países de Europa Central y Oriental) y el TACIS (Programa de asistencia técnica y financiera para la Comunidad de Estados Independientes, antigua URSS y Mongolia), fueron creados en 1989 con el objetivo de apoyar los procesos de reestructuración económica emprendidos por los países de ambas regiones

A través de los llamados acuerdos europeos, firmados con cada uno de los nuevos miembros, se han traspasado a éstos grandes cantidades de recursos para que adapten sus economías y administraciones a las exigencias de la Unión. En el periodo 2000-2006, los fondos ascendieron a más de 15 mil millones de dólares. A partir de enero del 2000 se duplicó la ayuda por parte de la UE a los candidatos. En este sentido, se crearon dos instrumentos específicos: el instrumento estructural de preadhesión (ISPA), que financia grandes infraestructuras medioambientales y de transporte, dotado de un presupuesto de 1 040 millones de euros al año a partir del 2000, y el instrumento agrícola de preadhesión (SAPARD) que tendrá un presupuesto de 520 millones de euros al año.

Estas partidas ayudaron a que las economías candidatas a ingresar en la UE, elevaran sus niveles de crecimiento, y a que, en general, mejoraran sensiblemente todas sus cifras macroeconómicas, aunque todavía presentan resultados desfavorables en algunos indicadores económicos.

Según las previsiones del FMI para los diez nuevos miembros de la UE tendrán un crecimiento del 4,5% del PIB en el presente año 2004 y de 4,4% para el año próximo, superior a la media de la eurozona, que se quedará en el 1,7% y ascenderá al 2,3% en el 2005. Sin embargo, las nuevas naciones miembros deberán hacer un esfuerzo considerable para reducir sus niveles de endeudamiento, ya que en el año 2003 el déficit público medio de estos estados se situó en el 5,7% del PIB, casi tres puntos por encima del límite del 3% fijado en el Tratado de Maastricht y más de dos puntos por encima de la media de los estados miembros, que se situó en el 3,6%.

Con déficit públicos como los de Eslovaquia (5,6% del PIB) o República Checa (5,5%), es difícil que los nuevos miembros puedan integrarse a la zona del euro en el 2006 pese a que en teoría podrían hacerlo a los dos años de entrar en la UE.

La UE, después de la próxima ampliación, tendrá que vivir con diferencias enormes a nivel regional, tanto dentro de los miembros nuevos como entre los nuevos y viejos países miembros.

La renta media de los 10 nuevos miembros es del 44% comparada con la de los Quince. La renta media en los diez oscila entre el 36% de Lituania y el 78% de Chipre, pasando por el 40% de Polonia, el país clave de esta magna ampliación con 38,6 millones de habitantes. Según estimaciones europeas, tardarán unos 40 años en lograr la convergencia real con los niveles medios de la vida comunitaria.

El PIB global de los nuevos miembros sólo supone el 5% del PIB total de los socios comunitarios, mientras que la población y la superficie aumentan en 28% y 35% respectivamente.

Los nuevos miembros aportarán a la producción agrícola de la UE más de lo que aportarán en términos del PIB, a lo que debe agregarse que, en promedio, el 17% de la población activa se dedica al sector agrícola en los nuevos miembros, mientras que esa proporción no supera el 5% en la UE.

Los fondos regionales suponen aproximadamente el 34,5% del presupuesto de la UE (98 634 millones de euros en total), con la nueva ampliación el porcentaje alcanzará el 45% en el caso del presupuesto comunitario dedicado a la PAC. Pues bien, mientras los Quince destinan un 40,3% de su territorio a explotaciones agrícolas, en Polonia la cifra llega al 58,4% (casi 170 000 kilómetros cuadrados), en la República Checa al 54,3% y en Hungría el 61,3%. Es más, dos de cada diez polacos son agricultores, pero sólo aportan el 3,4% al PIB del país.

Sin embargo, la UE ha rebajado notablemente los porcentajes de los fondos que en teoría les correspondería recibir a los nuevos socios a partir del 2004. Y es por eso por lo que esta ampliación será la mayor de la UE, pero también la más barata. Baste recordar que en 1999 los Quince, que entonces pensaban acoger a sólo seis países en el 2002, fijaron la factura en un máximo de 42 590 millones de euros, pero ahora, pese a ser diez los candidatos, calculan que sólo gastarán alrededor de 41 mil millones.

Incluso en la discusión del presupuesto comunitario para el período 2007-2013, se ha propuesto el mismo techo de gasto actual del 1,27% del PIB, es decir, el mismo dinero para 15 socios que para 25, cuando las necesidades son mayores. Todo ello traerá como resultado que alrededor de la mitad de los fondos para el desarrollo regional serán para los países recién llegados, y entre estos, Polonia, la República Checa y Hungría (más de 110 mil millones de euros en el mencionado período) obtendrán la mayor cantidad de recursos. Polonia, con el 18%, es ahora el país más beneficiado y España que lo ha sido en los últimos años, pasará al segundo lugar.

De hecho, España, según las proyecciones de la Comisión, habrá llegado en el 2006 al 92% de la renta media europea, por lo que dejará automáticamente de tener derecho a los fondos de cohesión (que para entonces se habrán reducido a unos 11 mil millones de euros). Irlanda abandona también la lista de los favorecidos después de una década de crecimiento alto, mientras que Portugal y Grecia se quedan aún entre los beneficiarios, al menos hasta el 2013.

Más aún, con la excepción de Malta, Chipre y Eslovenia, que se mueven en cifras equiparables a la UE actual. Dos de cada diez polacos está en paro y la relación se duplica en el caso de trabajadores con menos de 25 años. En Eslovaquia, el desempleo es del 19,4% y en Lituania, del 16,5%. Ante esta situación la Unión Europea ha establecido un período de transición de siete años antes de que los trabajadores de esos países puedan establecerse con libertad en la UE actual.

Una integración económica entre la UE y los países de Europa Central y Oriental, si por un lado aumenta considerablemente la heterogeneidad del continente europeo, en términos de nivel de salarios y de productividad, por otro crea las condiciones de una división del trabajo de tipo Norte-Sur en su seno. Sin embargo, no debe dejar de reconocerse que la dotación de los factores de los países en transición no es igual a la de los países del Tercer Mundo, el potencial de convergencia de estos países es relativamente alto y capaz de modificar rápidamente su inserción en la división del trabajo en Europa.

En efecto, aunque estas economías tienen niveles salariales considerablemente inferiores a los de los países de la UE y comparables a los de un país subdesarrollado como México, mucho más bajos que los de los Nuevos Países Industrializados de Asia, han heredado unas capacidades industriales importantes del período socialista, con un stock considerable de capital físico y de capital humano.

El elevado nivel de educación que prevalece en el Este viene evidenciado por los diferentes indicadores de capital humano (difusión de la enseñanza, gastos de I+D, patentes) que sitúan a los países de Europa Central y Oriental detrás de los países más industrializados, pero no muy lejos de los países de Europa del Sur y por delante de los países en vías de desarrollo de rentas intermedias. La ventaja comparativa de estos, o al menos de los más avanzados entre ellos, podría no ser la mano de obra barata sino, la mano de obra calificada a buen precio, a condición de que puedan explotar este potencial y reconvertir las calificaciones que puedan quedar obsoletas.

Visiblemente, los nuevos estados miembros cuentan con grandes ventajas competitivas en materia laboral y fiscal, lo que ha comenzado a alterar el mapa corporativo de Europa Occidental. "Por el precio de una hora de trabajo de un empleado alemán, un empresario puede contratar a un trabajador polaco durante todo un día. Y un empleado letón pide menos de una décima parte de lo que un empleado nórdico, austriaco u holandés exige". El costo promedio por hora en los 15 países de la UE es de 22,70 euros, mientras que en los 10 nuevos miembros es de sólo 4,21 euros. Esto significa una diferencia de casi 80 por ciento en el precio de la mano de obra.

Por otro lado, la primera necesidad que se plantea a la UE, por parte de la nueva ampliación, es la de la reforma de unas instituciones que no pueden ser válidas para la nueva Unión que vendrá tras la adhesión. Esta reforma traerá consigo importantes desencuentros entre los estados miembros: la composición de la Comisión, el voto ponderado de cada país, los poderes del Parlamento.

Además, la nueva ampliación parece agravar aún más la no funcionabilidad de la Política Externa y de Seguridad Común europea. La alianza franco-alemana que históricamente ha dominado las relaciones exteriores de la UE fue burlada cuando tres de los nuevos miembros de la Unión - Hungría, Polonia y la República Checa — se unieron a Gran Bretaña y a España en su apoyo a la política de Estados Unidos respecto a la guerra en Irak. Asimismo, se unieron otros miembros: Eslovaquia, Letonia, Estonia y Lituania. Inclusive, otros países que aspiran ingresar a la UE, como Rumania, Bulgaria, Croacia, Macedonia y Albania, también lo hicieron.

En este sentido, la UE no sólo sufre una crisis profunda en cuanto a la cohesión económica, sino también de legitimidad ante la opción de alineamiento de gran parte de sus miembros a la política militar de Estados Unidos. Estas diferencias reflejan importantes dificultades en el proceso integrador europeo. Tal parece, que se abre en el seno de Europa un abismo en las concepciones de la integración. Eso explica que se postule una Europa de velocidad variable con un centro político

y económico cada vez más integrado y una periferia ligada al centro más por el concepto de una zona de libre comercio que por lazos políticos.

Bibliografía

- Zuaznabar Ismael, *La Comunidad Europea Neocolonialismo Colectivo*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1989.
- Xavier Vence y José Luis Outes: *La integración europea y la crisis del estado de bienestar*, Editorial Síntesis, España, 1998.
- Mendizabal Antxon y Lasa Eusebio, *Pautas de la construcción europea*, España, 1996.
- Guerra Borges Alfredo, "Repercusiones previsibles del Mercado Unico Europeo ", UNAM- Fundación Friedrich Ebert, *América Latina y México ante la Unión Europea de 1992*, México, Julio 1992.
- Baró Herrera Silvio, "La Unión Europea y el proceso de globalización", *Revista del Centro de Estudios Europeos*, Enero-Marzo, 1997.
- Portes, R. 1994: *La UE y los países del Centro y Este de Europa*, ICE, No 728, Madrid, 1994.
- OECD Economic Outlook* No 58, diciembre 1995, Francia.
- Beinstein, J. 1999: "La declinación de la economía global. De la postergación de la crisis a la crisis general de la globalización", Ponencia presentada en el Encuentro Internacional sobre Globalización y Problemas del desarrollo, Cuba, 1999.
- Internet:*
- Unificación Comunista de España, Ampliación de la Unión Europea: Engordar para morir, enero 2003.
- Embajada Británica en Madrid: La Unión Europea: más extensa, más diversa, los desafíos estratégicos de la ampliación, 2001.
- Radio Nederland, Deliberaciones para la ampliación de la Unión Europea, 2002.
- BBC.Mundo, Europa ¿se olvidó de Latinoamérica?, 2002.
- Europa Press, Bruselas propone que la UE destine 5.105 millones de euros en 2004 a los diez Estados adherentes, 2004.
- Europa Press, El 95 por ciento del comercio de los Quince con los diez futuros Estados ya está liberalizado, 2004.
- Economista.digital, La nueva UE: Ampliación, aspiración y realidades, en el proyecto constitucional de la UE, 2002.
- El universal, Agencia Online, Europa enfrenta grandes retos, 27 de abril 2004.
- El universal, Agencia Online, El euro sube a 1,1882 dólares, 27 de abril del 2004.

Tercer mundo. Problemas y desafíos en los albores del nuevo milenio

José A. Pérez García
Investigador del CIEM

El escenario que hoy se identifica como el Tercer Mundo es un conglomerado de razas, lenguas, cultura y mercados en el que viven 4800 millones de personas⁶ que representan alrededor del 78,6% de la población mundial⁷ estimada en el año 2003 en 6 100 mil millones de personas⁸.

En los últimos cuarenta años los países del Tercer Mundo considerados en su conjunto han estado bajo el impacto de los grandes cambios que tienen lugar en la economía mundial entre los que se destacan por su importancia, el proceso de globalización de la economía mundial, la hegemonía del modelo neoliberal, la liberalización del comercio, el sobredimensionamiento de la especulación financiera sobre la economía real-productiva, el alto desarrollo científico técnico reflejado en la economía del conocimiento y los nuevos paradigmas tecnológicos asociados a la computación, la Informática y la era digital.

La hegemonía del modelo neoliberal ha conducido a la economía mundial a uno de los períodos más inestables y críticos de que se tenga conocimiento en los últimos cincuenta años. Después de un largo período de estabilidad económica - décadas de los años 50 y 60 del siglo XX- en el que las tasas de crecimiento oscilaron alrededor del 6%, los ciclos de la economía mundial se han caracterizado por sucesivas crisis y por periodos de recuperación cortos, frágiles e insuficientes para revertir los problemas acumulados.

Como regla, los países del Tercer Mundo han estado bajo el impacto de la crisis económica internacional y han evidenciado que son muy vulnerables a estos episodios de crisis. Se observa que no están suficientemente preparados para insertarse en la economía mundial en proceso de globalización y carecen de instrumentos adecuados para evitar las consecuencias de la crisis de la economía internacional al interior de sus territorios.

Tal es así, que las turbulencias financieras internacionales y la crisis asiática de finales de la década de los años 90 impactó no sólo en los países asiáticos sino también en África y en América Latina. Para el caso de África, en 1999 se produjo una caída del crecimiento (2,7%) en relación con la primera mitad de ese decenio⁹.

⁶ PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 2003. Pág. 253.

⁷ Cálculos a partir de la fuente citada.

⁸ PNUD. Ídem anterior.

⁹ FMI. *World Economic Outlook*. Septiembre, 2003. Pág. 173.

En América Latina y el Caribe en 1999, se volvió a interrumpir el ritmo de crecimiento económico que se había registrado entre el año 1996 y el año 1997 con una tasa de crecimiento para este último año de 5,4%¹⁰ -la primera interrupción en el decenio de los años 90 fue en 1995 como consecuencia de la crisis económica mexicana de 1994- y se inició un nuevo período de crisis económica que tuvo su punto más bajo en el año 1999 cuando la región registró un crecimiento del PIB de sólo 0,5%¹¹.

La región más golpeada por esta crisis fue Sudamérica, y dentro de esta, dos de los países más afectados fueron Brasil y Argentina. El primero registró una caída en el crecimiento económico en relación con la primera mitad del decenio de los años 90, pero lo más significativo fue que algunas de las medidas tomadas por este país para defender su moneda (el real) del ataque de los especuladores internacionales y promover la seguridad del mercado brasileño ante los agentes económicos internacionales -en especial el alza de la tasa de interés hasta el 43%- tuvieron un impacto recesivo al interior de la nación cuyos impactos persisten, y se hicieron sentir aún en el año 2003¹².

Este episodio de crisis económica y el impacto que generó en Sudamérica -en particular en el contexto de MERCOSUR, y muy especialmente en Argentina- y que se expresó en una caída del comercio entre Argentina y Brasil, la insostenibilidad del régimen de convertibilidad del Presidente Carlos Saúl Menem y el colapso del modelo neoliberal en Argentina, llevó a esta nación austral a un largo período de crisis general que empezó a mediados del año 1998 y se mantuvo por más de 15 trimestres consecutivos, convirtiéndose en la crisis estructural más larga y de peores consecuencias sociales en los últimos tres lustros en esa nación sudamericana.

A pesar de todos estos problemas, la apertura y la desregulación de la economía de los países del Tercer Mundo frente al capital transnacional, condujo a que en el decenio de los años 90, se registrara una determinada reanimación del flujo de inversión extranjera y nuevos créditos hacia muchos de estos países en comparación con la década de los años 80.

Aún así, fue evidente que en varios países se trató de una inversión de mala calidad al arribar un volumen muy grande de capital golondrina, muy volátil, de difícil control por los países receptores e incapaz de generar desarrollo. La participación de las inversiones en cartera en el flujo inversionista total hacia los países del Tercer Mundo, que osciló entre el 2% y el 3% entre el año 1975 y el año 1989, subió hasta el 21% en la primera mitad del decenio de los años 90¹³.

En la segunda mitad de ese decenio, después de las lecciones derivadas de la crisis mexicana y el “efecto tequila” de los años 1994 y 1995 en Latinoamérica, varios países receptores tomaron medidas para protegerse del efecto negativo de

¹⁰ CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 2003. Cuadro A-2.

¹¹ CEPAL. Ídem anterior.

¹² CEPAL. Ídem anterior.

¹³ UNCTAD. *Trade and Development Report*. New York-Ginebra, 1999. Pág. 102.

este tipo de capital y como reacción se modificaron en alguna medida los patrones de la inversión extranjera aumentando el arribo de inversión directa. Sin embargo, esa inversión estuvo muy asociada a la política neoliberal de privatización del sector público de esta región y no necesariamente a una estrategia de industrialización y desarrollo económico y social. Aún así, también quedó demostrado en ese decenio que en los períodos de crisis de la economía mundial - o regional- estos flujos se deprimieron como reporta la CEPAL para el caso de América Latina y el Caribe¹⁴.

En África se registró una tendencia similar¹⁵, aunque para el caso de este continente es importante tener en cuenta algunos aspectos no económicos que podrían desestimular la inversión extranjera como las pandemias y los conflictos etnopolíticos.

Este comportamiento puede ser muy negativo para muchos países subdesarrollados pues la inversión extranjera directa ha sido uno de los factores principales que ha permitido un superávit de la cuenta de capital y financiera en los últimos años, el cual ha compensado el déficit de la cuenta corriente y durante varios años el saldo negativo de la balanza de pagos además de facilitar los recursos para cumplir sus compromisos financieros internacionales.

Pero los problemas económicos externos que enfrentan los países del Tercer Mundo no están asociados sólo a los problemas financieros, a las crisis y la condicionalidad e inestabilidad de las inversiones extranjeras sino también a los problemas comerciales, a la caída que ha experimentado la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y el aumento de la deuda externa.

En los últimos cuarenta años, se ha profundizado la subordinación de los países subdesarrollados en el comercio mundial, tanto en el comercio de bienes como en el comercio de servicios. No obstante, la participación de estos países en el comercio mundial no es homogénea, puesto que los países de Asia Oriental y Meridional sí han incrementado su presencia comercial, en tanto que África y Latinoamérica y el Caribe la han disminuido y Asia Occidental depende básicamente de sus exportaciones petroleras. En la estructura exportadora predominan los productos básicos y las manufacturas de baja tecnología.

En materia de financiamiento para el desarrollo, en el período de referencia se ha hecho evidente que el compromiso de los países desarrollados consistente en aportar el 0,7% del PIB como ayuda al desarrollo de los países subdesarrollados ha sido incumplido por la mayor parte de los países industrializados (en el año 2004 la AOD representaba sólo el 0,2% del PIB de los países desarrollados en su conjunto)¹⁶ y en los casos que se ha cumplido se ha constatado un condicionamiento a la aplicación de políticas de ajuste neoliberales.

¹⁴ CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 2003. Cuadro A-16.

¹⁵ UNCTAD. *Trade and Development Report*. New York-Ginebra, 1999 y UNCTAD. *Informe sobre las Inversiones en el Mundo*, 2001.

¹⁶ www.OCDE.org/CAD, 2004.

La deuda externa, por su parte, se ha convertido en un verdadero lastre para el desarrollo de los países subdesarrollados. Después de un ciclo de "endeudamiento fácil" que transcurrió básicamente entre los años 60 y 70 en Latinoamérica y que a la postre devino crisis de deuda externa en muchos países latinoamericanos a partir de 1982, el tema del endeudamiento externo se convirtió en uno de los nuevos problemas para el desarrollo en la mayoría de los países del Tercer Mundo.

Por un lado, los préstamos se encarecieron como consecuencia de la "escasez" de crédito y del aumento de la tasa de interés internacional. Por otra parte, la acumulación de una deuda externa que representaba alrededor del 25 % del PIB para el conjunto de los países subdesarrollados¹⁷, era un elemento que introducía ya incertidumbre en los agentes de crédito internacional por cuyo concepto creció mucho el criterio de riesgo-país en el momento de otorgar nuevos préstamos

Esta coyuntura expuso significativamente a los países deudores al FMI lo cual fue usado por esta institución como condición para presionarlos a asumir ajustes económicos neoliberales.

En este período, el FMI asumió un importante protagonismo entre las fuentes de financiamiento externo de los países del Tercer Mundo y, en muchos casos, en el diseño de su política económica doméstica y en su desempeño económico interno.

En esta dirección el FMI reforzó el papel de los mecanismos concebidos para dar seguimiento a los procesos de ajuste estructural de los países miembros. Estos son: el Servicio de Ajuste Estructural (SAE) y el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) ambos creados para que los países enfrascados en los programas de ajuste pudieran acudir a reprogramar deudas vencidas, negociar nuevos préstamos, etc. Esta política provocó que la ingerencia del FMI en los países deudores creciera considerablemente.

Como se corroboró en el curso de los años 80 y 90, la inserción de los países subdesarrollados como receptores netos de créditos devino en este período una espiral de endeudamiento externo que se ha multiplicado por cuatro en los últimos veinte años, ya que, en 1982, se reportó una deuda total para estos países que osciló en torno a los 600 mil millones de dólares¹⁸ y en el 2003, los adeudos eran ya de 2,6 millones de millones de dólares¹⁹.

Aún cuando para los analistas neoliberales, la deuda externa en el decenio de los años 90 perdió la connotación económica y social que tuvo en la década de los años 80, el problema de la deuda ha continuado siendo uno de los factores que más afectan el crecimiento económico y el desarrollo social de los países del Tercer Mundo debido a que su servicio ha implicado significativas erogaciones de recursos que en regiones como América Latina y el Caribe coadyuvaron a una

¹⁷ FMI. *World Economic Outlook*. Washington D.C., 1982. Pág. 171.

¹⁸ Fidel Castro. *La Crisis Económica y Social del Tercer Mundo*. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado de la República de Cuba. La Habana, 1983. Pág. 93.

¹⁹ FMI. *World Economic Outlook*. Abril, 2004. Pág. 248.

transferencia negativa de recursos hacia el exterior durante todo el decenio de los años 80.

Si bien esta tendencia se revirtió durante la mayor parte del decenio de los años 90, desde el año 1999 se ha instalado de nuevo una transferencia negativa de recursos cuyos peores resultados se registraron en el año 2002 y el año 2003 con sendos saldos negativos que representaron 10,2% y 6,9% de las exportaciones de bienes y servicios, respectivamente²⁰.

Para África se manifestó una tendencia similar, pero a diferencia de Latinoamérica y el Caribe su comportamiento ha sido sostenidamente negativo durante los últimos veinte años.

Esto ha significado una importante fuente de descapitalización de estos países, en tanto los ha privado de ingresos que en otras condiciones podrían haber oxigenado el crecimiento económico y estimulado el desarrollo social.

Entre el año 1975 y el año 2003 la relación de la deuda externa respecto al PIB de los países del Tercer Mundo aumentó sensiblemente. En el caso de la relación deuda-exportaciones, si bien disminuyó a partir del año 1990, se mantuvo en niveles muy altos.

Tabla 1
Países del Tercer Mundo. Relación entre la Deuda-PIB y Deuda-Exportaciones
(Porcentajes)

	1975	1980	1990	1995	2000	2003
Deuda-PIB	18,3	21,8	37,3	37,5	32,5	37,7
Deuda-Exportaciones	97,7	92,9	177,8	162,9	145,6	115,4

Fuentes: FMI. *World Economic Outlook*. Washington D.C., 1982. Pág. 171.

FMI. Ídem anterior, 1998. Pág. 236.

FMI. Ídem anterior. Septiembre, 2000. Págs. 263 y 268.

FMI. Ídem anterior. Septiembre, 2003. Págs. 229 y 233.

En estos dos indicadores el comportamiento de África y Latinoamérica y el Caribe superaron la tasa media reportada por el Tercer Mundo. Hacia el año 2003, la deuda externa africana representó el 49,2% del PIB de ese continente²¹ y los débitos de América Latina y el Caribe, el 51,7% del producto de la región²².

En lo concerniente al servicio de la deuda externa, si bien se puede apreciar en el año 2003 una relativa mejoría respecto al quinquenio 1990 -1995, el resultado de ese año es más malo que el de los años 1975 y 1980. En este indicador, el comportamiento de América Latina y el Caribe (40,7% de las exportaciones de bienes y servicios)²³ clasifica como el peor en el contexto del Tercer Mundo porque

²⁰ CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 2003. Cuadro A-13.

²¹ FMI. Ídem anterior.

²² FMI. Ídem anterior.

²³ FMI. Ídem anterior. Pág. 229.

es dos veces mayor que la media de los países subdesarrollados que fue de 18,1%²⁴.

Tabla 2
Países del Tercer Mundo. Servicio de la deuda externa
(Porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios)

1975	1980	1990	1995	2000	2003
14,0	16,3	21,9	22,3	22,1	18,1

Fuentes: FMI. *World Economic Outlook*. Washington DC, 1982. Pág. 173.

FMI. Ídem anterior, 1998. Págs. 231y 236.

FMI. Ídem anterior. Septiembre, 2003. Pág. 229.

Otro aspecto que constituye un impacto muy serio para estos países son los problemas medioambientales ante los cuales carecen, en la mayoría de los casos, de: organización interna; adecuadas redes de educación, salud y seguridad; y medios económicos para enfrentarlos y a veces, ni siquiera, para minimizar sus consecuencias.

A pesar de que estos problemas impactan de una u otra manera a todos los países, el Tercer Mundo constituye un escenario dispar en términos de desarrollo económico, tecnológico y social, tanto entre los continentes que lo integran como al interior de los mismos.

El Informe sobre Desarrollo Humano del año 2000 se hizo eco de estas diferencias cuando señaló que "Las disparidades entre regiones pueden ser significativas, y algunas regiones tienen que cubrir más terreno para superar las ineficiencias que otras. El África Subsahariana tiene que recorrer más del doble que América Latina y el Caribe y el Asia Meridional casi tres veces más que el Asia Oriental".²⁵

Estas diferencias, en un contexto internacional como el actual explican que en cada una de estas regiones y al interior de las mismas, se constaten reacciones y respuestas diferentes desde el punto de vista económico y político ante los choques externos.

No obstante esto, el Tercer Mundo, es también un escenario donde confluyen rasgos comunes, los cuales se constatan en la presencia del subdesarrollo económico, el atraso social, la marginación, la dependencia comercial, financiera y tecnológica y la vulnerabilidad frente a los choques externos.

Esto se ha hecho muy evidente en las últimas cuatro décadas en las que el mundo ha estado transitando hacia otros paradigmas productivos, técnico-organizativos, tecnológicos y en la inserción internacional.

Los países del Tercer Mundo transitaron del paradigma keynesiano al modelo neoliberal por la vía de los ajustes estructurales de corte fondomonetarista, lo cual abrió un proceso largo y difícil, que a pesar de los rasgos comunes a todos los

²⁴ FMI. Ídem anterior.

²⁵ PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 2000. Pág. 148.

países que lo asumieron tuvo diferentes velocidades y diferentes manifestaciones entre un continente y otro y al interior de los propios continentes.

Chile y otros países del Cono Sur latinoamericano fueron una especie de laboratorio para América Latina y el Tercer Mundo durante la década de los años 70. Sin embargo, el abandono del modelo cepalino de Industrialización por Sustitución de Importaciones²⁶ y la expansión del neoliberalismo en esta región fue un proceso que se dio preferentemente en el decenio de los años 90 y que ya hacia finales de esa década, evidenciaban claras expresiones de crisis.

Los países asiáticos hicieron más resistencia a las presiones ejercidas por el FMI y el Banco Mundial en lo que concierne a la adopción de programas de ajuste económico de matriz neoliberal. Algunos especialistas en el tema de la economía asiática, sostienen la hipótesis de que la crisis que tuvo lugar en esta región en 1998, al margen de las muestras de agotamiento del modelo de los “tigres asiáticos”, fue catalizada por Occidente y sus instituciones financieras como instrumento de presión para que estos países se abrieran al modelo neoliberal. África también demoró en la adopción del nuevo modelo, aunque por razones diferentes a las de Asia.

En África, a pesar de los grandes problemas internos que caracterizan a este continente -subdesarrollo, pandemia del VIH/SIDA, hambruna y conflictos etnopolíticos- también se han aplicado políticas de ajuste estructural de matriz neoliberal, cuyas consecuencias ha hecho más difícil la inserción de la mayor parte de los países de este continente en la economía mundial y más dramática su marginación de las oportunidades del desarrollo.

El impacto de los cambios económicos globales se constata en los países del Tercer Mundo en los problemas que se confrontan con el crecimiento económico, el atraso de la industria y la agricultura, los problemas comerciales y financieros.

Quizás el indicador económico en el que el neoliberalismo puede exhibir su mejor expediente es la contención de las presiones inflacionarias de los años 80. Ciertamente, tanto para el conjunto de los países del Tercer Mundo, como en todas las regiones que lo integran la inflación ha sido reducida.

Tabla 3
Comportamiento de la inflación en los países del Tercer Mundo
(Porcentajes)

	1968-1972	1986-1994	1996-2004
África	4,6	29,1	16,3
Asia	6,5	11,0	4,8
América Latina y el Caribe	15,3	191,2	12,2
Tercer Mundo en su conjunto	8,0	49,2	9,2

²⁶ Modelo de desarrollo basado en la escuela de pensamiento económico neoestructuralista que se proponía acceder al desarrollo a través de un proceso de industrialización inducido por la sustitución de importaciones por producción nacional. Este modelo fue aplicado en varios países latinoamericanos entre 1950 y 1980 y contó con la CEPAL entre sus principales patrocinadores.

Fuentes: FMI. *World Economic Outlook*. Septiembre, 2003. Pág. 182.
FMI. *World Economic Outlook*. Washington D.C., 1982. Pág. 145.

A pesar de las marcadas diferencias en el tema de la inflación entre una región y otra, lo común para todas las regiones es que las políticas de ajuste han reducido la inflación. Aunque esto pudiera considerarse un éxito por los estrategias del modelo, este resultado no se ha basado en el desarrollo de la economía sino que ha descansado básicamente en el aumento del desempleo, la precariedad del empleo y el crecimiento del sector informal lo cual relativiza bastante su impacto positivo. De esta manera, la contención de la inflación ha sido uno de los factores que más ha atacado al mercado de trabajo.

Deterioro de la calidad del crecimiento económico.

En los últimos cuatro decenios, el crecimiento económico del conjunto de los países del Tercer Mundo se deterioró en casi tres puntos porcentuales, siendo el caso más traumático el de América Latina y el Caribe con una caída de casi cinco puntos. En la mayoría de los países subdesarrollados se deterioró significativamente la base endógena del crecimiento y el desarrollo económico, las economías se extranjerizaron aún más y se hicieron más vulnerables ante los choques externos. Por otra parte, ante el déficit de dimensión social del modelo económico neoliberal muchos de los problemas sociales -desempleo, marginalidad, inequidad y pobreza- se han agravado.

En este período se constató una tasa de crecimiento demográfico que estuvo por encima del nivel del crecimiento económico, lo cual implicó una fuerte presión sobre el producto en lo que respecta al efecto social que éste podía generar. Como consecuencia de todos estos factores, el PIB per cápita se estancó o cayó, en todas las regiones comprendidas dentro del Tercer Mundo por debajo del nivel que había alcanzado en el decenio de los años 70. Esta situación se vio agravada por la aplicación de programas de ajuste estructural de matriz neoliberal en la mayoría de los países subdesarrollados, lo cual hizo imposible dotar al crecimiento de una mejor dimensión social.

Tabla 4
Tasa de crecimiento demográfico, crecimiento económico e ingreso per cápita en las décadas de los años 70 y 80
(Porcentajes promedios anuales)

Regiones	Crecimiento demográfico. Decenios de los años		Crecimiento del PIB. Decenio de los años		PIB real per cápita. Decenios de los años	
	70	80	70	80	70	80
Todos los países subdesarrollados	2,1	2,4	5,6	3,1	2,7	1,5
África	2,8	3,1	4,9	2,0	1,6	- 0,7
América Latina y el Caribe	2,3	2,1	5,9	1,0	2,8	- 0,6
Asia Occidental	3,7	3,3	5,5	- 0,8	- 0,2	- 3,3
Asia Meridional *	2,2	2,2	5,8	6,0	3,6	3,6

Fuentes: Naciones Unidas. *World Economic and Social Survey*, 1995. Pág. 211.
Naciones Unidas. *Estudio Económico Mundial*. New York, 1990. Pág.3, 20, 25, 288
CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*.
Santiago de Chile, 1999. Pág. 89. * Excluye China y la India.

En la década de los años 90, aún cuando el crecimiento económico reportado por los países subdesarrollados tuvo un comportamiento mejor en relación con el decenio de los años 80, en casi todas las regiones la tasa de crecimiento fue inferior entre uno y tres puntos porcentuales respecto a la década del 70 y los ciclos de crecimiento alcanzado son por lo general cortos, insuficientes y reiteradamente accidentados por episodios de crisis económicas.

Tabla 5
Tasa de crecimiento demográfico, crecimiento económico e ingreso per cápita en el decenio de los años 90
(Porcentajes promedios anuales)

Regiones	Crecimiento demográfico	Crecimiento del PIB	PIB per cápita
Todos los países subdesarrollados	1,7	4,6	3,3
África	2,7	1,8	- 0,4
América Latina y el Caribe	1,6	3,2	1,4
Asia Occidental	3,4	2,8	-
Asia Meridional	2,3	4,8	3,6

Fuentes: FNUAP. *Estado de la Población Mundial*. New York, 2000. Págs. 70-72.
PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 2000. Pág. 205.
Naciones Unidas. *Estudio Económico y Social Mundial*. New York, 1999. Pág. 292.
CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe* Santiago de Chile, 1999. Págs. 89 y 90.

Si bien la tasa de crecimiento de la población en los años 90 se moderó respecto a las dos décadas anteriores, y en todas las regiones fue algo más baja que la tasa de crecimiento económico, el déficit de equidad y justicia social propio del modelo neoliberal dio al traste con las aspiraciones de desarrollo social de los pueblos del Tercer Mundo.

Entre el año 2001 y el año 2003, el crecimiento económico del conjunto de los países subdesarrollados se deterioró respecto a los años 90, como consecuencia de la sincronía de la crisis económica en los tres centros de la economía mundial. En estos años, el crecimiento de la economía del Tercer Mundo ha oscilado en torno al 3%²⁷.

La agricultura

Sectorialmente, la agricultura bajó su participación en la estructura del PIB de los países del Tercer Mundo en su conjunto. Este fenómeno se explica por una combinación de factores adversos entre los que se encuentran la depresión registrada en los precios de los productos básicos que constituyen rubros de exportación de la mayor parte de estos países.

²⁷ FMI. *World Economic Outlook*. Septiembre, 2003. Pág. 173.

Otro factor adverso para el desarrollo de la agricultura lo constituye la apertura neoliberal al comercio internacional. Por este concepto, se ha favorecido a las importaciones agrícolas y alimentos, en detrimento en muchos casos de los agentes locales, quienes privados de los aranceles de importación no pueden competir frente a las transnacionales y las importaciones procedentes de países con niveles más altos de productividad y eficiencia o que aplican fórmulas de dumping.

Para el caso de la importación de productos agrícolas, está además el delicado asunto de los subsidios agrícolas que Estados Unidos y la Unión Europea da a sus agricultores para mejorar su inserción en el mercado mundial y aumentar su capacidad competitiva.

Otra circunstancia que también conspira contra el desarrollo de la agricultura de los países del Tercer Mundo es el proceso de desmaterialización de la producción, que ha estado sustituyendo durante todos estos años los productos básicos por sucedáneos artificiales, como son los casos de los edulcorantes, los jugos sintéticos etc. Al disminuir la importancia de estos productos básicos en el mercado mundial y aumentar la oferta de estos en relación a la demanda, los precios se han deteriorado y esto constituye un desestímulo a muchos rubros la agrícolas.

Por último, también hay que considerar el grave impacto que significa para la agricultura la firma de los tratados de liberalización comercial bajo los principios de la OMC durante los últimos años. La experiencia de estos acuerdos en América Latina sugiere que para muchos países poco desarrollados -caso de Centroamérica respecto a Estados Unidos o México- u otros de desarrollo medio -caso de México respecto a Estados Unidos- el tejido económico nacional se ha desestructurado frente a la competencia transnacional y algunos rubros agrícolas virtualmente han desaparecido. Este es el caso del maíz y del café en México, un fenómeno que puede reiterarse en Mesoamérica con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (TLCEUCA).

Estos factores están implicando no sólo una caída de la participación del sector agrícola en el PIB de varios países del Tercer Mundo sino que está provocando que países que eran virtualmente autosuficientes en la rama agrícola y alimentaria -exportaban determinadas cantidades de estos productos e importaban relativamente poco- ahora clasifican como importadores netos llegando a poner en riesgo la soberanía alimentaria.

Uno de los casos más conocidos en este aspecto es México. Este país pasó de ser casi autosuficiente en el consumo de granos a importador neto de estos productos. Entre 1994 y el 2000 se importaron por la nación azteca 90 millones de toneladas de granos, de las cuales 30 millones de toneladas fueron de maíz²⁸. Esto significa 38 millones de toneladas de granos y 13 millones de toneladas de

²⁸ Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (INEGI). Varios años.

maíz, por encima del volumen importado entre 1987 y 1993 que fue de 52 y 30 millones de toneladas, respectivamente²⁹.

Como consecuencia de 10 años de tratado de libre comercio con Estados Unidos, México depende ahora un 60% de las importaciones de arroz desde el mercado estadounidense, un 50% de las importaciones de trigo, un 23% de las importaciones de maíz y un 95% para el caso de la soya³⁰.

Esto ha conllevado a la pérdida de 400 mil empleos en el sector del café, 200 mil empleos en la porcicultura y no menos de 30 mil empleos en el sector apícola.

Colombia, otro país que tenía cubierta la mayor parte de su demanda interna de raíces, tubérculos, viandas y frutas con su propia producción; hoy está importando grandes volúmenes de plátanos y papas desde Ecuador; arroz desde China y Vietnam, y trigo, maíz y cebada desde Estados Unidos.

La industria

La participación de la industria en el PIB aumentó entre el decenio de los años 60 y los años 80, pero en la década de los años 90 también registró una caída en la mayor parte de los países del Tercer Mundo siendo las regiones de África Subsahariana y América Latina y el Caribe donde se han registrado las caídas más significativas con 4,4 puntos porcentuales y 3,3 puntos porcentuales, respectivamente durante el decenio de los años 90³¹. Sólo en algunas regiones de Asia, tiene lugar un modesto crecimiento de la participación de la actividad industrial en el PIB. Tales son los casos de Asia Meridional y Asia Oriental con un aumento de 5,5 y 1,6 puntos porcentuales³², respectivamente.

Esta caída se explica por la prioridad que los gobiernos neoliberales le han otorgado a las importaciones de bienes industriales fabricados con mejores niveles de eficiencia en el exterior, por el deterioro de la base endógena del crecimiento y el desarrollo económico de los países y por la política de privatización de los activos públicos que han seguido estos gobiernos.

Si bien es cierto que las estadísticas reportan un crecimiento de las manufacturas en la estructura exportadora de los países del Tercer Mundo, se trata de manufacturas de bajo contenido tecnológico y bajo valor agregado ya que las empresas transnacionales se interesan fundamentalmente por realizar inversiones en países y sectores económicos cuya ventaja competitiva es la existencia de recursos naturales abundantes y el bajo costo de la mano de obra.

Esto ha conducido a una expansión sin precedentes de las zonas francas y los parques industriales donde lo más característico son las maquilas, o sea, industrias intensivas en el uso de mano de obra barata, carente de derechos laborales lo que convierte a estos países en zonas de "tolerancia laboral" muy

²⁹ Ídem anterior.

³⁰ Ídem anterior.

³¹ Cálculos a partir del *Informe sobre Desarrollo Humano*, 2000.

³² Ídem anterior.

funcionales a los intereses transnacionales porque le permiten una inserción más competitiva de sus exportaciones en el mercado mundial pero muy destructivas para el desarrollo de los países del Tercer Mundo porque no estimulan la productividad del trabajo, agravan la contaminación del entorno natural y no han expandido un empleo de calidad.

Estas industrias lo que más han desarrollado es el empleo precario, mal pagado, nocivo a la salud e inseguro. De esta manera, la estrategia de industrialización, redespigue industrial y transferencia tecnológica de los años 70, quedó interrumpida y postergada en la mayor parte de los países subdesarrollados y su lugar fue ocupado por la maquila y la precariedad del empleo, siendo los casos más representativos de esta tendencia los países del Sudeste asiático, México y Mesoamérica.

Sin embargo, la responsabilidad por este deterioro del empleo no es sólo atribuible a los países del Tercer Mundo que tienen muy pocas posibilidades reales de inserción en el mercado internacional, sino a las empresas transnacionales que han decidido hacer significativas inversiones de capital en estos países atraídas por el bajo costo salarial y las condiciones de casi tolerancia laboral que impera en estas latitudes como condición para mejorar la capacidad competitiva de sus exportaciones en el mercado mundial y maximizar la cuota de ganancia.

En términos sectoriales, la tendencia más evidente en los países del Tercer Mundo en las últimas cuatro décadas, es la terciarización de sus economías, o sea, el crecimiento que se ha experimentado en el sector de los servicios aunque en la mayor parte de estos países predominan los servicios vinculados al comercio y no servicios informáticos o vinculados a la economía del conocimiento.

Tabla 6
Evolución de la estructura del PIB de los países del Tercer Mundo
(Porcentajes)

Año	Agricultura	Industria y otros vinculados directamente a este sector	Servicios
1960	33	25	42
1970	25	31	44
1980	20	33	47
1991	17	36	47
1994	15	36	50
1998	13,5	34,1	52,5

Fuente: PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 1994. Pág. 197.
V. Yashkin. *La Economía de los Países en Desarrollo en los años 1960-2000*. Pág. 61.
PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 1997. Págs. 238 y 244.
PNUD. *Ídem anterior*. Año 2000. Pág. 209.

Una tendencia similar se reitera en la estructura del empleo. Desde mediados del decenio de los años 60, viene observándose un crecimiento del empleo en el sector de los servicios y una caída en el sector de la agricultura.

En el período de 1960 a 1990 el empleo de fuerza de trabajo en la agricultura en los países del Tercer Mundo bajó de 71% a 61% del total de la fuerza de trabajo

empleada³³. Para el caso del empleo en la industria, en este mismo período sólo aumentó 5%³⁴, mientras que en el sector de los servicios el aumento del empleo de fuerza de trabajo creció de 42% a 52,5%³⁵

Por otra parte, la acumulación de problemas sociales heredados del decenio de los años 80, ha generado una alta deuda social en los países pobres, cuya solución requiere como condición necesaria ritmos de crecimiento más altos y sostenidos. Sin embargo, al margen de que en el decenio de los años 90, la tasa de crecimiento de la economía fue mejor que en la década de los años 80, en los últimos cuarenta años el crecimiento económico en el Tercer Mundo se ha contraído, con la excepción de China y algunos otros países del Sudeste Asiático. Todo esto explica, en parte, que el ingreso per cápita real en África y América Latina y el Caribe, sea más bajo que en el decenio de los años 70 y la pobreza se haya convertido en un problema crónico en la mayoría de los países subdesarrollados.

Casi todos los informes de las Naciones Unidas y de otras fuentes como el BID, y el Banco Mundial se hacen eco de estos problemas y en los últimos años han pasado a sugerir algunas medidas para enfrentarlos. A pesar de esto, en varios documentos se evidencia que el diagnóstico de los problemas es muy técnico y está divorciado de la compleja realidad en que tienen lugar. En otros casos, las prioridades que se plantean focalizan su acción en los problemas más agudos como, por ejemplo, mejorar la seguridad alimentaria de 400 millones de hambrientos y la erradicación de la pobreza extrema para el 2015 pero no se perciben medidas efectivas para erradicar el hambre (840 millones de personas) ni la pobreza que se abate sobre 1200 millones de personas, respectivamente.

De esta manera, no pocas de las medidas que se anuncian tienen un efecto muy limitado y otras son sencillamente incapaces para resolver los problemas reales que enfrentan la población que vive en el Tercer Mundo.

³³ PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 1991. Tablas 24 y 35 y *La Economía de los Países en Desarrollo en los años 1960-2000* (V Yashkin). Pág. 61.

³⁴ Ídem anterior.

³⁵ Ídem anterior.

Bibliografía

- FMI. *World Economic Outlook* 1982, 1995, 1996, 1999, 2000, 2003 y 2004.
- FMI. *World Economic Outlook. Selected Topics 1990-1998 y 1992-1999.*
- FMI. *Annual Report*, 2000.
- Naciones Unidas. *Estudio Económico y Social Mundial*, 1990, 1992, 1995, 1997, 1999.
- PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003.
- UNCTAD. *Trade and Development Report*, 1999, 2000.
- CEPAL. *Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe*, 1982, 1985, 1989, 1990, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2003.
- CEPAL. *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*, 1993, 1996, 1999, 2000 y 2002.
- CEPAL. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*, 1999-2000.
- Fidel Castro. *La Crisis Económica y Social del Mundo*. Oficinas de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 1981.
- Oswaldo Martínez. *Tercer Mundo y Economía Mundial*. Editora Política. La Habana, 1983.
- Comisión Sur. *Desafío para el Sur*. Fondo de Cultura Económica. México, 1992.
- CIEM. *La Economía Mundial. Los últimos veinte años*. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2002.

La economía de América Latina y el Caribe en las últimas cuatro décadas. Algunas reflexiones críticas.

José A. Pérez García
Investigador del CIEM

Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina fue escenario de dos estrategias de desarrollo económico: una conocida como desarrollista y otra neoliberal.

La estrategia desarrollista se concretó en el Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), también conocido como Modelo de Desarrollo hacia Adentro, debido al énfasis que se ponía en las fuentes endógenas del crecimiento y acumulación, en particular en los agentes nacionales y el mercado interno.

Después de un largo período que transcurrió entre la décadas de los años 50 e inicios del decenio de los años 70 en el que se registró la tasa de crecimiento promedio anual más alta de la postguerra en América latina y el Caribe en su conjunto (5,5 %) ³⁶, el modelo desarrollista dio muestras de agotamiento provocando una coyuntura de crisis que fue aprovechada por los estrategas del neoliberalismo para imponerlo en la región, primero en Chile y otros países del Cono Sur Latinoamericano, y después para expandirlo en la década de los años 90 por todo el continente con la única excepción de Cuba.

Sobre el neoliberalismo conviene señalar que en su dimensión económica, es un modelo que responde a la corriente neoclásica del pensamiento liberal burgués adecuado a las nuevas exigencias del mundo en proceso de globalización.

Los conceptos neoliberales difieren de las tesis del modelo desarrollista, en tanto aquel enfatizaba en un desarrollo con mejor base endógena y la expansión del mercado interno como condición básica para la inserción internacional de América Latina en el mercado mundial, y este lo que persigue es la desregulación de la economía doméstica, la apertura del mercado interno a los flujos de comercio e inversión extranjera y la imposición de una nueva disciplina para los trabajadores en la que el alto desempleo y el bajo salario, son las bases de una competitividad que condiciona una inserción subordinada y dependiente de Latinoamérica a los grandes centros de poder internacional, básicamente a Estados Unidos de América.

³⁶ CEPAL. División de Estadísticas sobre la base de cifras oficiales ofrecidas por los gobiernos. Material fotocopiado. Pág. 3.

Como puede comprenderse, el impacto de ambas estrategias sobre el desempeño de la economía latinoamericana fue diferente. El análisis de esas diferencias constituye el hilo conductor de este trabajo.

a) Los problemas del crecimiento económico. De un período de crecimiento con mayor énfasis en la base endógena latinoamericana a otro con demasiada dependencia de los agentes externos.

A pesar de los límites y contradicciones que lastraban el despliegue del modelo desarrollista cepalino, para la década del 60 y 70 la tasa de crecimiento del PIB promedio anual fue estimada en 5,66%³⁷ y 5,94%³⁸, respectivamente, un resultado que no ha conseguido el neoliberalismo en ningún período.

Cierto es que hacia la segunda mitad del decenio de los años 70, este crecimiento se desaceleró. Al entrar en el decenio de los años 80, la economía estaba en un período recesivo el cual se expresó en un decrecimiento (-0,4% para el período 1980-1985³⁹) cuya responsabilidad los ideólogos del neoliberalismo se la atribuyeron a los déficits del modelo desarrollista.

En el balance general del desempeño de la economía latinoamericana y caribeña para la década de los años 80, la CEPAL reportó que el crecimiento económico había sido sólo de 1,0%⁴⁰ el cual clasifica como el peor resultado de toda la postguerra.

Para la década de los años 90, el PIB de la región registró un crecimiento de 3,3%, que si bien fue algo mejor que el de los años 80 no superó los niveles alcanzados en la década del 70, ni fue de mejor calidad y dimensión social que aquel.

Entre el año 2000 y el año 2003 los impactos de la crisis económica sincrónica en los tres centros de la economía mundial sobre América Latina y el Caribe en su conjunto, se han expresado en un nuevo deterioro de la tasa de crecimiento promedio anual del PIB total y del PIB per cápita que para el año 2000 fue de -0,4%⁴¹ y -1,9%⁴² respectivamente, constituyendo el peor resultado de los últimos doce años.

El crecimiento económico alcanzado bajo las políticas neoliberales es diferente al de los años 60 y 70, al menos en cuatro aspectos que son los siguientes:

1. En la actualidad los períodos de crecimiento económico son cortos, frágiles e interrumpidos y muy vulnerables a los episodios de crisis de la economía internacional, lo cual constituye de hecho un crecimiento intermitente.
2. El crecimiento registrado en los 90 tiene una base endógena más débil que en los 70.

³⁷ CEPAL. Ídem anterior.

³⁸ CEPAL. Ídem anterior.

³⁹ CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*, 1985. Santiago de Chile. Pág. 11.

⁴⁰ CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*, 1999. Santiago de Chile. Pág. 89.

⁴¹ CEPAL. Ídem anterior. Año 2003. Cuadro A-1.

⁴² CEPAL. Ídem anterior. Año 2003. Cuadro A-2.

3. Apenas existen mecanismos regionales capaces de evitar que las crisis y las medidas de ajuste adoptadas en otros escenarios, impacten negativamente en los países de la región (efecto contagio), lo cual es una evidencia de la vulnerabilidad de las economías frente a los choques externos.
4. Hoy se asiste a un crecimiento económico acompañado de un crecimiento geométrico del desempleo, el empleo precario y la pobreza.

Cuarenta años atrás, o sea, en la década de los años 50 y 60, los ciclos de crecimiento de la economía eran más estables y estaban acompañados regularmente por una expansión del empleo o, al menos, una disminución de las tasas de desempleo abierto así como por niveles de pobreza menos traumáticos que los que se registran hoy. Por primera vez en cincuenta años, el crecimiento económico que se está logrando, además de la mala calidad que lo caracteriza, está acompañado por una espiral de desempleo y pobreza nunca antes vista en América Latina y el Caribe.

Por otra parte, el crecimiento promedio anual de los 90 representa una caída de casi tres puntos porcentuales respecto a la década del 70 y, en su base endógena, es más frágil que aquel, en tanto durante este período ha tenido lugar un deterioro de la capacidad de ahorro interno y al tiempo que la participación de éste en el financiamiento de la inversión interna bruta también ha bajado. En 1980, el coeficiente de ahorro interno bruto fue de 29,9% del PIB pero en el año 2001 había bajado hasta 18,6%⁴³.

a) La extranjerización de la economía

La brecha que ha venido dejando la caída del ahorro interno y las fuentes internas de acumulación en el financiamiento de la inversión interna en los países latinoamericanos, ha sido cubierta por los recursos externos en forma de préstamos e inversiones extranjeras, las cuales han incrementado su participación en el financiamiento de la inversión interna bruta de América Latina.

Este fenómeno, a la vez que reinserta a la región en los circuitos financieros de la economía mundial a la manera que más le interesa a los estrategas del neoliberalismo, constituye uno de los canales para la extranjerización de la economía y aumenta su vulnerabilidad ante los sucesivos episodios de crisis de la economía internacional.

Algunas de las formas más evidentes de la extranjerización de la economía son el endeudamiento externo, la dolarización y las remesas que envían los emigrantes. Al cierre del año 2003, los países de reciente dolarización eran Ecuador y El Salvador, mientras Panamá y algunas islas del Caribe Oriental ya habían dolarizado sus economías hace varios años.

En lo que respecta a las remesas, sólo entre el año 2000 y el año 2003 la entrada de estas transferencias se duplicó pasando de 17 mil millones de dólares a 38 mil

⁴³ CEPAL. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2001-2002*. Santiago de Chile. Pág. 63.

millones de dólares⁴⁴. Aunque no se tienen datos exactos del envío de remesas hacia Latinoamérica en los años 60, se sabe que ha crecido en todos los países receptores, aunque los más importantes en el año 2003 fueron México (6 572,5 millones de dólares)⁴⁵, Brasil (4 650 millones de dólares), Colombia (2 431 millones de dólares), Guatemala (1 689 millones de dólares), Perú (1 265 millones de dólares), Honduras (770 millones de dólares), Costa Rica (134 millones de dólares), Guyana (119 millones de dólares), Bolivia (104 millones de dólares), Trinidad y Tobago (59 millones de dólares)⁴⁶.

En un conjunto de países el arribo de remesas significa el 10% -o más- del PIB. Tales son los casos de Haití (17%), Nicaragua (14%), El Salvador (12,6%), Jamaica (10%) igual que la República Dominicana y Ecuador⁴⁷.

Otro aspecto que devalúa significativamente la calidad del crecimiento económico de los años 90, es la oleada de privatizaciones que ha tenido lugar en estas décadas y el flujo de la inversión extranjera asociado a este fenómeno.

El efecto combinado de estos factores se ha hecho sentir en una avalancha de inversión extranjera que busca mejorar la competitividad de sus exportaciones en el mercado mundial por la vía del acceso a materia prima abundante y a un mercado de trabajo donde el bajo costo salarial de la fuerza de trabajo, el alto nivel de desempleo y la tolerancia a las peores fórmulas de explotación asalariada lleva a aceptar un empleo precario para sobrevivir a la crisis. De esta manera, se está invadiendo a la región de zonas francas, parques industriales e industrias maquiladoras en las cuales el componente nacional en la producción manufacturera es muy bajo, aun cuando se registre crecimiento del PIB.

México, un país que en medio de la crisis económica internacional de 1997 a 1999 logró un crecimiento del producto de 3,5 %⁴⁸, aportó sólo un 17 % del componente nacional al producto manufacturero y un 2 % para el caso de la industria maquiladora⁴⁹.

Este fenómeno sugiere al menos tres reflexiones:

- El crecimiento económico bajo políticas neoliberales puede ser condición necesaria pero no suficiente para que aumente la participación nacional en la producción que se realiza al interior de los países.
- La oleada de privatizaciones de los últimos veinte años es uno de los factores esenciales que impiden una mayor participación de los recursos nacionales en la valorización del capital aunque esta tenga lugar en los propios países latinoamericanos, ya que los dueños de estas empresas son extranjeros y piensan básicamente en su ganancia y no necesariamente en el desarrollo endógeno de la región.

⁴⁴Internet. Abril, 2004.

⁴⁵Susana Mas Mok. CIEM, 2004.

⁴⁶Ídem anterior.

⁴⁷Ídem anterior.

⁴⁸CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. 1999. Santiago de Chile. Pág. 89.

⁴⁹Arturo Huerta. Ponencia presentada en el 3er. Evento Internacional sobre la Globalización y los Problemas del Desarrollo. La Habana, Enero del 2001.

- En estas condiciones, el crecimiento económico suele ser un espejismo al interior de las naciones en tanto no demanda insumos nacionales (o la demanda es muy baja) y, por lo tanto, no fortalece la base endógena de la economía.

b) El mercado de trabajo: De la regulación cepalina a la desregulación neoliberal. Una transición traumática para los trabajadores.

En el modelo cepalino el mercado de trabajo se insertaba como una pieza más al objetivo medular de la estrategia sustitutiva de importaciones, o sea, ampliar la demanda solvente de los consumidores para desarrollar el mercado interno.

Una de las fórmulas más importantes para expandir la demanda solvente se fundamentaba básicamente en la expansión del empleo.

En ese momento concreto se conjugaban varias circunstancias internacionales que favorecían una política de crecimiento del empleo. Por un lado, la economía mundial registraba tasas de crecimientos altos y estables y esto expandía sostenidamente la demanda interna en los principales mercados internacionales hacia los que Latinoamérica exportaba sus mercancías. Por otra parte, la función del Estado como agente empleador, propia del modelo keynesiano, promovía una política de crecimiento del empleo público que en algunos países permitió niveles de pleno empleo.

También fue muy importante en ese momento el avance que habían alcanzado las ideas del socialismo y la ofensiva del movimiento obrero internacional en aras de sus reivindicaciones. Esto, condicionaba al capital internacional a hacer determinadas concesiones a los trabajadores, entre las que se encontraban un amplio código laboral en el cual quedaron recogidos sus deberes y derechos, así como las obligaciones del capital respecto al trabajo en lo referente a una mayor seguridad de éste antes, durante y después del ciclo laboral, prestaciones sociales, protección jurídica etc.

Se establecía, así, lo que he identificado como la disciplina keynesiana del trabajo cuya expresión en el contexto del modelo cepalino desarrollista en América Latina se constataba en una relación capital-trabajo en la que los trabajadores habían conquistado derechos que le permitían enfrentar en mejores condiciones las exigencias del capital, que para el caso del proletariado, se concretaban en una mayor seguridad durante y después del ciclo laboral, un nivel más alto de prestaciones sociales, un mayor protagonismo de los sindicatos en la defensa de sus intereses y un respaldo jurídico superior al que se constata hoy.

De esta manera, se lograron los niveles más bajos de desempleo abierto urbano que recoge la historia económica de América Latina y el Caribe en los últimos cincuenta años ya que para los años 70 y los primeros años de la década del 80, esta tasa de desempleo osciló alrededor de 3,8%⁵⁰ de la población económicamente activa de ese momento.

⁵⁰ PREALC. *Dinámica del Subempleo*. Material fotocopiado. Pág. 26.

A pesar del reclamo que hacían los estrategas del neoliberalismo sobre la infuncionalidad de esa relación capital-trabajo para un modelo que se propusiera una buena estabilidad macroeconómica y una inserción positiva en el mercado mundial, lo cierto es que este período coincide con las mejores tasas de crecimiento económico de la región y con niveles de participación de sus exportaciones en el mercado mundial estimados en 18% para 1970⁵¹, una cifra que en 1989 era ya de sólo del 9,7%⁵² y que en el decenio de los años 90 no recuperó los niveles que tenía treinta años atrás.

¿Cuál ha sido la propuesta neoliberal respecto al mercado de trabajo?

En esencia su discurso se basa en una flexibilización del mercado de trabajo y la política laboral. Sin embargo, este término resulta engañoso pues en esencia de lo que se trata es de una amplia desregulación de ese sensible mercado en detrimento de las conquistas sociales y políticas cosechadas por el movimiento obrero internacional durante más de un siglo de lucha.

Los neoliberales se propusieron evitar que cualquier interferencia del Estado o los sindicatos se interpusiera en sus metas de redisciplinar a la clase obrera en función del nuevo patrón de acumulación transnacional, para el cual el desempleo, el bajo salario, la contracción (y hasta desaparición de las prestaciones sociales) y el retroceso en las conquistas del movimiento obrero, eran sólo los instrumentos utilizados para lograr sus objetivos.

En el decenio de los años 90, varias evidencias indican que más allá de la resistencia del movimiento obrero a la disciplina neoliberal del trabajo, los planes de ajuste y estabilización de matiz neoliberal han debilitado a los trabajadores frente al capital. Esto se expresa en varios aspectos: como por ejemplo, la tasa de desempleo abierto urbano más alta de la historia más reciente de América Latina (10,7%)⁵³, los niveles más bajos de contratación colectiva y a tiempo fijo jamás vistos en el continente, los altos niveles de desindicalización o el escepticismo de importantes segmentos de los trabajadores en torno al papel de los sindicatos, el empeoramiento de la seguridad de los trabajadores, la privatización de los fondos de seguro, y la ruptura de los principios de unidad y solidaridad de clases.

Ante esta grave situación, los estrategas del modelo optan por ofertar empleo precario e informal a una parte importante de los trabajadores que son expulsados de las fuentes de empleo moderno y estructurado. De hecho, una y otra variante de empleo constituyen válvulas de escape por medio de las cuales se evacuan las grandes presiones derivadas del alto desempleo imperante en toda la región.

Hacia mediados del decenio de los años 90, la participación del sector informal en la economía de casi todos los países de América Latina y el Caribe había crecido significativamente respecto a cuatro décadas atrás.

⁵¹ UNCTAD. *World Trade and Development Report*. New York - Ginebra, 1999. Pág. 81.

⁵² UNCTAD. *Idem anterior*.

⁵³ CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 2003. Cuadro A-22.

Tabla 1
Empleo informal urbano respecto al empleo total en América Latina a mediados de los años 90. (Porcentajes)

País	Empleo informal
Argentina	45
Brasil	59
Chile	37
Colombia	46
Costa Rica	42
México	48
Panamá	41
Venezuela	43
Perú	55

Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras de la OIT. *Panorama Laboral* de 1997.

A pesar de que en este punto, el neoliberalismo ha logrado algunos de sus más importantes objetivos, el actual deterioro del mercado de trabajo y la debilidad del movimiento obrero frente a la explotación capitalista no se ha revertido como esperaban los estrategas del neoliberalismo, en el alcance de las metas de estabilidad macroeconómica del modelo, en tanto las tasas de crecimiento económico de los 90 fueron inestables, volátiles e inferior respecto a los años 70. Tampoco las cuentas externas de las naciones como por ejemplo, la balanza comercial, la balanza en cuenta corriente, y la propia balanza de pagos, reportaron un buen nivel de estabilidad aunque ciertamente, la hiperinflación fue sofocada pero registrando el nivel más alto de explotación de la clase obrera latinoamericana de la segunda mitad del siglo que recién terminó.

c- De las presiones inflacionarias del modelo desarrollista cepalino a la inflación sofocada de los 90: Costos de una política agresiva para los trabajadores.

Si bien hay que reconocer que en el período cepalino las presiones inflacionarias fueron una “Espada de Damocles” para el mejor desempeño de la economía latinoamericana de los años 60 y 70, no es del todo cierto que en la década del 90 se haya registrado la mejor tasa de inflación de los últimos cincuenta años.

Cálculos publicados por la CEPAL en el 2000, indican que la tasa de inflación promedio de los años 90 fue de 170,0%, aunque haya que reconocer que en la segunda mitad de esa década se reportaron niveles de inflación de un dígito.

Una simple revisión de las tasas de inflación entre 1950 y 1979, permite apreciar niveles inflacionarios que si bien apuntaban al crecimiento entre uno y otro quinquenio, en ninguno de ellos rebasó los dos dígitos.

Tabla 2
América Latina y el Caribe. Tasas anuales de inflación
 (Promedios anuales por periodos en porcentajes)

1950-1954	1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979
13	17	25	19	23	50

Fuente: CEPAL. División de Desarrollo Económico sobre la base de información oficial por los gobiernos, 1980. Material fotocopiado.

Sin embargo, en la década de los años 80 y la primera mitad del 90 -una etapa que coincidió con la expansión del neoliberalismo en la región -la inflación se hizo incontenible (básicamente entre 1988 y 1994) cuando se registró una espiral inflacionaria de tres y cuatro dígitos llegándose en 1990 a reportar un índice de inflación estimado en 1191%⁵⁴.

El “milagro” neoliberal ha sido sofocar esa inflación rebelde que amenazaba las bases mismas de la política de estabilización propugnada por el neoliberalismo.

Ahora bien, ¿Cómo explicarse la reducción de la inflación de los años 80 y la primera mitad de los años 90, si no ha tenido lugar un aumento de la productividad del trabajo, no se han fortalecido realmente las monedas nacionales y el crecimiento económico es más bajo que en los años 70?

Ciertamente, no hay nada de milagroso en la reducción de la inflación de cuatro dígitos de la primera mitad de los 90 a la inflación de un dígito de finales de ese decenio. Lo que está en la base de la caída de la inflación es básicamente el alto índice de desempleo abierto y la precariedad del empleo de las dos últimas décadas del siglo XX.

Las estadísticas revelan una estrecha relación entre el bajo índice inflacionario y la espiral de desempleo que ha tenido lugar en Latinoamérica en los años 90.

Tabla 3
Comportamiento de la inflación y el desempleo abierto en América Latina y el Caribe en los años 90.

Indicadores	1970	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2003
Inflación según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor	198,9	414,4	976,6	1191	25,8	18,2	10,4	10,3	9,6	8,9	9,0
Desempleo abierto urbano	5,8	6,2	6,2	5,8	7,2	7,7	7,3	8,0	8,7	8,6	10,7

Fuente: CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 1996. Págs. 41-42.
 CEPAL. Ídem, 2000. Págs. 88 y 89.
 CEPAL. Ídem anterior, 2003. Cuadros A-22 y A-24.
 CEPAL. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1999-2000*. Págs. 30 y 40.

⁵⁴ CEPAL. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 1990. Pág. 27.

Como se puede apreciar, la contracción de la inflación ha descansado básicamente sobre los hombros de los trabajadores, y si bien una inflación baja es positiva, en tanto puede mejorar el poder adquisitivo del salario nominal y permitir una mayor realización del mismo, el problema esencial que enfrentan hoy los trabajadores es acceder a un empleo que garantice los ingresos necesarios para acceder al mercado.

En los últimos cuatro años (1999-2003) esta tendencia se ha mantenido intacta; la inflación ha sido estabilizada en un dígito⁵⁵, pero el desempleo abierto urbano ha rebasado el 10% de la población económicamente activa. En el año 2002, cuando el nivel de inflación fue de dos dígitos (12,1%)⁵⁶, la tasa de desempleo abierto urbano subió de 9,8% en el 2001 a 10,6%⁵⁷. En el año 2003, el regreso de la inflación a los niveles del decenio de los años 90, implicó subir la tasa de desempleo hasta el 10,7% de la población en edad laboral⁵⁸, el punto más alto en los últimos cincuenta años. Aunque estos datos bastarían para demostrar la relación estrecha que existe entre la contención de la inflación y la espiral de desempleo en Latinoamérica, el drama del desempleo y la precariedad del empleo es mucho más grave pues no sólo existe desempleo abierto urbano, sino también desempleo encubierto y desempleo abierto rural. La OIT estima que la población desempleada de América Latina y el Caribe en su conjunto en el año 2003, era de más de 18 millones de trabajadores.

d- Tipos de cambio: de la defensa de la soberanía nacional a los tipos de cambio extranjerizados.

El tipo de cambio constituye también un aspecto muy importante en cualquier modelo o estrategia de desarrollo económico.

En el contexto del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, muchos países optaron por un tipo de cambio que fuera funcional al patrón de acumulación cepalino, o sea, que permitiera al Estado hacer uso de la política monetaria y fiscal de la nación como instrumento inductor del crecimiento y el desarrollo económico y de defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, bajo políticas neoliberales ha tenido lugar una sensible modificación del tipo de cambio. En los últimos años se ha estado transitando hacia otros tipos de cambio, cuyo objetivo más importante ha sido la estabilización macroeconómica y la reinserción de los países latinoamericanos en el mercado mundial globalizado. Entre estos tipos de cambio figuran, por ejemplo, el tipo de cambio conocido como deslizamiento en banda cambiaria y las distintas formas de dolarización.

La crisis asiática y las turbulencias financieras internacionales de los años 1997 y 1998, cuyo impacto al interior de las economías de América Latina y el Caribe se hizo sentir en un decrecimiento económico estimado en 0,3% en 1999,

⁵⁵ CEPAL. Ídem anterior. Año 2003. Cuadros A-22 y A-24.

⁵⁶ CEPAL. Ídem anterior. Cuadro A- 24.

⁵⁷ CEPAL. Ídem anterior.

⁵⁸ CEPAL. Ídem anterior.

evidenciaron la fragilidad de los tipos de cambio adoptados para enfrentar las consecuencias de los choques externos procedentes de los episodios de crisis de la economía mundial.

Países como Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, entre otros abandonaron el sistema de banda cambiaria, en el cual la moneda nacional se cotizaba respecto al dólar dentro de unos límites, que en caso de desajustes graves, eran defendidas por las autoridades monetarias nacionales y transitaron hacia un tipo de cambio flotante, en cuyo contexto la tasa de cambio de la moneda nacional fluctuaría respecto al dólar en relación a la oferta y demanda de dinero y al comportamiento de la economía local.

Otros países, por el contrario, asumieron el tipo de cambio fijo cuya expresión más evidente en este momento se localiza en Ecuador y El Salvador y estuvo vigente en Argentina durante el decenio de los años 90 bajo la forma del régimen de convertibilidad asumido por el Presidente Carlos Menem. Al margen de las diferencias de matices entre una y otra manifestación del tipo de cambio fijo, los tres clasifican en lo que se conoce como tipo de cambio extranjerizado debido al protagonismo que asume una moneda extranjera –esencialmente el dólar de Estados Unidos– en el sistema cambiario local y en el comportamiento de la economía.

Los aspectos del desempeño interno de la economía latinoamericana hasta aquí abordados, introducen importantes cuestionamientos al logro de las metas de estabilización económica enarboladas por los defensores del modelo en los últimos veinte años y son una expresión de su crisis.

Bibliografía

- CEPAL. *Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 1982, 1985, 1990, 1993, 1998, 1999, 2000 y 2003.
- CEPAL. *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*, 1993, 1996, 1999, 2000 y 2002.
- CEPAL. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, 1884, 1997-1998/ 1999-2000/ 2000-2001.
- CEPAL. *La Brecha de la Equidad*, 1997.
- CEPAL. *Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile, 2003.
- PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano*, 1991, 1994, 1999, 2000.
- UNCTAD. *World Trade and Development Report*. New York-Ginebra, 1999 y 2000.
- FNUAP. *Estado Mundial de la Población*, 2000.
- Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES). "Neoliberalismo y Políticas Alternativas". Quito, 1987.
- Celso Furtado. *Breve Historia Económica de América Latina*. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1972.
- Nilson Araújo de Souza. *O Colapso do Neoliberalismo*. Editora Global. San Pablo, 1995.
- Oswaldo Martínez. *Neoliberalismo en Crisis*. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1999.
- CIEM. *La Economía Mundial. Los últimos veinte años*. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2002.

© CIEM 2004